

ROGELIO FRIGERIO

COLECCION
PENSAMIENTO POLITICO

DIEZ AÑOS DE LA CRISIS ARGENTINA

Diagnóstico y programa
del desarrollismo



SUDAMERICANA/PLANETA

Director de Colección: Arturo Infante Peñasco

Asesor: Sergio Villarruel

Diseño de tapa: Sergio Pérez Fernández

351262*

© 1983 Rogelio Frigerio-

© 1983 Editorial Planeta S.A.I.C.

Viamonte 1451 - Buenos Aires, Argentina

ISBN 950 - 37 - 0009 - 4

Hecho el depósito que previene la Ley 11.723

Impreso en Argentina

INDICE

Justificación	9
CAPITULO I	
La Argentina y el mundo. 1973-1983: Una década difícil	13
1. La bipolaridad militar como base de la coexistencia	13
2. Las luchas sociales	15
3. La relación desarrollo-subdesarrollo	17
4. Vigencia de la nación	21
5. Los factores monopólicos	24
6. Los cambios ocurridos	30
7. Reafirmación de la coexistencia	35
8. Crisis y subdesarrollo en América Latina	38
9. El retroceso argentino	45
CAPITULO II	
Populistas y liberales: Una sola política de fondo	51
1. Dos apariencias, una identidad	51
2. El populismo, una estrategia antipopular	59
CAPITULO III	
1976-1983: Una comunidad más pobre, una país más subdesarrollado	71
1. Diagnóstico errado: "Una economía básicamente sana"	72
2. El salario, "variable de ajuste"	76
3. El petróleo, otra vez testigo del fracaso ✓	78
4. El peso muerto del sector público	80
5. "Apertura económica": otro estatuto del subdesarrollo	84
6. La bancarrota financiera	87
CAPITULO IV	
Los resultados del plan aperturista	91
1. Una estructura económica y social más débil	93
2. El desmantelamiento industrial	94
3. Degradación de la fuerza de trabajo	96
4. Los golpes contra el campo	100
5. Una década perdida, el futuro comprometido	101
	5

CAPITULO V

Las heridas abiertas por la violencia	107
1. El terrorismo, un brazo de la pinza antinacional	107
2. La represión, instrumento del modelo antinacional	112
3. Reparaciones urgentes e insoslayables	118

CAPITULO VI

Crisis y vitalidad de la cultura nacional	125
1. El concepto de cultura	126
2. El deterioro de la cultura nacional	129
3. El retroceso educativo	135
4. Asfixia del arte y la creatividad	141
5. Los desafíos de la cultura nacional	146
6. ¿Existe una cultura latinoamericana?	149

CAPITULO VII

Proyección de la crisis: La política exterior	161
① Malvinas: "una huida hacia adelante"	167
a) Documento del 22 de abril de 1982	169
b) Documento del 15 de junio	176
c) Consecuencia: la situación militar	177
② Beagle, la amenaza a la paz	179
3. La política exterior hacia América Latina	183
a) Relaciones con nuestros vecinos	183
b) Los otros países de América Latina	186
c) Ofensiva integracionista	189
4. Este-Oeste, Norte-Sur: contexto y prioridades de la política exterior nacional	195
a) Entendimiento necesario con los Estados Unidos	197
b) Europa y Japón: lazos propicios para el desarrollo	200
c) Relaciones con los países socialistas	201
⑤ Recesión, deuda externa y política internacional independiente	203

CAPITULO VIII

Inestabilidad política crónica, consecuencia de la crisis	209
1. 1963: Falta la legitimidad democrática	210
2. 1967: El monetarismo disipa el consenso	212
3. 1973: Olvido del programa frentista	213
4. 1976: El modelo antinacional y antipopular	214
5. 1983: Irrepresentatividad de las dirigencias	217
6. Movilización social como respuesta al caos	220

CAPITULO IX

La propuesta económica del desarrollismo	225
1. La potencialidad argentina	225
② Un sinceramiento indispensable	228
a) Salarios	228
b) Crédito	229
c) Tipo de cambio	230
d) Sector público	231
3. Efectos funcionales del sinceramiento	233
④ Un programa capaz de enfrentar la crisis	235

CAPITULO X

La construcción de la democracia	241
----------------------------------	-----

JUSTIFICACION

La amabilidad con que los editores me invitaron a preparar este libro sólo puede equipararse a la tenacidad y energía con que me recordaron el cumplimiento de los plazos en que los originales debían enviarse a la imprenta. Gracias a su firmeza, la obra pudo ser entregada y llegar a manos de los lectores de acuerdo con el plan editorial que responde por otra parte a una necesidad social manifiesta.

Absorbido por los múltiples compromisos políticos que derivan de mis responsabilidades en esta etapa de la vida nacional, he pensado sin embargo que debía hacerme de tiempo para reunir en un solo volumen el análisis y las reflexiones sobre los últimos años que nos tocaron vivir, porque los grandes acontecimientos y las dificultades estructurales que enfrentamos están condicionando directamente el presente y los desafíos que de él surgen.

Ese repaso histórico tiene gran actualidad puesto que se vuelca en interrogantes que llegan a ser dramáticos cuando se refieren a la necesidad de la paz, de que cese el terror y de que nuestros compatriotas tengan asegurado su trabajo, su salario, su techo, su pan y la educación de sus hijos.

Con esa intención trabajé en el contenido de este volumen sin privarme de incluir o reelaborar, cuando hizo falta, materiales dispersos escritos anteriormente, sin temor a incurrir en alguna repetición, guiado por la preocupación de exponer, lo más orgánicamente posible, nuestra opinión sobre las cuestiones más candentes que conmueven a los argentinos. A los desarrollistas

nos guía la aplicación de un método que nos sirve al mismo tiempo para estudiar los problemas nacionales, organizar nuestro pensamiento y encadenar nuestras acciones políticas con el propósito de modificar la realidad.

Tengo la esperanza de que estas páginas contribuyan a plantear el debate político en torno de las cuestiones de fondo. No otro objetivo orienta nuestra conducta militante. Ese es el sentido también de nuestra presencia en la liza electoral: exponer la propuesta del MID y demostrar el amplio respaldo que posee en la comunidad argentina el programa nacional que promueve la integración y el desarrollo. Esa fuerza forjará el Frente Nacional que el país requiere para salir de la crisis.

R.F.

CAPITULO I

LA ARGENTINA Y EL MUNDO. 1973-1983: UNA DECADA DIFICIL

En múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años hemos tenido oportunidad de señalar cuáles son, a nuestro juicio, las grandes contradicciones del mundo contemporáneo. Ellas se registran: a) entre el Este y el Oeste, en razón de los disímiles y antagónicos sistemas ideológico-políticos, b) entre los trabajadores y sus empleadores, por la retribución del trabajo, y c) entre el mundo subdesarrollado y el desarrollado, debido a la acen- tuación de la brecha que separa a los países industrializados de los que están cada vez más sumergidos. Esta última contradic- ción es la más significativa, puesto que concierne a las dos terce- ras partes de la humanidad que se encuentran en condiciones de creciente pauperización.

Estas cuestiones, que corresponden al mundo que se fue dise- ñando desde la segunda posguerra, han sufrido en los últimos años modificaciones que conviene analizar. En algunos casos se ha producido la agudización de sus términos; en otros, la confrontación toma caminos nuevos.

1. La bipolaridad militar como base de la coexistencia

En el caso de la contradicción entre el Este y el Oeste, es de- cir, entre el sistema capitalista y el sistema socialista, la imposi-

bilidad práctica de la guerra como modo de resolución del antagonismo ha cedido el paso a la competencia económica, que no excluye la cooperación y el intercambio. La coexistencia pacífica, a la que obliga el peso de los arsenales nucleares que multiplican la capacidad de mutua destrucción, se va transformando en una competencia activa, una puja en la que la primacía la obtiene quien logre producir más y a más bajo costo.

La bipolaridad militar, que subyace e impele a la coexistencia, ha sido a veces puesta en duda por observadores superficiales que evaluaron incorrectamente la importancia que han alcanzado la Comunidad Europea, China o Japón. Este fenómeno no modifica, sin embargo, la supremacía absoluta de Estados Unidos y la Unión Soviética, en todos los campos relacionada con la seguridad mundial. En realidad, la distancia entre las dos superpotencias y el resto de los países, en vez de reducirse, se amplía en función del proceso y el ritmo alcanzado en la acumulación tecnológica.

A comienzos de la década del '70 la era de la supremacía norteamericana había terminado. La Unión Soviética era por lo menos equivalente en poder estratégico y comenzaba a insinuar ventajas en ciertas áreas. Esto se debía en parte a los adelantos de los rusos en algunos campos de la física y de la matemática, así como al incremento constante de los gastos de defensa soviéticos que aumentaron sostenidamente en términos reales, particularmente durante el ciclo de crisis del poder presidencial estadounidense iniciado con el episodio de Watergate.

La política del presidente Reagan se ha orientado ahora a restablecer el equilibrio allí donde éste puede haberse visto alterado. De allí la enorme importancia del anuncio que hizo el primer mandatario norteamericano cuando dio a conocer su auspicio al desarrollo de las armas antibalísticas a partir del rayo láser, que podrían introducir cambios sustanciales en el esquema defensivo actual y quizás abaratar significativamente su costo, liberando recursos que hoy se esterilizan en la fabricación de armas sofisticadas. Esta referencia permite recordar, de paso, que la supremacía militar cualitativa de las superpotencias está íntimamente ligada a su supremacía, también cualitativa, en el campo de la investigación científica y tecnológica.

Es sabido que la proliferación bélico-nuclear —efecto indeseado de la difusión de la tecnología atómica— no pone en serio peligro la bipolaridad militar que ejercen las superpotencias, puesto que la disposición de un arsenal significativo no depende sólo de la aptitud para "fabricar la bomba", sino de la capacidad económica de convertirla en un arma efectivamente operable. Los países que ignoren este aspecto específico de la coexistencia pacífica verán disminuidas sus posibilidades de influencia y proyección internacional. Ese ha sido en particular el caso de la India, país que vio detenerse bruscamente su plan de desarrollo nuclear, aun para fines pacíficos, a partir de que detonó su primera bomba atómica.

2. Las luchas sociales

La contradicción entre las clases sociales no ha desaparecido, pero sufre modificaciones en la forma concreta de su desenvolvimiento.

Por una parte, se ha afirmado una tendencia ya manifiesta en las décadas anteriores en lo que se refiere a la decadencia en la coordinación internacional de esas luchas. No existe un movimiento obrero mundial que actúe como tal. Las internacionales comunista y socialista se convierten de hecho en oficinas de difusión ideológica y contenido burocrático, que vinculan entre sí a diversos partidos políticos asociados en el plano ideológico, pero no llegan a trascender las luchas efectivas que libran los trabajadores.

En segundo término, en forma correlativa con lo anterior, esas luchas tienen lugar en el seno de las sociedades nacionales, único marco en el que prospera la organización sindical. El ejemplo europeo, donde la integración supranacional ha recorrido un camino mayor a partir del carácter desarrollado que aportan los integrantes de ese proceso, permite visualizar que este fenómeno se vincula estrechamente con el dato primordial del mundo contemporáneo, constituido por la vigencia de la nación.

No son ajenos al hecho de que la lucha de clases se constriñe a los marcos nacionales, los progresos realizados en materia de organización sindical y de conciencia de la clase obrera, en lo que hace a sus intereses y a la forma de defenderlos.

Las luchas y contradicciones entre las clases adquieren así un carácter más definido en sus contenidos reivindicatorios. Aumenta la disciplina laboral y la sindical. Las demandas se plantean concretamente y por lo mismo son sostenidas con firmeza. La negociación se hace una instancia recurrente de las luchas, y los progresos sociales acompañan a la expansión de la producción y las mejoras en la productividad.

En los países subdesarrollados, el panorama no es tan claro. En condiciones de atraso y estancamiento, se exagera estérilmente el antagonismo de las clases, y la violencia manifiesta o larvada se instala desquiciando y anarquizando las relaciones sociales. Violencia política y social son secuelas inescindibles del subdesarrollo.

La ausencia de una base económica que permita satisfacer los legítimos reclamos sociales y asegurar al mismo tiempo el mantenimiento de la expansión, torna de cumplimiento imposible la cuestión planteada. Los obreros reclaman legítimamente y los empresarios no pueden satisfacer las demandas; lo cual deviene en aumento de salarios nominales de carácter inflacionario o, en el otro extremo de una ecuación política sólo formalmente diferente, en represión de las demandas obreras.

No hay otra salida que el aumento progresivo del capital por habitante, para asegurar el crecimiento del ingreso. El desarrollo se transforma así en un objetivo común a las diversas clases sociales, aun a las clases medias constituidas por profesionales, técnicos, comerciantes, agentes de servicios, etc. En el estancamiento estos sectores no pueden desenvolverse y progresar y, en muchos casos, se ven obligados a emigrar.

Las luchas sociales aparecen así íntimamente vinculadas a las luchas por el desarrollo nacional y por el afianzamiento de la soberanía. Aquéllas pueden desenvolverse y alcanzar niveles más altos sólo en el marco de una expansión sostenida. Esto no elimina las contradicciones, pero establece un camino por donde

ellas pueden irse realizando progresivamente. El crecimiento económico acelerado es, por otra parte, lo único que puede dar respuestas a las expectativas de las masas, que crecen al mismo ritmo con que aumenta la conciencia de los pueblos acerca de las posibilidades que les ofrece el desarrollo contemporáneo.

Una deformación de las luchas sociales es la ilusión de que los beneficios formales reemplazan el progreso que deriva de una elevación sostenida del ingreso en un proceso de desarrollo. La ideología populista, que en los hechos resulta antagónica de los intereses populares, propugna soslayar el crecimiento económico acelerado y suplantarlo por medidas de distribución del ingreso que traerían supuestas satisfacciones sin necesidad de pasar por la etapa previa de la acumulación. La falacia de esta propuesta se demuestra tanto en el plano teórico como en la experiencia histórica de los pueblos que han pretendido eludir el proceso de inversión con diversas formas de socialización —desde el despliegue de la seguridad social hasta el cambio del sistema político— sin que por ello hayan logrado sobrepasar su condición de países subdesarrollados.

La ilusión de la asistencia suplanta en esos casos la conciencia de la necesidad del trabajo y la acumulación, con lo cual se crea un nuevo factor de perpetuación de la miseria material.

3. La relación desarrollo-subdesarrollo

Empecemos por descartar un eufemismo. En la jerga que imponen los burócratas internacionales se suele hablar de países "en vías de desarrollo" o "en desarrollo" para designar a los pueblos que se encuentran sumergidos y cuya condición objetiva es la de ser proveedores de materias primas y compradores de bienes industriales que se producen en gran escala en el mundo desarrollado. La condición de país subdesarrollado no es en sí misma una posición caracterizada por el dinamismo y la transformación. Los países subdesarrollados tienden —en función del mecanismo internacional al que se encuentran sometidos— a permanecer en esa condición, de no mediar una acción cohe-

rente por parte de toda la comunidad para superarla a marchas forzadas. Dicho con el lenguaje de las encíclicas papales, los pueblos pobres "son cada vez más pobres" y los ricos "cada vez más ricos".

Consecuentemente, lo único expansivo es el desarrollo, que con su gran dinamismo acerca aceleradamente a los pueblos que gozaron de sus beneficios a los umbrales de una nueva sociedad.

Las dos terceras partes de la humanidad, como ya dijimos, se encuentran en el mundo subdesarrollado. Pero esa mayoría sólo consume el 10 por ciento de la energía generada en todo el planeta, produce una porción equivalente del acero —que es el indicador más elocuente del grado de industrialización— y aporta apenas el 21 por ciento del producto mundial.

El mundo desarrollado fabrica el 65 por ciento de los bienes que se vuelcan al comercio mundial y se beneficia por el intercambio de bienes de alto valor incorporado por bienes de bajo valor. Ese fenómeno, conocido como el deterioro en los términos del intercambio, que sufren los países subdesarrollados, se ve reforzado por el manejo monopólico de los precios internacionales.

Todo esto es causa de que los países subdesarrollados sean crónicos perdedores y vean achicarse permanentemente su capacidad de pagos externa. Mientras un polo del mundo crece sin detenerse —aun soportando disminuciones en su velocidad de expansión—, el otro ve agravarse todos los problemas que lo caracterizan.

Sin embargo, la suerte de uno no le es indiferente al otro, puesto que se encuentran profundamente vinculados y no sólo por el hecho de que todos forman parte del mismo género humano. Desarrollo y subdesarrollo son términos contradictorios de una misma realidad en la cual se transfiere sistemáticamente de uno a otro extremo la riqueza producida, a través del deterioro en los términos del intercambio.

Los fenómenos ocurridos en los últimos años han ayudado a extender la conciencia universal de estos problemas. Por una parte, los países desarrollados viven una crisis propia y vincula-

da a su modelo de crecimiento; por otra, los subdesarrollados enfrentan la acumulación de sus problemas, ven dificultada la colocación de sus productos y abultadas sus deudas, lo cual restringe aún más su capacidad de compra.

En la medida en que las fuerzas de producción del sector desarrollado son de magnitud mundial, requieren un mercado también mundial como correlato de esa potencialidad. La circunstancia de que dicho mercado no exista, por la insolvencia estructural de los países subdesarrollados, es una clave de la tendencia recesiva que afecta a todos los países industriales, incluidos los socialistas, como consecuencia de la creciente interdependencia de aquellas fuerzas productivas de dimensión planetaria.

Esta situación es inherente a la relación desarrollo-subdesarrollo y era totalmente perceptible hace varias décadas. La etapa de gran prosperidad que se extendió desde los años '50 hasta la llamada crisis del petróleo de 1973 se debió justamente a que la expansión fue posibilitada por un consumo energético que dejó de lado el costo de reposición del petróleo, falsamente barato.

Por la vía de ese subsidio se consiguió reemplazar transitoriamente la necesidad de transformar la estructura de los países subdesarrollados, que a su vez experimentaron un ciclo de crecimiento que algunos pretendieron confundir con el verdadero desarrollo. La última década ha sido testigo de la exteriorización de conflictos que venían incubándose con anterioridad, pero que aún no habían estallado. Ellos salieron a la superficie al aumentar las diferencias entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

A la transferencia de renta implícita en la relación de intercambio —ya que es menester exportar cada vez mayor cantidad de la propia producción para importar la misma cantidad de productos industriales—, se suma ahora la que deriva del endeudamiento y del desequilibrio en los servicios financieros. Este endeudamiento está vinculado de manera muy íntima con los desequilibrios comerciales de los últimos años que, por otra parte, son consecuencia de desintegración de las estructuras nacionales de producción.

Las soluciones comercialistas propuestas desde diversos foros internacionales se enfrentan con el fenómeno inexorable del deterioro en los términos del intercambio que perjudica a los productores de bienes no industriales. Una vez admitido esto último, corresponde una política que vaya más allá de las meras exhortaciones voluntaristas que no pasan de recomendaciones de ejecución imposible, puesto que los países subdesarrollados, mientras no modifiquen esa condición, están condenados a perjudicarse cada vez más en la relación comercial.

A todo ello se ha agregado el creciente proteccionismo de los países industriales y su agresiva penetración en el comercio de exportación de productos que antes eran exclusivamente ofertados por los países subdesarrollados. El proteccionismo, tanto europeo como norteamericano, se practica en vastas áreas de la producción interna, y por razones tanto sociales como económicas. Los países altamente integrados defienden esa integración, y protegen, en consecuencia, a sus grupos sociales contra las agresiones externas.

Por otra parte, la revolución tecnológica y los recursos disponibles permiten elevar drásticamente la producción agrícola-ganadera. Una utilización más eficiente del factor tierra lleva al incremento de la producción agraria, aun recurriendo a subsidios masivos. Como esa máquina de producción tiene capacidades que exceden el consumo local, genera masas de excedentes que se vuelcan al comercio mundial y dislocan los mercados tradicionales. Caducan así los criterios de ventajas comparativas según la antigua división internacional del trabajo; ventajas comparativas que se diluyen con el avance de la tecnología.

En las relaciones comerciales, además del factor perturbador introducido por las oscilaciones en el precio del petróleo, la situación de los países subdesarrollados ha empeorado. Esta afirmación se puede ilustrar con el ejemplo del precio del azúcar. En este momento ese precio no cubre ni siquiera el 50 por ciento del costo de producción en la mayoría de los países que cultivan caña; para que se pueda medir la gravedad de la situación y lo irrisorio que resulta el subsidio a la producción de remolacha azucarera en Europa Occidental, que es sin embargo explicable

desde la perspectiva de las necesidades internas de los países que practican esas subvenciones.

A su vez, la creciente masa de endeudamiento, a la que hemos hecho referencia, que hoy afecta a gran parte de los países subdesarrollados, resulta de la carencia de recursos propios, cada vez más escasos por las tendencias antes señaladas. Es verdad que a este desmesurado endeudamiento han contribuido políticas de grave despilfarro, como las practicadas en la Argentina al servicio de un esquema de destrucción de industrias existentes, pero no cabe duda que este cuadro financiero tan amenazador tiene explicaciones económicas y por esto no puede resolverse con medidas que no atiendan prioritariamente a resolver las deficiencias productivas.

La contradicción desarrollo-subdesarrollo se ha agudizado en los últimos años, y esto plantea la urgencia de establecer, a escala planetaria, políticas capaces de lograr una efectiva superación. Bien que sólo las naciones tienen aptitud para concebirlas y ejecutarlas concretamente.

4. Vigencia de la nación

Un repaso de las tendencias internacionales no podría hacerse sin una referencia al vigor que mantienen las nacionalidades que se han afianzado como el vehículo apropiado para expresar los intereses de los pueblos y garantizar la satisfacción de sus necesidades.

La definición de nación que utilizamos desde hace dos décadas y media ha probado su rigor y soportado su verificación empírica. La nación es una categoría histórica que abarca, integra y armoniza en su universalidad a todas las regiones, grupos sociales, actividades económicas y las corrientes ideológicas o políticas. El Estado nacional es, a su vez, la estructura política que preside aquella unidad y la expresa en una acción coherente.

Siendo la nación una categoría cuya vigencia es indudable, puesto que a ella tienden hasta los pueblos que trabajosamente persiguen la constitución de una identidad propia —fenómeno que ocurre en el caso de las ex colonias que acceden a la forma de Estado aun antes de haber consolidado su condición na-

cional—, es indispensable atender a las consecuencias que derivan en materia de política internacional. Esto cuenta no sólo en el plano de las relaciones diplomáticas, sino también en el de las relaciones económicas, financieras y comerciales.

El Estado nacional se convierte así en uno de los protagonistas de la política internacional. Quienes creyeron que el Estado nacional había cumplido su ciclo —apoyados en el hecho de la aparición y creciente afianzamiento de las superpotencias, del proceso de integración supranacional europeo o en la creciente influencia de las grandes corporaciones—, se encontraron a fines de la década del cincuenta con un fantástico refloreamiento del número y del vigor de las entidades estatales. La última década ha sido, en cambio, testigo de la irrupción de todos esos estados en los foros internacionales. La confusión entre la forma jurídico-política *Estado* y su condición nacional (que no se obtiene sino en la medida en que aquél expresa la unidad compleja y dinámica que supone el accionar de todos los sectores y clases sociales en una misma dirección de marcha), trasladó a un plano retórico no pocas de las actuaciones estatales en los debates políticos y diplomáticos. Esa desviación no le quita entidad ni perspectivas al fenómeno nacional y en todo caso marca un rumbo que deberá ser corregido como necesidad del propio desenvolvimiento de las naciones.

De todos modos, el Estado, como modelo de organización, ha alcanzado su etapa de máxima difusión con el proceso de descolonización que llevó a la independencia a los pueblos que hace pocas décadas todavía formaban parte de los imperios europeos. Por cierto que no se trata de una categoría idéntica a la que nació hace varios siglos en Europa y se difundió más tarde en América, pero es la heredera de aquélla. La diferencia fundamental estriba en que el Estado nacional moderno —particularmente en los países subdesarrollados y en la etapa de transición hacia formas sociales superiores— se muestra crecientemente apto para articular y representar legítimamente las diversas clases y sectores sociales que componen la nación. Durante ese tránsito deja de ser el instrumento de una clase social para expresar al conjunto y dirigir su desarrollo hacia los niveles más altos de la convivencia. Esos niveles son a su vez inseparables de

la necesidad de resolver los desafíos de la base material sobre la cual pueden preservarse las identidades nacionales y desenvolverse en plenitud el genio de cada uno de los pueblos que componen la humanidad.

El Estado, como forma de unidad política, se ha hecho tan irremplazable que hasta entidades a primera vista carentes de viabilidad histórica han asumido ese modelo cuando la forma colonial no era más sustentable, en no pocos casos auspiciada esa mutación por los propios poderes coloniales.

La dimensión continental y poblacional de China o la India no basta para que esos grandes países integren una especie diferente de la de cualquier Estado mediano o pequeño de África o América Latina. El proceso de descolonización ha demostrado, además, que la única forma de construir una identidad nacional y, en consecuencia, un proceso de desarrollo para pueblos que podían encontrarse aún en estado tribal, era aferrarse a las fronteras trazadas por los imperios coloniales. Las colonias eran estados territoriales privados de soberanía. Al recuperarla, la integridad territorial pasó a constituirse en el primer valor a ser preservado. Inmediatamente después se planteó la necesidad de asegurar la realización plena de esas nuevas naciones, lo que puso el desarrollo en el centro de la problemática mundial. Valga como referencia, en favor de la conciencia universal de esta prioridad, el hecho de que las Naciones Unidas declararon la década del '60 como la del desarrollo y cuando finalizó, lo volvieron a hacer para la del '70 en lo que podría interpretarse como una denuncia de que esa aspiración fundamental seguía y sigue incumplida para la mayor parte de los países.

La necesidad de defender en un primer momento la integridad territorial con mucha firmeza explica por qué los países subdesarrollados se opusieron firmemente a tendencias secesionistas, como las de Biafra o Katanga. Y allí también habrá que buscar una parte sustancial de la explicación sobre por qué han fracasado los intentos prematuros de integración regional, promovidos en África, en América Latina y en áreas donde parecían darse condiciones geográficas e históricas favorables, como en América Central.

Comprender que el Estado nacional es la expresión política

de la alianza de clases y sectores en la realización de un programa común, tiene también interés hacia afuera, puesto que ese dato lo exige el ineludible punto de partida de toda política exterior. Sobre este punto volveremos más adelante.

5. Los factores monopolícos

La ley económica de la creciente concentración y centralización es de cumplimiento objetivo, como todas las leyes sociales, y se desenvuelve como una tendencia inexorable. No cabe aquí demostrar su existencia cuando ya se ha hecho evidente en el curso histórico.

Conviene recordar, sin embargo, que esa ley se cumple también en las economías socialistas, donde es titularizada por los grandes conglomerados que organizan la producción y el comercio. En el mundo capitalista, la concentración y centralización se expresa en enormes corporaciones, la mayoría trasnacionales. Ellas reúnen el más alto nivel de la aplicación de la ciencia a la producción, de la técnica, del conocimiento de los mercados, del manejo de la economía y de las finanzas.

Bajo control monopolíco se encuentra, por ejemplo, lo fundamental del comercio mundial de los productos agropecuarios y mineros. Como ésa es la producción primordial y a la vez moneda de compra de los países subdesarrollados, la influencia monopolíca manipula los mercados y los precios, lo cual es un perjuicio adicional al funcionamiento objetivo del deterioro en los términos del intercambio. Por ese camino, el interés monopolíco se enfrenta directamente con el de los países subdesarrollados que aspiran a obtener de su comercio los recursos para solventar sus necesidades.

También se encuentra bajo control monopolíco la producción de los bienes básicos intermedios que son comprados por los países que carecen de elaboración propia de productos como el acero, los insumos químicos y petroquímicos, combustibles, otras materias primas industriales, máquinas y herramientas, etc. Como corolario, asimismo, el monopolio controla los principales movimientos del capital financiero a nivel internacional.

Lo hace mediante su participación en la banca internacional y la capacidad de influencia que ejerce sobre los organismos mundiales de crédito.

La presencia del monopolio es de tal significación que ignorar su dimensión y su influencia en la economía mundial sólo puede causar graves errores.

Se ha dicho con razón que el sistema monopolíco titulariza el poder económico en el mundo. En esa condición tiene una capacidad de planificación de carácter planetario, que le permite realizar ajustados estudios de mercado e intervenir para modelarlos en su provecho, bajar los costos, eliminar la competencia, aumentar la tasa de beneficio, dominar el mercado con sus empresas.

Al concentrar los mayores recursos de capital, se encuentra también en condiciones de controlar la evolución tecnológica y su fabulosa expansión, característica de nuestra época. Ello le permite incorporar los cambios técnicos al proceso productivo de modo sistemático, con lo cual la producción alcanza un ritmo y un volumen sin precedentes, provocando una mutación respecto de la primera etapa de la acumulación capitalista y el desenvolvimiento de los países industriales, en la que el ritmo de formación de capital se correspondía y homologaba con el ritmo de los avances tecnológicos.

Después de ese inventario no puede extrañar que el peso del monopolio sea cuantitativamente enorme. No se manifiesta sólo en el plano de las relaciones económicas, sino que también debe computarse su capacidad de influir en los mecanismos políticos de los países, en la educación y en la opinión pública mediante la propaganda directa o a través de los medios de comunicación. Mediante esa gravitación puede intervenir en los procesos políticos internos, auspiciar decisiones, inducir golpes de Estado, favorecer a determinados grupos y perjudicar a otros, estimular la confusión y el caos, y aun promover la guerra. Todo ello en el ejercicio de su posibilidad de determinar las relaciones económicas mediante el control de la producción, los precios y los mercados internacionales, que se extiende en incidencias tales como la de modelar la ideología de sectores sustanciales de las clases dirigentes.

La existencia y la acción del monopolio, por una parte, no puede impedirse mediante el voluntarismo antimonopolista o antimonopolista. El monopolio existe en razón de las tendencias objetivas hacia la concentración y centralización de la economía, que operan con independencia de la voluntad. Conocer el funcionamiento de esa ley permite, en cambio, utilizar en provecho de la nación las fuerzas ciegas que guían la acción monopolística. La planificación que realiza el monopolio sigue los criterios de la ley que lo engendra. Y con ello se diferencia, y frecuentemente se opone, a los intereses nacionales. Pero el Estado, como organización política capaz de expresar la voluntad de los pueblos, está en condiciones de determinar las áreas en las cuales el aporte de capitales, tecnología, investigación, recursos financieros y racionalización de la producción, puede objetivamente coincidir con las necesidades de desenvolver e integrar la estructura productiva; lo cual, en la Argentina, supone promover un desarrollo acelerado, a partir de la erección de las industrias básicas y el despliegue de una completa infraestructura de comunicaciones y transportes.

A la magnitud ineludible del monopolio hay que oponer la superioridad cualitativa de la nación, que permite aprovechar esa potencialidad en beneficio de su propia realización. Esta superioridad cualitativa está referida a los elementos de que dispone la nación para proyectarse en el mundo con una personalidad propia, que se resumen en su perfil cultural intransferible, las raíces históricas que permitieron forjarlo, los lazos de solidaridad que existen en su seno, la conciencia nacional y la decisión política de desenvolver todas las potencialidades materiales y espirituales que se poseen y que no pueden frustrarse.

La voluntad nacional puede expresarse con éxito, aun en un mundo donde el poder económico está cada vez más en manos del monopolio, a condición de que fije una estrategia apta para promover el desarrollo. El instrumento principal de esa voluntad colectiva que se manifiesta en forma unitaria es el Estado. Pero la condición nacional para el Estado no se logra sino mediante la determinación del programa político que resume las aspiraciones de toda la comunidad y establece los instrumentos que permitirán realizarlas. Un Estado burocratizado, hipertro-

fiado, que es incapaz de orientar el proceso de desarrollo y de presidirlo, no puede exhibir su condición nacional. Ese Estado sirve pasivamente al esquema transnacional regido por el monopolio y hasta lo hace activamente cuando se instalan en su cúspide representantes directos de la estrategia antinacional. Esto explica por qué no hay desarrollo nacional posible sin lucha política para imponerlo.

La relación dialéctica nación-monopolio y su correcto conocimiento teórico es lo que permite determinar el papel del capital extranjero en función liberadora. La utilización del capital extranjero permite cortar los lazos de la dependencia cuando se aplica a los rubros prioritarios de la inversión en el sentido de integrar la estructura productiva. Esto permite recorrer aceleradamente los tramos fundamentales hacia el desarrollo, así como disminuir el costo social que una acumulación de esa naturaleza supondría en caso de hacerse sobre la base del ahorro compulsivo. Es en cambio un factor de mayor sujeción a los intereses externos cuando se aplica a la especulación financiera o a actividades menos reproductivas que el monopolio auspicia en beneficio de su planificación transnacional.

A nuestro país, por ejemplo, le interesa desarrollar aceleradamente la Patagonia por razones políticas y económicas. Esto contradice los planes del monopolio, puesto que los recursos que demandaría pueden ser asignados con mayor rentabilidad a otros rubros y zonas más próximas a los mayores mercados. Al monopolio no le resulta atractivo, en primera instancia, extraer los recursos petroleros y gasíferos de la zona austral, ni instalar plantas procesadoras de esas explotaciones, pues esas prioridades nacionales contradicen los criterios de economicidad con que el monopolio rige su conducta y que le aconsejan proveer a la Argentina desde el exterior el petróleo, el combustible y los productos petroquímicos, puesto que comenzar a explotar los recursos de que disponemos en abundancia desmejora la ecuación de eficiencia de las corporaciones. Es perfectamente explicable que, cuando la Argentina tomó la decisión de lograr el autoabastecimiento en un aspecto crítico como el petróleo, estallara la más violenta guerra psicológica: detrás de ella estaban, evidentemente, los intereses que se verían perjudicados con la su-

peración de la dependencia en esas áreas. Pero la claridad de la lucha nacional por el desarrollo es el primer antídoto para las campañas de propaganda que se libran contra ella.

Hasta aquí hemos hablado del monopolio en general, haciendo referencia a su efectivización en las grandes corporaciones multinacionales. Estas configuran un sistema, en la medida en que se rigen por los mismos criterios de racionalidad para planificar y llevar a cabo sus acciones productivas y comerciales. Es el sistema monopolístico en sí el que se opone a la programación nacional del desarrollo; es decir, el esquema concreto de intereses que visualiza una economía ecuménica en la cual las naciones son rémoras y obstáculos que es preciso apartar para poder desplegar el proceso de expansión conforme a su propia planificación.

Sin embargo, la existencia de un sistema monopolístico no supone la eliminación de la competencia, sino que la traslada a otro nivel. Las empresas que van integrándose al sistema no por ello dejan de competir entre sí. Esta competencia elevada al plano intermonopolístico es notoriamente distinta de la que caracterizó las primeras etapas del capitalismo industrial, pero es de todas maneras operante y tangible. Esa consideración es importante porque abre la posibilidad de que una programación nacional del desarrollo pueda establecer áreas de confluencia con segmentos del capital externo. Permite al Estado aprovechar la capacidad de empresas cuyo interés específico puede ser contradictorio con el sistema monopolístico, o que se avienen a actuar en las condiciones que se le planteen por razones de competencia con sus congéneres.

Estas postulaciones han superado ya la prueba de la experiencia: en 1958, en nuestro país, las empresas firmantes de los contratos que permitieron el autoabastecimiento de petróleo no pertenecían al núcleo principal del cartel internacional que controlaba y controla hoy con mayor razón el negocio de los hidrocarburos a escala mundial. Ello fue posible entonces, y lo sería más fundamentalmente hoy, por el hecho de que la aptitud tecnológica y empresarial para encarar explotaciones y actividades fundamentales para la independencia económica es transmisible a partir de la producción masiva de tecnología que caracteriza al mundo contemporáneo. Los monopolios logran controlar y sa-

car provecho de la innovación técnica, pero no pueden evitar la proliferación de las adaptaciones de los progresos que ellos titularizan. De hecho la inversión en los sectores nuevos de la economía trae como consecuencia un efecto difusor y multiplicador de la tecnología disponible y sus múltiples aplicaciones. Valga aquí también un ejemplo muy elocuente. Después de la victoriosa batalla del petróleo librada por el gobierno desarrollista del Dr. Frondizi (1958-1962), en el país pudieron prosperar compañías nacionales y se multiplicaron los centros de formación de técnicos con la preparación suficiente para resolver todos los problemas específicos que plantea la explotación de los hidrocarburos, de acuerdo con las particularidades geológicas y geográficas de nuestro país.

La contradicción de las naciones con el sistema monopolístico (que sólo puede superarse positivamente a través del desarrollo con la aplicación dinamizadora del capital externo), no es privativa del mundo subdesarrollado. Esas conclusiones interesan para la lucha nacional, pero los mismos factores operan también en la esfera de los países desarrollados. Allí las pretensiones de las corporaciones no concuerdan muchas veces con los intereses nacionales y el conflicto se refleja en el propio Estado.

El entrelazamiento de las corporaciones con el Estado presenta una intensa trama en los países de elevado rango industrial y tecnológico. Pero también hay diferencias que resolver, dentro de esta complementación, cuando surge un conflicto entre la estrategia monopolística y las demandas sociales de la comunidad. La eliminación de bolsones de pobreza, por caso, puede requerir el auspicio de inversiones que sean relativamente ineficaces dentro del planteo estricto de las corporaciones, a las que les convendría que esos recursos se volcaran en beneficio de otras actividades o zonas.

La lucha nacional debe reconocer, empero, dos requisitos indispensables para que la relación con las corporaciones sea provechosa. La política estatal debe fijar sus objetivos con absoluta claridad: es necesario determinar con precisión el núcleo del programa que permitirá el pasaje acelerado del subdesarrollo al desarrollo, lo cual comienza por una estricta determinación de las prioridades. Y es menester asimismo una insobornable voca-

ción nacional. Si quienes deben llevar adelante la política nacional no tienen conciencia plena de las leyes y condiciones que rigen el proceso de desarrollo, o si flaquean en su carácter moral, por supuesto, el triunfo será inaccesible.

6. Los cambios ocurridos

En la última década el mundo no ha permanecido estático. Ha sufrido cambios importantes tanto en el agravamiento de la situación de los pueblos rezagados como en el propio mundo desarrollado.

Diez años atrás se vivió con intensidad la llamada "crisis del petróleo". No hubo tal crisis, en primer lugar. Lo que ocurrió fue un aumento de los precios como resultado de la decisión de los países productores —coincidentemente con el interés de las grandes compañías del cartel— que se manifestó en forma de "shock" para aumentar marcadamente sus ingresos.

Vale la pena detenerse brevemente en el análisis de este fenómeno no sólo por su importancia en los últimos años sino porque en él están resumidos los criterios que rigen las transacciones económicas entre países desarrollados y subdesarrollados.

Los precios del petróleo están determinados por vía monopólica y en el aumento registrado en 1973 coincidieron tanto el interés de las grandes empresas del cartel como el de los países productores que creyeron poder aprovecharse en forma neta de la situación que les confería su condición de poseedores del crudo frente al crecimiento del consumo por parte de los países industrializados.

No tuvieron en cuenta que la crisis de expansión del mundo desarrollado ya había comenzado a pesar de que todavía no se manifestaba abiertamente en los indicadores. Producidos los aumentos, los países productores obtuvieron nuevos ingresos por su producción, pero las que se beneficiaron abiertamente fueron las multinacionales del petróleo que tenían una posición dominante en la mayor parte de las operaciones de compra y venta del crudo, por su control del mercado. Esa posición se la

brindaba su dominio del transporte y los seguros, de la destilación y la distribución y de la tecnología del sector, que no tardaron en extender —con los beneficios adicionales obtenidos— al desarrollo de las nuevas fuentes de producción petrolera (mares, zonas heladas) y de las nuevas fuentes de energía no petrolera.

La disminución del margen bruto que poseían las empresas del cartel, observada a lo largo de toda la década del '60, las indujo a cambiar radicalmente su estrategia. Ellas mismas auspiciaron la nacionalización de los yacimientos y sus explotaciones por diversas vías, lo cual se convirtió también en una nueva fuente de ingresos, a través de indemnizaciones y la enajenación de su participación por parte de los países productores. A ese negocio redondo hay que sumar el del reciclaje de los dólares obtenidos por los países productores que se realizó también con su participación.

El resultado fue que las empresas del cartel —llamadas "las siete hermanas"— aumentaron notablemente sus utilidades y el valor real de sus activos. Actuar como verdaderas multinacionales contemporáneas, despojándose de todo lo que las ataba a las viejas formas de sujeción económica tradicional, las condujo a ocupar el primer plano de las grandes corporaciones multinacionales.

La suerte de los países productores no fue tan feliz. La ilusión de que el dominio de las fuentes productoras podía transformarse en la capacidad de determinación de los beneficios a obtener sobre la fijación de los precios internacionales equivalente a la que ejercen los monopolios, se esfumó en el curso de los últimos diez años. Los países enfrentan hoy la necesidad de reducir los precios del crudo y disminuir la producción para preservar los mercados que, de otro modo, satisfacen sus necesidades con nuevas fuentes de hidrocarburos, ahorran en el consumo e impulsan energías sustitutivas del petróleo.

La mera posición de yacimientos no asegura la riqueza. Es una posibilidad más que tienen los países dotados de esos recursos, pero que sólo se vuelve acto si se explotan en el marco de una estructura productiva en la cual los resultados del trabajo de sus habitantes son capitalizables dentro de sus fronteras. Aumentar los ingresos desde el exterior, así sea espectacular-

mente como ocurrió con el petróleo, no supone automáticamente ampliar el mercado interno, impulsar la producción local de todos los insumos fundamentales, mejorar la productividad y hacerse protagonistas en otras áreas diferentes de la producción y el comercio internacionales.

Vender materias primas, así sea petróleo, y comprar productos manufacturados perpetúa el subdesarrollo y conduce inevitablemente al estrangulamiento externo. Esa es la situación que enfrentan no pocos miembros de la OPEP, que hoy se ven obligados a hacer concesiones, inimaginables en 1973, para mantener su condición de proveedores y, de ese modo, mantener los ingresos en proporción suficiente para financiar las importaciones y, en algunos casos, sostener los proyectos de transformación de sus economías que emprendieron en los años de bonanza.

Agotada la conmoción que provocó el aumento de los precios del petróleo, aparece en toda su extensión la crisis que atraviesa hoy la economía del mundo desarrollado, que, como dijimos, había comenzado a manifestarse antes de 1973 y cuya causa principal no son las decisiones de la OPEP, como en un momento se pretendió hacer creer. (Aun cuando sus decisiones aceleraron la inflación mundial.) Se trata de una crisis diferente de la que sufre el mundo subdesarrollado en sus manifestaciones y en su etiología, aun cuando existen conexiones entre ambas puesto que ellas repercuten en los intercambios mundiales. El ciclo recesivo que se ha venido registrando en los países altamente industrializados, particularmente en Estados Unidos y en Europa Occidental, ha provocado desocupación (y las tensiones sociales que ella conlleva), mayor inflación, inestabilidad cambiaria y otros riesgos que han repercutido en las inversiones en el exterior y en un mayor proteccionismo por parte de los países centrales.

El origen de la crisis se encuentra en la necesidad creciente del mundo desarrollado de asegurar la continuidad de su expansión, mediante una reestructuración de la producción industrial a escala internacional. Esa reestructuración debería supeditarse a las grandes corporaciones, que procederían a una internacionalización de la producción modelando una nueva división

del trabajo a escala mundial. La nota primordial de esa nueva división internacional del trabajo sería la transferencia al mundo subdesarrollado de las industrias obsoletas cuya tecnología no hubiese sufrido innovaciones importantes en los últimos años, reservándose para los países centrales aquellas ramas donde la incidencia de la nueva tecnología aseguraba el mantenimiento de una tasa de ganancia superior a la que significaría mantener el actual esquema.

El "Nuevo Orden Económico Internacional" así resultante permitiría resolver los principales problemas de los países ya desarrollados, introduciendo al mismo tiempo modificaciones en la estructura de los países subdesarrollados que no redundarían en una desaparición de la dependencia, sino que le imprimirían otras formas al crearse nuevas ataduras del aprovisionamiento externo.

En la práctica, este esquema no ha sido aplicado con la rapidez deseada por sus inspiradores y la crisis se prolongó durante prácticamente toda la década. En 1983 se notan ya algunos síntomas de reactivación de las economías desarrolladas, particularmente la estadounidense. La resultante final es una notable expansión del sector monopólico que se ha afianzado notablemente en la interdependencia de las corporaciones en materia económica y financiera.

En el mundo subdesarrollado las consecuencias fueron muy gravosas y su costo social infinitamente más alto. En efecto, la desocupación en los países industrializados está subsidiada, por lo cual se manifiesta en una baja relativa del consumo interno, mientras en los países subdesarrollados se traduce directamente en miseria acrecentada para vastos sectores de la población. Paralelamente, esa situación de pauperización extendida se expresa también en otros indicadores sociales: aumento de la mortalidad, déficit sanitario, analfabetismo, incremento de la delincuencia, etcétera.

Además del proceso secular del deterioro en los términos del intercambio al que ya hemos hecho referencia, que perjudica de modo sistemático las transacciones entre los países subdesarrollados y los desarrollados, llegaron a descender los propios volúmenes globales del comercio desde la periferia al centro. Es-

te fenómeno ocurrió hacia lo que parece ser el fin del ciclo depresivo del capitalismo y el comienzo de la reactivación. Los países subdesarrollados emergen del ciclo debilitados. Las cifras de su endeudamiento externo confirman esa afirmación. Entre 1978 y 1981 la deuda de los países subdesarrollados no petroleros con la banca privada internacional se incrementó en cerca del 90 por ciento, albergando ese promedio desde casos muy graves como los de la Argentina y Chile (cuya deuda se vio acrecentada en 241,8% y 255,5% respectivamente) hasta ejemplos como el de Brasil, cuyos compromisos externos han sido acrecentados en el mismo período en un 56,8%. El caso de Venezuela (74,2 % de incremento de su deuda con la banca privada internacional entre 1978 y 1981) ilustra el hecho de que tampoco los países petroleros subdesarrollados escaparon al fenómeno de su creciente endeudamiento.

La gran disponibilidad de fondos prestables que obtuvo la banca internacional con motivo del reciclaje realizado en ella con los superávits del petróleo, favoreció sin duda el proceso de endeudamiento. Lo que no resulta igual es el uso que hicieron de él los diferentes países subdesarrollados. Por una parte, sirvió —en el caso de los países no petroleros— para financiar los nuevos costos de la importación de hidrocarburos y en otros casos fue aprovechado para financiar inversiones en sectores nuevos de la producción que permiten a los países que hicieron esto último estar en mejores condiciones para afrontar el cumplimiento de sus obligaciones externas.

Ese no fue, lamentablemente, el caso de la Argentina, donde el endeudamiento se realizó para fortalecer las reservas monetarias que sostenían el proceso de apertura económica, que de otro modo se hubiera hecho imposible a poco andar. También se utilizó el endeudamiento externo para financiar importaciones prescindibles o ruinosas para la producción local, que además estaban subsidiadas por el desfasaje cambiario, y para financiar viajes turísticos al exterior.

El cuadro de situación del endeudamiento del mundo subdesarrollado pone al descubierto la necesidad que ahora enfrenta toda la humanidad de promover la expansión y el desarrollo de todos los países del mundo. Por una parte, las naciones altamente de-

sarrolladas necesitan una capacidad de compra que el actual estrangulamiento externo de las subdesarrolladas restringe. A su vez, los países atrasados necesitan inversiones para integrar sus estructuras productivas y poder revertir las condiciones de intercambio desigual que los perjudica de modo sistemático.

7. Reafirmación de la coexistencia

En la primera etapa de la posguerra, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética se definió conforme a los parámetros de la guerra fría. La guerra fría suponía, aparte del enfrentamiento inevitable entre los dos sistemas, la condición transitoria de ese enfrentamiento por la inexorable crisis que se suponía esperaba al sistema del adversario. Los soviéticos creían en el inevitable derrumbe del capitalismo en función de sus contradicciones internas. Los norteamericanos pensaban que el sistema comunista era una anomalía transitoria vinculada con la dictadura personal de Stalin. Consideraban, por otra parte, que los regímenes socialistas implantados en Europa Oriental constituían un sistema de satélites ilegítimamente dominados por el Ejército Rojo, en una situación de naturaleza transitoria también. La conquista del poder en China por el Ejército Rojo, en 1949, contribuyó a acentuar la polarización mundial y la agudización de las tensiones.

Después de la muerte de Stalin y en el transcurso de la década del '50 comenzaron a registrarse nuevas orientaciones. La Conferencia de Ginebra, en 1955, insinuó la posibilidad de una distensión. El discurso de Krushev en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética descartó la tesis de la inevitabilidad de la guerra entre los países "imperialistas" y abrazó en cambio la de la coexistencia pacífica entre países de sistemas diferentes. Ello no suponía, como es obvio, la hipótesis de la desaparición del conflicto entre capitalismo y socialismo. Lo que aceptaba, en cambio, era que tal conflicto no podía ser resuelto ya con el recurso de la armas nucleares.

El proceso ulterior se caracterizó por un progresivo desmembramiento de los bloques construidos en la posguerra. A fi-

nes de la década del '50; tanto la política de de Gaulle como el creciente distanciamiento entre Pekín y Moscú señalaron tendencias muy características. Entretanto, en el terreno de las negociaciones sobre desarme y control de armamentos se daban pasos de alguna importancia a partir del Acuerdo Nuclear firmado en Moscú en 1963, que prohibió las pruebas atómicas en el espacio aéreo y en el mar y redujo la legitimidad de los "tests" nucleares a los subterráneos. Luego de ese acuerdo vinieron otros que apuntaron a objetivos más ambiciosos durante el ciclo de "distensión" que definió a la presidencia de Nixon. Las negociaciones SALT I y SALT II, incluso a pesar de la no ratificación del tratado firmado en esta última, trazaron un cuadro de reglas de juego que las superpotencias han respetado. Por ahora, la base de dicho respeto consiste en el estado, sin duda precario, que asegura un equilibrio fundado en la certeza de la mutua destrucción. Sin embargo, no puede discutirse que en el intervalo se dieron pasos positivos en el terreno de la coexistencia, como el tratado de Helsinki de 1975 que echó las bases para un sistema permanente de seguridad europea, que supone la superación de varios supuestos sobre los que había sido armada la guerra fría.

La exclusión de la posibilidad de la guerra, la coexistencia pacífica y las posibilidades de cooperación entre las superpotencias, incluso dentro de un cuadro de subsistencia de conflicto entre sistemas, configuran el ámbito dentro del cual se desenvuelve la acción de los Estados nacionales. Es evidente que si éstos trazan su política como si en el mundo prevalecieran las condiciones del tiempo de guerra fría, ese error objetivo traería consecuencias sumamente perjudiciales. Igualmente perjudiciales y aun más peligrosas serían las implicaciones de una acción que supusiera que el conflicto Este-Oeste ha desaparecido o que entendiera que los pactos militares como la Alianza Atlántica o el Pacto de Varsovia han dejado de funcionar.

En los años de culminación de la guerra fría, algunos países se negaron a tomar posiciones en favor de cualquiera de los bloques que se enfrentaban. Esa actitud se denominó a sí misma "neutralismo positivo". Su principal preocupación era la defensa de la paz. A partir de la década del '60, ya avanzada la época

de la coexistencia, el antiguo neutralismo respondió a la nueva situación con la organización del Movimiento de los Países No Alineados, cuyo común denominador es la no participación formal en ninguna de las dos grandes alianzas militares.

Lo que ha caracterizado los últimos años de la política internacional en el marco de la coexistencia pacífica, desde que la guerra fría se transformó en un anacronismo, ha sido el afianzamiento de una convivencia en la cual los problemas tienden a plantearse crecientemente con mayor claridad, despojados de planteos ideológicos que los ocultan en su esencia.

Los conflictos localizados que se han registrado, aun cuando en ellos se haya podido determinar en algunos casos un aspecto de la confrontación Este-Oeste, como es el caso del largo calvario que padecen todos los países de Medio Oriente, no se han extendido ni multiplicado. El propio mecanismo de la coexistencia tiende a poner un límite más allá del cual los conflictos corren el riesgo de generalizarse y, por eso mismo, esa limitación no es transgredida. No lo ha sido en última instancia en los casos de Polonia y Afganistán (que son, sin embargo, diferentes en su forma), para citar dos ejemplos del campo socialista, ni lo es tampoco en la explosiva situación que hoy atraviesa América Central, como tampoco la guerra en las islas Malvinas podía llegar a convertirse en un pretexto para la intervención de la Unión Soviética en esta parte del mundo. Las leyes que rigen la coexistencia pacífica —una vez que ellas empezaron a funcionar a partir del afianzamiento de la bipolaridad en el campo militar, según vimos al principio del capítulo— determinan la intervención de las propias superpotencias para detener la ampliación de los conflictos. Las superpotencias que compiten en el plano económico y se esfuerzan por dirimir sus diferencias mediante su influencia política en el mundo, son también paradójicamente las principales garantes de la paz mundial.

La dispersión de los bloques se ha acentuado en ese contexto. No existiendo posibilidad de unificar en una sola mano la capacidad de intervención violenta en los asuntos internos de los países, en razón de la bipolaridad, las diversas naciones eligen crecientemente su actitud internacional en los asuntos rela-

cionados con sus propios intereses. Ellas tienen una posición cada vez más autónoma en la medida en que se lo permite su condición de naciones integradas. Es obvio que los pueblos duramente sometidos al subdesarrollo deben sufrir los condicionamientos que derivan de su vulnerable situación. Pero no es menos cierto que las condiciones externas favorecen el despliegue de su personalidad nacional y que alcancen una presencia internacional que corresponda a su entidad progresivamente independiente.

El afianzamiento de la coexistencia no elimina sin embargo las áreas de influencia. Ellas se corresponden y se explican por razones geográficas, históricas, culturales y políticas. La Argentina pertenece a Occidente con independencia de la voluntad aislada de gobernantes y políticos. El mundo occidental configura una zona de ligazones y solidaridades que no puede ser desconocida. El fracaso de la operación militar argentina en las islas Malvinas —que tendremos más adelante ocasión de analizar detalladamente— encuentra su explicación precisamente en haber ignorado tanto los mecanismos y las leyes de la coexistencia en escala mundial como en haber repudiado de hecho la propia lógica interna que guía las relaciones entre los países occidentales. Todo ello se hizo despreciando la legitimidad de los derechos argentinos sobre las islas, precisamente fundados en nociones jurídicas y en principios de la política internacional sobre los cuales Occidente se reconoce como una comunidad cultural. Lo que inexorablemente debía ser recuperado por la vía diplomática, tanto más velozmente como fuerte fuese la retaguardia nacional que apuntalara su gestión, fue jugado al azar de una aventura militar que no podía terminar sino como terminó.

8. Crisis y subdesarrollo en América Latina

El balance de la situación económica actual de América Latina empieza por señalar que la aminoración en el crecimiento de la economía mundial primero y la recesión que afectó luego a los países industriales han golpeado violentamente a los países de América Latina. Aquí hay hoy una depresión generalizada que

no tiene precedentes desde la década del '30. Esta referencia no pretende asimilar dos situaciones distintas. Simplemente cabe destacar que desde entonces no se registraba la actual situación de caída total, es decir en todos los países, del producto bruto por habitante, como ocurrió en 1982. Va de suyo, con ello, que el producto total de la región cayó y que a fines de 1983 estaremos probablemente en una situación similar a la de años anteriores en cuanto a la suma total de bienes y servicios producidos por la región. La crisis ha terminado por afectar toda el área y no sólo a los países que, como la Argentina, hicieron todo lo necesario para crear las condiciones de su propio desastre. Esto sugiere que la explicación tiene que buscarse en razones estructurales, en aquellos rasgos comunes a la totalidad del área y que la diferencian profundamente de los países desarrollados.

Entre los datos más significativos de la crisis regional el más importante es el ya apuntado: la caída generalizada de la producción. Esa caída en países como Chile ha superado el 20 por ciento del producto bruto sólo en el año 1982. En la Argentina, donde el proceso es más antiguo y profundo, los porcentajes de reducción del P.B.I., sobre todo de su componente industrial, han sido, en el quinquenio último, todavía mayores. Realmente, en los aspectos formales, la crisis argentina registra magnitudes y proporciones similares a la norteamericana de 1930. Fuera de estos dos casos dramáticos, en los cuales se practicó una deliberada política de desindustrialización, bajo el pretexto de la denominada "apertura de la economía", la situación general del continente parecía más bien responder al estado actual en que se encuentra la relación desarrollo-subdesarrollo. Ese estado es de intensa tensión, de virtual imposibilidad de funcionamiento del esquema vigente. Por eso la crisis se expresa en la acentuación sin precedentes del deterioro de los términos del intercambio y el aumento, también sin precedentes, del endeudamiento externo.

La situación no es nueva, puesto que resulta de la condición de países subdesarrollados que atraviesan los de América Latina como muchos otros pueblos de la tierra. Estamos llegando al fin de un ciclo y el desenlace era perfectamente previsible. Los desarrollistas venimos insistiendo desde hace un cuarto de siglo en

la necesidad de poner en el primer plano del análisis el problema del subdesarrollo y las tendencias mundiales hacia la agravación de su crisis congénita, para poder formular políticas aptas para superarla. Siempre consideramos que la esencia de la crisis consistía en la creciente contradicción entre la capacidad de producción del gran centro industrial en constante ascenso y la creciente insolvencia relativa de los países subdesarrollados. Por supuesto, no desconocemos que en estos países se registró un importante crecimiento cuantitativo desde el fin de la última guerra. Pero éste no es un problema de cantidades sino un problema de relación. Lo cierto es que la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo se ha profundizado singularmente y sin interrupciones. Esto se mide, sobre todo, en el deterioro de los términos del intercambio, dato fundamental para comprender la situación, y que es en última instancia la verdadera usina del endeudamiento de que tanto se habla. Es bastante notable que el deterioro en la relación comercial haya sido negado durante tanto tiempo. Ha sido menester que se llegara a las catastróficas cifras actuales que comprenden a la vez a los productos templados, a los tropicales y a casi la totalidad de los minerales para que se admita que la condición de exportador de materias primas conduce inexorablemente a la insolvencia. En consecuencia, lo que está ocurriendo en la década del ochenta es el desenvolvimiento natural de una situación cuya única salida es dar solvencia a las tres cuartas partes de la humanidad.

En la situación financiera actual del mundo hay, por supuesto, elementos que antes no existían, pero ellos son sobre todo síntomas externos de la crisis. Desde luego que tienen suficiente importancia para que su tratamiento sea indispensable, así como muchas veces es indispensable atacar los síntomas de una enfermedad para librar luego la batalla contra las causas. Es evidente que la situación financiera mundial ha llegado a un punto de extrema gravedad y que es indispensable encontrar soluciones, aunque ellas tienen que ser parte de un tratamiento de conjunto. No sería correcto hacer una comparación precisa entre la situación económica argentina y la mundial, pero cabe destacar que desde hace años nuestro país padece de una profunda crisis en el sistema financiero, parte de cuyo tratamiento requiere me-

didias financieras. En el orden mundial hemos alcanzado un punto en el que cabe preguntarse si la deuda externa que afrontan numerosos países plantea un problema de iliquidez transitoria o algo todavía más profundo. Si el servicio total de la deuda de un país, incluida la amortización del capital, excede el ingreso total por sus exportaciones, cuesta reducir la situación a un mero problema de iliquidez transitorio. Es evidente que esta posición no sería sustentable si el análisis se refiriera a empresas privadas. Para muchos, una comparación de este tipo no resulta válida ya que, se dirá, "los Estados no quiebran". Pero no es totalmente seguro que esto sea imposible.

En abstracto, es posible pensar que se podría recurrir a la declaración de moratorias unilaterales por parte de los países altamente endeudados, pero a poco que se analice con algún rigor el problema, esa solución no parece probable ni razonable. Estamos hablando, naturalmente, de moratorias formalmente declaradas. En la práctica, desde el año pasado, son varios los casos en que se han producido incumplimientos en la atención de compromisos externos muy semejantes a una moratoria unilateral. Pero la situación no ha sido oficializada y el sistema bancario mundial se ha abstenido cuidadosamente de declarar a esos países en situación de insolvencia absoluta, produciendo así un hecho que podría derrumbar todo el edificio. En todo caso, es absolutamente evidente que si un país se lanzara a un curso de acción tan avanzado, podría ser elegido como víctima propiciatoria de un escarmiento de características inéditas. Es muy claro que la moratoria unilateral enfrentaría al país que lo intentara con opciones que ni siquiera imaginan quienes proponen este tipo de tesis, propias de reuniones sociales de la izquierda literaria.

Tampoco sería posible una acción colectiva, del tipo de la del "Club de Deudores" de la que tanto se ha hablado últimamente en la Argentina, más por razones electoralistas que por conocimiento de la economía internacional y de lo que ella permite o no permite hacer en función de las leyes que la rigen. Sobre esta posibilidad se ha pronunciado negativamente la totalidad de los principales países de América Latina. En general, sus voceros más calificados han sostenido que las situaciones individuales

son muy diferentes y que cada caso tiene su propio perfil, y, por ende, la necesidad de un tratamiento propio. No parece, en consecuencia, que esa idea pueda tener traducción en la práctica, tal como ha ido siendo puesta de manifiesto en las diversas reuniones internacionales en las que el tema se ha planteado. Esto no quiere decir que nos parezca imposible el cambio de ideas y de experiencias entre los países que actualmente renegocian su deuda externa, sobre todo teniendo en cuenta el papel creciente que viene asumiendo el Fondo Monetario Internacional.

Por supuesto que hay diferencias profundas entre los diversos países latinoamericanos. Brasil, por ejemplo, debió endeudarse progresivamente desde 1974, cuando se produjo el desequilibrio de su balance de pagos por el aumento de los precios del petróleo. La estrategia brasileña consistió en profundizar el proceso de sustitución de importaciones, extendiéndolo a casi la totalidad de los productos de la industria pesada y a buena parte de la de bienes de capital. En esas condiciones, para Brasil la única opción era endeudarse y crecer u optar por la parálisis y la eventual disgregación nacional. Tenemos serias discrepancias con el llamado modelo brasileño, pero no hay duda que la deuda de ese país tiene contrapartidas tangibles. México, por su parte, entró en un ciclo de verdadera vorágine financiera por razones exactamente inversas, a saber, por la euforia que produjo su espectacular salto a la condición de una de las principales potencias petroleras. México se endeudó aceleradamente porque tenía petróleo, lo que alentó programas muy ambiciosos de inversión que, en última instancia, están garantizados por las segundas reservas petroleras del mundo, situadas en la frontera del principal consumidor mundial. La Argentina, en tanto, comenzó el ciclo vertiginoso de su endeudamiento mientras acumulaba saldos positivos en la cuenta corriente de su balance de pagos, lo que es increíble, y sólo puede explicarse por la perversa deformación de la política entonces seguida. La Argentina dilapidó el dinero que tomó prestado durante un ciclo en el que, paradójicamente, mientras se comprimían los salarios y se aumentaba verticalmente la desocupación industrial, se estimularon formas de consumo suntuario, tanto públicas como privadas, que llevaron finalmente a una situación en la cual la deuda ex-

terna equivale tal vez a dos tercios del P.B.I. Por lo tanto, no hay duda de que los casos existentes no son fácilmente asimilables y esta impresión se confirma si el análisis se extiende a los restantes deudores continentales. Sus diferencias fácticas no suponen descartar las características comunes a toda la situación latinoamericana actual en lo que constituye el substrato que enlaza todos los casos. Las diferencias apuntadas no excluyen profundas semejanzas, a partir de la común condición del subdesarrollo. Por de pronto hay un dato práctico que tiene que señalarse. Con la excepción del Paraguay y tal vez de Colombia, ningún país latinoamericano está en condiciones de pagar lo que debe, si por ello se entiende no sólo el cumplimiento de los intereses, sino también de las amortizaciones de capital, sin incurrir en nuevos endeudamientos. Es decir que, aun "ahorrando sobre el hambre y la sed" de los pueblos, las actuales deudas son de cumplimiento imposible a partir de sólo los recursos nacionales. Más aun: si se pretendiera pagar sólo los intereses, a las actuales tasas, que vencen en el curso de 1983, con sólo el producido del saldo de la balanza comercial, esto también se revelaría imposible aún en los casos en los que estuviera dispuesta la aplicación de un programa de austeridad que equivaliera a la más drástica de las recesiones. El dato realmente común que une todas las situaciones latinoamericanas es que la única manera de superar la actual crisis financiera es a través del crecimiento económico.

Sólo el desarrollo logrará revertir la manifestación financiera de algo más profundo, que es la posición crecientemente desventajosa en que se encuentran los países latinoamericanos y todos los que comparten la condición de exportadores de productos primarios e importadores de bienes industriales. Conviene tener presente que los países que más intercambian son precisamente los desarrollados. No otra cosa explica que las importaciones norteamericanas de productos latinoamericanos, que representaban en 1946 el 40% del total, se redujeran en 1960 al 22% y en 1981 alcanzaran sólo al 13,4 %. Mientras se mantenga la diferencia estructural representada por el hecho de que el consumo per cápita de energía en América Latina es diez veces menor que en los Estados Unidos, no habrá salida.

Que nosotros insistamos en que la cuestión pasa por el desarrollo no quiere decir tampoco que deban desatenderse los graves problemas planteados hoy por el endeudamiento externo, pues aquéllos tienen consecuencias directas sobre las respectivas situaciones internas, al bloquearse las importaciones por el estrangulamiento de pagos al exterior derivado de la existencia de más obligaciones que las que pueden atenderse. Es evidente que es indispensable proceder a una renegociación de la deuda. Si ella no se practica formalmente, resultará de los hechos. También es necesario que se amplíen los recursos del F.M.I., que los bancos centrales de los países desarrollados estén dispuestos a asumir la parte de los costos de ajuste que no podrán evitar y que los bancos comerciales privados continúen prestando. Pero todo ello, que es necesario, no será suficiente. Es demasiado obvio que las deudas, sobre todo cuando crecen desproporcionadamente, sólo pueden pagarse con riqueza adicional y ello por razones económicas, sin contar los argumentos políticos y morales. Por supuesto que estos últimos deben tenerse muy en cuenta, si se quiere preservar la democracia en el continente, a la que amenazaría seriamente esta anómala situación de dependencia financiera. Antes ésta consistía en la transferencia de renta al exterior procedente del deterioro de la relación comercial. Esto persiste, y a ello se agrega la transferencia de renta, todavía más notoria, que consiste en el pago de intereses cuyas tasas positivas no tienen precedentes en la historia del capitalismo, a los que se suman comisiones por intermediación bancaria que, por razones de una lógica comercial de aplicación bastante discutible, son más altas cuanto más arruinado esté el país que debe pagarlas. Nos parece absolutamente claro que el tema de las tasas de interés actuales tiene que ser atendido con urgencia. La estrategia aparente de los bancos, que parecería ser la recuperación del capital prestado, en un lapso corto, a través de intereses desmesurados y comisiones muy altas, no parece contemplar las posibilidades políticas reales. Creo que no puede razonablemente pensarse en autoritarismos a escala regional.

Pero la verdadera solución, la que es realmente definitiva, es la que hemos venido planteando una y otra vez desde hace tres décadas. El desarrollo no es reemplazable. La crisis de los países

petroleros es la última prueba para convencer a los que creían lo contrario. Los mecanismos de integración regional han demostrado su ineptitud para inducir el desarrollo económico; lo que mal puede sorprender, ya que la integración regional es consecuencia de los desarrollos nacionales y no su antecedente. También ha quedado claro, contra lo que tanto han reclamado los sostenedores del nacionalismo formalista en nuestro continente, que el endeudamiento es mucho más peligroso que la inversión directa; que es mucho más conveniente tener asociada una empresa industrial que asuma riesgos, que deber dinero a un banco. En el corto plazo van a ser indispensables algunos ajustes y será menester también que transcurra algún tiempo antes de que las dimensiones del problema actual sean comprendidas. Sin embargo, tal vez este año mismo quede en claro que América Latina no puede ser enfrentada con la opción entre una cesación efectiva de pagos o la postergación de ella mediante la aceptación de un comportamiento recesivo permanente de sus economías. No hay que descartar, en este cuadro, perturbaciones políticas generalizadas.

9. El retroceso argentino

América Latina retrocedió en el marco mundial y la Argentina retrocedió dentro de América Latina. Ello ocurrió tanto en lo que hace a la insuficiencia de su crecimiento como a la disminución de su participación en el comercio mundial. Mientras la Argentina representaba en 1938 el 1,86% de las exportaciones mundiales (ya había quedado atrás la época en que nuestro país era considerado por la Sociedad de las Naciones el sexto en el mundo), en 1976 había descendido al 0,40% en esa participación. De ser sin discusión el primer país de América Latina, pasó a ser el tercero desde el punto de vista de su participación en el producto bruto interno total, representando, en 1982, el 11,2% del total, detrás de Brasil (34%) y México (26,2%). Su participación en el total de las exportaciones de los países subdesarrollados cayó también del 7,5% en 1938 al 1,7% en 1976; y durante el mismo lapso lo hizo desde el 35% en el total de las exporta-

ciones de América Latina hasta situarse por debajo del 10%.

Sus productos tradicionales —carne y granos— se estancaron primero y cayeron luego en su participación en el comercio mundial, y ello explica la decadencia que apuntábamos. En la década del '30, el 80% de las importaciones mundiales de carne correspondía al Reino Unido, y la Argentina aportaba por sí sola el 50 por ciento de las exportaciones de ese producto. Las exportaciones de carne argentina cayeron pronunciadamente desde entonces y significaron, como promedio en 1975-76, alrededor del 6 por ciento, mientras las uruguayas han permanecido estabilizadas desde la década del '60 en alrededor del 5 por ciento mundial.

Lo mismo ocurre con los granos. En la década del '30 nuestra producción en ese rubro llegó a representar el 30 por ciento de lo comercializado mundialmente. Esa porción se redujo en el quinquenio 1970-74 a sólo el 6,7% del total mundial.

Desde la década del '30 la Argentina no cambió la estructura de sus relaciones con el exterior en lo sustancial. Siguió vendiendo producción de origen agropecuario y comprando bienes industriales. La industrialización operada durante la segunda guerra mundial, al no completarse desde los sectores básicos, acrecentó la vulnerabilidad externa pues impuso —además de la tradicional incorporación de bienes terminados— nuevas dependencias de insumos industriales para que los recientes establecimientos no se detuvieran con las consiguientes consecuencias sobre la situación social. La prosperidad de la Argentina del Centenario se basó en la venta de carnes y granos. En las décadas posteriores a la crisis del '30, ese esquema se quebró definitivamente, a pesar de lo cual las clases dirigentes se negaron a aceptar ese hecho y se esforzaron por perpetuar la estructura tradicional aun cuando para ello debieran descargar creciente sobre las espaldas de los sectores populares las consecuencias de la crisis.

El hecho de que en 1950 el producto bruto argentino representara todavía una magnitud equivalente a la suma de todos los países limítrofes indica que su deterioro, siendo ya manifiesto a los ojos del análisis científico, no había sido todavía acelerado. En 1980, treinta años más tarde, el producto bruto interno

argentino sólo representaba la cuarta parte de la suma de los de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. La tendencia no podía tardar en aparecer crudamente a los ojos de todos, pero demoró sus manifestaciones más dramáticas debido al hecho de que, entre 1958 y 1962, el gobierno desarrollista realizó una cantidad muy importante de inversiones en los sectores básicos que contrarrestaron la curva de descenso e hicieron vivir de rentas a varios gobiernos ulteriores, por lo menos durante una década. En 1973 se imponía nítidamente aplicar un programa de transformación de la estructura productiva sin más dilaciones. Que esa necesidad fuera nuevamente soslayada prueba el rapidísimo agotamiento que tuvo el gobierno peronista y que puso al país en una situación abiertamente caótica en 1975. Al analizar luego específicamente esta última década veremos la íntima vinculación entre la política aplicada en 1973 y la que se puso en marcha en 1976, pero es oportuno indicar que ésta pudo cumplir sus destructivos objetivos porque se crearon condiciones para que pudiera ser aplicada. Sobre la crisis de fondo operaron las decisiones equivocadas y la dispersión de las fuerzas sociales y políticas que debían respaldar la política de desarrollo fue muy grande, al punto que no pudo organizarse una respuesta unitaria al plan económico aperturista y monetarista hasta muy avanzada su ejecución. Esa política tuvo seis años sin una sola huelga general, y sólo en 1981 se organiza la Multipartidaria, que nació para reclamar un cambio de fondo en la política que se ejecutaba desde el gobierno, misión que no se desempeñó en plenitud más allá de obtener la convocatoria a elecciones; resultado al que de todos modos conducía inexorablemente el fracaso del gobierno militar.

Ahora la Argentina ha dejado atrás el cuadragésimo lugar en el mundo. Esa pérdida de posiciones se corresponde directamente con la ausencia de una política de signo nacional que enfrente los problemas estructurales del subdesarrollo mientras en su lugar se implementó un modelo que respondía a los intereses del sistema monopólico para esta parte del mundo. Nuestro país ha visto degradarse su posición relativa no sólo porque no ha crecido al mismo ritmo que el resto del mundo, sino porque ha retrocedido en términos netos. Es el único país que ha caminado en

el sentido inverso al que sigue la historia de la humanidad: se ha desindustrializado.

El deterioro en los términos del intercambio —si bien se trata de una tendencia de carácter secular que debe estudiarse en lapsos amplios—, siguió en la última década una curva elocuente: ascendió en forma favorable a los precios agropecuarios entre 1971 y 73 y desde allí descendió sin interrupción hasta 1982, con una leve oscilación en 1980, que de todas maneras se mantuvo en el margen negativo.

La variación en ascenso que se observó entre 1971 y 1973 hizo pensar a muchos que el deterioro de la relación de intercambio cuando se venden bienes de origen primario no tiene el comportamiento de una ley económica y que no eran válidas las conclusiones obtenidas por la observación científica de la realidad. Se pensó entonces que no era imprescindible modificar la estructura productiva y el modo de relacionarse con el exterior. La experiencia histórica de los años siguientes hasta ahora, como había ocurrido en el pasado, no sólo confirmó las conclusiones correctas sino que dejó definitivamente desenmascaradas las interpretaciones ideológicas de la realidad que, con argumentación populista o liberal, han sido impotentes para explicar la crisis y por lo tanto inútiles las medidas que pusieron en juego para enfrentarla. Las leyes económicas, aquellas que la ciencia tiene por misión desentrañar, tienen un comportamiento objetivo —esto es, se cumplen con independencia de los factores subjetivos— pero se manifiestan de modo tendencial y su observación no puede hacerse de otra forma que la histórica.

El estudio de la última década en la Argentina nos permite advertir cómo han resultado definitivamente insuficientes las respuestas tradicionales para hacer frente a los graves problemas de raíz estructural. El deterioro registrado desde entonces no hace sino confirmar la necesidad y la urgencia de un cambio de fondo. La responsabilidad de las clases dirigentes —esa clave para comprender toda la historia argentina— se hace manifiesta. Ellas optaron consciente o inconscientemente por no asumir en plenitud el desafío. Asimismo, esa falta de grandeza y perspectiva histórica condiciona el presente y explica la esencia de los problemas fundamentales que tenemos que resolver hoy.

CAPITULO II

POPULISTAS Y LIBERALES: UNA SOLA POLITICA DE FONDO

Analizadas en conjunto, las experiencias vividas por los argentinos desde 1973 hasta ahora fueron decididamente traumáticas. Muestran un derrotero de franco y creciente deterioro, cuya proyección culmina en la pérdida de la condición nacional si no se produce un vuelco sustancial. Las políticas económicas aplicadas durante estos años responden a dos esquemas aparentemente antagónicos. Por un lado, el esquema populista implementado entre 1973 y 1976. Por otro, el modelo aperturista y monetarista que se aplicó a partir de abril de 1976. Un análisis objetivo muestra que esas políticas son sólo diferentes en la forma —y en muchos instrumentos ni siquiera difieren— pero son idénticas en su esencia y en sus resultados deletéreos para la condición nacional. Como se suceden en el tiempo, ambas acumulan y potencian sus resultados, con gravosas consecuencias para toda la comunidad.

Veamos primero cómo una comparación entre ambas orientaciones permite mostrar su ensamble en el arco de debilitamiento de la posición nacional y su articulación con un esquema transnacional regido por el sistema monopólico.

1. Dos apariencias, una identidad

El ensayo populista comenzó en mayo de 1973, con la gestión ministerial de José Ber Gelbard, antes de que el general Pe-

rón asumiera la presidencia. Fue practicado por ese ministro y quienes lo sucedieron hasta marzo de 1976. Ese ensayo quedó cerrado en medio del fracaso económico, agudos enfrentamientos sociales, violencia indiscriminada al haber perdido el Estado el control del uso de la fuerza y una profunda fractura política que creó las condiciones para que las Fuerzas Armadas debieran asumir el gobierno ante la perspectiva de una irrefrenable profundización del caos. La fase liberal comenzó inmediatamente después, cuando se anunció el "plan del 2 de abril". Estuvo inicialmente a cargo de José A. Martínez de Hoz y tras su alejamiento del gobierno fue continuada por los ministros Sigaut, Alemann, Dagnino Pastore y Wehbe hasta la actualidad. Provocó rechazos y resistencias de todo tipo —incluso formas inéditas de lucha de productores, obreros, amas de casa, etc.— a pesar de lo cual no ha podido ser desalojada y reemplazada por un modelo nacional. Aun ahora, en las postrimerías del proceso militar, sigue vigente. Las dirigencias políticas, interesadas sobre todo en asegurar la formalidad del comicio, no creen en la necesidad y la posibilidad real de imponer un cambio sustancial. Prefieren exigir que la crisis sea "administrada" por el gobierno, como si ello fuera posible en medio de sus manifestaciones más agudas y graves, puesto que se trata de una crisis estructural del subdesarrollo, en su estadio más profundo y dramático, y por ello es la más extendida, prolongada y recurrente que le haya tocado vivir al país.

Los resultados de la sucesión de liberalismo-populismo son desoladores ya que ninguno de los dos términos alivió al menos la situación de sectores de la sociedad. Sobre las graves consecuencias de uno se sumó el otro, sin solución de continuidad en lo que atañe a las variables fundamentales. Un análisis que deje de lado la hojarasca retórica que oculta la médula de esas políticas (que aún hoy confunde a no pocos economistas enrolados ideológicamente en una u otra orientación) pone en evidencia sin esfuerzo que también fueron muy similares las estrategias empleadas: partieron del mismo diagnóstico y operaron del mismo modo; es decir, mantuvieron intactos los problemas de fondo de la economía nacional. Y hasta en cuestiones de detalle emplearon instrumentos similares. Esa estricta coincidencia se

puso de manifiesto a pesar de la diferente raigambre ideológica y las situaciones políticas en las que actuaron los gobiernos que titularizaron esos programas. Aquél en el cual fueron ministros Gelbard y sus sucesores tenía en su origen una abrumadora mayoría popular, mientras Martínez de Hoz y quienes continuaron su política se insertaron en un proceso militar que les permitió aplicar su plan sin cortapisas ni resistencias efectivas durante un período insólitamente prolongado. Sin embargo, en ambos casos la comunidad experimentó la misma frustración, puesto que las esperanzas y la aprobación social habían acompañado generosamente el comienzo de ambas instancias.

Los planes de Gelbard y Martínez de Hoz simbolizan la incapacidad de respuesta de las clases dirigentes a los problemas de fondo de la realidad nacional. Por ello abrieron el campo a una cruda penetración de los intereses extranacionales que determinaron primero la situación que les era más favorable y terminaron modelando la misma estructura productiva, eliminando las ramas industriales que les eran directamente competitivas y adueñándose del mercado.

Tanto Gelbard como Martínez de Hoz partieron de diagnósticos equivocados y, en consecuencia, erraron en el diseño de la política que debía aplicarse. El coro de aprobaciones —aprovechándose de la genuina y legítima expectativa favorable de la gran mayoría de la población— fue total en ambos casos. Políticos y economistas de diversas vertientes aplaudieron el inicio de ambos ciclos. Y otros que no se manifestaron lo aprobaron con su silencio. Sólo el desarrollismo asumió la imperiosa necesidad de la crítica y la hizo a fondo, sin concesiones en la certeza de que ésa era la actitud que correspondía. Decir la verdad, señalar el curso que tomarían los acontecimientos no era sólo necesario para cumplir con un deber de conciencia, de naturaleza individual. Era también imprescindible advertir al país qué iba a ocurrir, ofrecerle al pueblo un camino por donde encauzar su discrepancia conforme los resultados fuesen haciéndose evidentes. Lo contrario habría sido complicidad y contribución a la frustración argentina.

Desde las filas del MID, en consecuencia, se señaló la insolencia teórica de esas propuestas y se desnudaron con severa

precisión las consecuencias depredadoras que arrojarían en la práctica. La actitud del desarrollismo no era nueva. Ya la habíamos practicado durante el gobierno —entre 1958 y 1962— cuando fue necesario recurrir al ejercicio de la más implacable autocrítica para evitar desviaciones y recuperar el ritmo de expansión que tenía como meta. Lo hicimos durante el gobierno radical, poniendo en evidencia que su actitud desaprensiva respecto de la inversión y sus ataduras a la retórica formalista lo conducían a asumir actitudes abiertamente enfrentadas con el interés nacional, tales como la anulación de los contratos petroleros que habían permitido al país su autoabastecimiento, actitud que condujo a reanudar la importación y la consiguiente dependencia del aprovisionamiento externo de los hidrocarburos. Y la misma conducta asumimos cuando denunciarnos, desde el momento de su inicio, cuáles serían los efectos del plan que desde 1967 aplicó Krieger Vasena. Entonces el coro abarcó todo el espectro ideológico, y nuestra posición solitaria, afirmada en el rigor del método que nos permitía hacer aquellas predicciones, ganó en fuerza cuando la realidad mostró su inocultable evidencia. En 1973, y participando del frente electoral que produjo la más importante victoria de la historia política argentina, fuimos también los primeros en hacer una crítica fundada del plan Gelbard desde sus comienzos, mientras la “inflación cero” aparecía como conquista definitiva, y peronistas y radicales votaban juntos en el Congreso, ratificando el “Pacto Social” como el instrumento político fundamental de la estrategia recesiva. (Luego haremos un análisis más detallado de nuestras críticas a la fase populista exigido por la necesidad de recordar los errores conceptuales que se cometieron entonces que surge de los debates actuales, pero puede señalarse que, como Krieger, Gelbard hizo del fiscalismo, la represión del salario, la congelación de los precios agropecuarios, el acuerdo virtual con las grandes empresas —que liquidaban la competencia de las pequeñas y medianas— y la restricción del crédito, las armas del nuevo intento, implementado esta vez desde el seno del gobierno popular, para perseguir la estabilidad sin hacer el desarrollo.)

Con ese criterio, pocos días después del anuncio del plan del 2 de abril de 1976 —exactamente el día 19 de ese mes— hicimos

en total soledad el señalamiento de que ese plan conduciría a la más grave de las situaciones que el país había sufrido. Y nuestra posición no fue por cierto recibida respetuosamente por los sectores que respaldaban la política oficial, que, por otra parte, eran los mismos que habían apoyado a Krieger Vasena y a Gelbard. Fuimos acusados por éste de ser los enemigos principales y denostados impunemente a través de los mecanismos de difusión controlados por el gobierno. Fuimos denunciados como “agitadores” por el equipo de Krieger y de “agoreros” por el de Martínez de Hoz. Y, sin embargo, lamentablemente, teníamos razón. Cada uno de los vaticinios del desarrollismo se cumplió puntualmente.

Veamos algunas de las identidades practicadas durante la última década. El *achicamiento salarial* comprimió el mercado interno y ello produjo múltiples quebrantos, creando condiciones para un trabajo crecientemente improductivo, que culminaría con el desempleo masivo. Ese objetivo se logró por la vía del acuerdo con las cúpulas sindicales —que resignaron pasivamente los intereses de sus representados— y lisa y llanamente por vía autoritaria; pero el mecanismo fue idéntico. Apuntando a frenar la inflación, ello sin embargo no sucedió. La ansiada estabilidad —inalcanzable en un contexto recesivo— no sólo no se produjo, sino que sobrevino una verdadera explosión inflacionaria. Sembrando vientos, se cosechan tempestades.

Con precios máximos en un caso y con subsidios a la importación en el otro, se produjo un inédito *agravio a las empresas* productivas. La secuela fue, inexorablemente, el desabastecimiento, la bancarrota y el desmantelamiento de ramas de la industria que dejaron de producir ciertos bienes. La inflación galopante se unió a un receso sin antecedentes en la historia económica argentina. La producción global por habitante, en 1982, se equiparó a la de trece años antes, y la industrial, a la de hace dieciocho.

Otro instrumento contraproducente utilizado por los populistas y liberales para combatir la inflación con idéntica concepción recesiva fue la *restricción del crédito*, lograda mediante regulaciones que obstaculizaban el acceso a los medios financieros, o más sencilla y brutalmente, mediante un costo inaccesible. O sea que a la inflación se añadió la estrechez primero, y el colap-

so financiero, luego, de los cuerpos productivos e industriales. El endeudamiento, muchas veces por encima del valor de los activos, fue el resultado para las empresas que no quebraron.

El *emпинamiento del gasto público* fue otro común denominador. Uno lo practicaron alegremente y otros con impudicia. Estadistas declarados los populistas, estadistas inconfesos los liberales, ambos producen el mismo efecto. Ciertamente es que la política recesiva no deja margen alguno para rebajar el gasto oficial, pero es que las dos orientaciones son más consecuentemente recesistas que racionalizadoras.

Y el desequilibrio que invariablemente tuvieron en materia de gasto público, lo financiaron extrayendo recursos del circuito productivo: unos, con emisión inflacionaria y otros, con el mismo procedimiento más la absorción de recursos en la plaza financiera. Que ésta última operara a tasas de interés totalmente incompatibles con la producción no importaba demasiado, servía de todos modos a la fase aperturista.

Tanta identidad en los instrumentos no es casual. Ambos proyectos —por antagónicos que parezcan en el plano de la propaganda y la retórica— obedecen a una misma filiación conceptual: la que niega que en la base de toda economía esté la producción y que atiende a los efectos como si fuesen los fenómenos esenciales. Insiste en operar sobre la sombra sin ocuparse del cuerpo y su agonía.

Las dos corrientes intentan manejar burocrática y arbitrariamente las variables económicas centrales: salarios, precios, tarifas y tipo de cambio. Nosotros proponemos el sinceramiento total de todas esas variables. Liberales y populistas prefieren operar sobre la epidermis monetaria y financiera. Es verdad que los liberales hablan de sincerar, pero no dicen ni una palabra de la necesidad primordial de sincerar el salario y asegurar que responda a las necesidades del trabajador y su familia. Su sinceramiento es falaz, incompleto, antipopular.

El sinceramiento completo es una clave para analizar cualquier política económica, puesto que es una condición indispensable para que la *inversión* pueda producirse. No es casual tampoco que sea ella la primera víctima de las políticas aplicadas. Sin inversión no hay proceso de acumulación y sin éste no hay

posibilidad de modificar la situación estructural de la economía. De lo que se trata es de dirigirla hacia los sectores básicos, con efectos reproductivos sobre el resto de las actividades.

Lo que caracteriza a populistas y liberales es su insolencia conceptual, su desconocimiento de las leyes de la economía, su negativa a recurrir a la ciencia y a la experiencia histórica para revisar los criterios que aplicados una y otra vez han desembocado inevitablemente en el fracaso. Es imposible pensar que todos los grupos dirigentes actúan de ese modo por compromisos espurios con el factor externo. El error está antes situado en la conciencia, en la rutina intelectual con que son enfrentados los problemas y en la negativa a admitir la gravedad de la crisis en toda su extensión. Mientras esa actitud se mantenga, se acentuará el divorcio que hoy existe entre las apetencias de las bases y la ineptitud de las dirigencias.

Un ejemplo del desconocimiento científico que esas dirigencias tienen de la realidad está dado por su ignorancia de un fenómeno tan insoslayable como es el deterioro en los términos del intercambio. No se le asigna carácter de ley, cuando se lo admite, y sólo se lo considera de existencia circunstancial. Por ese camino se llega a negar el empobrecimiento sistemático al que se encuentra sometida la comunidad nacional en razón de su estructura primaria y desintegrada. Es evidente cómo a partir de ese error se niega en consecuencia la necesidad imperiosa de modificar la estructura productiva mediante la integración acelerada de la economía a partir de los sectores básicos, cuya inexistencia o debilidad congénita asegura la perpetuación de la dependencia como un fenómeno objetivo.

La identidad entre ambas políticas —populista y liberal—, no impide un análisis pormenorizado de ambos ensayos. Reiteremos que la llevada a cabo por Martínez de Hoz y sus continuadores —quienes no modificaron la esencia del modelo, sino que le hicieron todos los retoques necesarios para que siguiera vigente— sucede en el tiempo a la que implementó Gelbard y continuaron Gómez Morales, Rodrigo, Bonanni y Cafiero. Los efectos de aquella se acumulan a los de ésta de un modo que no puede ser representado con una mera suma. Sin embargo, el modelo de Martínez de Hoz fue mucho más lejos.

Contó con condiciones políticas únicas: respaldo de la cúpula militar sin condicionamientos (las Fuerzas Armadas estaban empeñadas en la lucha contra la subversión y su cúpula empalmó esa misión —contradictoriamente— con el apuntalamiento de un modelo económico antinacional) y una dispersión de las fuerzas sociales y políticas que podían organizar una acción dirigida a la modificación del plan. Contó, pues, con la posibilidad de avanzar mucho más que todos los anteriores en el sometimiento de la economía nacional al esquema regido por las multinacionales.

El principio doctrinario que guió este modelo todavía vigente fue el de la "apertura", el nuevo término con el que se designó lo que antes se denominaba librecambismo y que fue asumido por las clases dirigentes que entre 1880 y 1910 dirigieron la próspera etapa de crecimiento, durante la cual parecía que la Argentina estaba destinada a un crecimiento sin límites. Pero ese crecimiento era unilateral y encerraba los gérmenes de su futura declinación. Fue próspero mientras la situación internacional le era propicia y mientras la incorporación de nuevas tierras a la producción agropecuaria podía cumplirse —sobre la base de una demanda interna de esos productos realmente baja—, pero se agotó cuando se acabaron las tierras a ocupar, se modificó la división internacional del trabajo y aumentó la población y su demanda de bienes alimentarios. Hacia 1908, según Alejandro Bunge, la Argentina era ya un país estático desde el punto de vista económico. Con la crisis de 1930, se cerró toda perspectiva de prosperidad sin modificar el modelo.

Medio siglo después, a pesar del anacronismo que significaba y respondiendo al reacomodamiento del sistema monopólico, desde 1976, se ensayó hasta las últimas consecuencias el modelo aperturista. En rigor, el ajuste ya había comenzado con Gelbard, como veremos, quien preparó la mayor subordinación de nuestro país al factor externo; pero fue Martínez de Hoz quien pudo avanzar decisivamente. Con la falsa premisa de que el país tiene una "economía básicamente sana" cuyo principal inconveniente proviene de la inflación —tomando como causa lo que es sólo un pernicioso efecto de los males de fondo—, se sometió la producción argentina a una desigual competencia con el exte-

rior. Desigual, porque la competencia externa tiene en su favor provenir de economías integradas o de enclaves regidos por las multinacionales, lo cual en cualquiera de los dos casos asegura menores costos. Pero, además, se trató de una competencia subsidiada por la subvaluación del dólar lograda artificialmente, que llegó a estar a la mitad de su valor real para mantener abierto el flujo de capitales especulativos desde el exterior, que sostenían el modelo aperturista.

Es imprescindible, sin embargo, para efectuar ordenadamente la revisión crítica del pasado reciente, repasar los tramos principales de la gestión populista. Con las claves analógicas que anteceden, surgirán como evidencias los pasos que se dieron en la dirección equivocada y que alejaron al gobierno peronista del Frente Nacional, haciéndole dar las espaldas al programa que entonces como ahora podía sacar al país a marchas forzadas de la crisis. Ese programa fue condensado primero en la propuesta frentista del general Perón, *La única verdad es la realidad*, de febrero de 1972, y reseñada en el programa primigenio del FREJULI, que Gelbard y su equipo ignoraron olímpicamente, aplicando en su lugar el de la Hora del Pueblo y las pautas que sirvieron de base al entendimiento entre las cúpulas de la CGE y la CGT que, por otra parte, guardaban mucha similitud con la propuesta acuerdistá motorizada desde el gobierno del general Lanusse.

Esa tarea no sólo tiene un interés histórico, que por otra parte es fundamental. Sirve directamente al debate político de estos días, en términos de la campaña electoral y sobre el sentido que orientará el accionar político del próximo gobierno. No es infrecuente escuchar opiniones que confrontan el modelo de Martínez de Hoz con el plan aplicado por Gelbard, intentando revalorizar este último. En la mente de quienes así razonan se plantea la rotación populismo-liberalismo-populismo como si no fuesen piezas ajustables de un mismo juego de consecuencias destructivas.

2. El populismo, una estrategia antipopular

Con la masiva victoria del 11 de marzo de 1973, refrendada

en setiembre por una inmensa masa de electores, se abrió una instancia que se cerraría tres años después en un contexto verdaderamente caótico. Los contenidos frentistas que exigían la superación del pasado y la apertura de una etapa radicalmente nueva fueron evidentes en el resultado de las urnas —una mayoría indudable respaldaba el cambio de política— pero ese dato fue desconocido por la conducción gubernamental que debía titularizar el proceso de transformación. Con el respaldo del radicalismo y el concurso abierto de las dirigencias sociales no involucradas hasta entonces en la alianza, se aplicó el plan que perpetuaría el statu quo.

Como había ocurrido con Krieger Vasena en 1967 y se repitió con Martínez de Hoz en 1976, Gelbard determinó desde el Ministerio de Economía lo esencial de la política aplicada por el gobierno. Desde el comienzo de su gestión, aun antes de que se estabilizara el esquema institucional (entre mayo y octubre de 1973 hubo tres presidentes), aplicó un plan que no dejaba lugar a dudas sobre su inspiración y su dirección. Ese plan se aprobó por vía legislativa y consistió en un paquete de leyes que regulaban lo central de la orientación elegida. En el debate correspondiente —su parte más ardua se registró en el seno del bloque mayoritario que integraban los legisladores desarrollistas— se planteó a fondo la discrepancia del MID con la conducción económica.

Los diputados desarrollistas, en disciplinada acción de acuerdo con la conducción partidaria, hicieron públicas punto por punto sus discrepancias con las medidas fundamentales impulsadas por Gelbard y su equipo. Se cuestionó un magro aumento de salarios nominales concedido entonces, que en los hechos consagraba la disminución del poder adquisitivo del salario pues no reconocía el deterioro sufrido en los ingresos fijos que en promedio alcanzaba al 60%. La insuficiencia del carácter proteccionista de la política arancelaria y el manejo discriminatorio de los cupos de importación también acentuarían el creciente control monopolístico. La promoción industrial anunciada omitía deliberadamente las prioridades de la industria pesada y excluía cualquier tipo de estímulo al capital extranjero. La radicación de capitales estaba condicionada de tal manera que en los

hechos significó cerrar toda cooperación financiera externa para los sectores básicos de los que el país no puede prescindir.

El mismo criterio se mantuvo para otras áreas de la actividad productiva: las medidas previstas para el sector agropecuario o resultarían inoperantes o añadirían mayor desaliento a la producción; la ley de promoción minera determinaba la imposibilidad de todo desenvolvimiento del sector al excluir la participación de la gran empresa minera integrada, nacional o extranjera. La presión tributaria aumentó y resultó insuficiente la moratoria implementada. Los engendros burocráticos, como la Corporación de la pequeña y mediana empresa —diseñada para auspiciar la concentración vertical u horizontal de los sectores industriales de acuerdo con la estrategia de los monopolios— y la Corporación de empresas estatales, que serviría al criterio de seguir aumentando las actividades absorbidas por el sector público, también fueron incluidos en las críticas formuladas entonces. Los resultados posteriores —que mostraron el cumplimiento de cada una de las previsiones realizadas—, probaron lo acertado de las críticas.

En esos agitados días, antes de que el general Perón recibiera el gran respaldo electoral que lo llevó por tercera vez a la presidencia de la Nación —ejercida menos de un año hasta su muerte—, tuvimos oportunidad de exponer personalmente en un reportaje, en forma prolija, nuestra discrepancia con el camino elegido. Vale la pena recordar hoy el tramo donde se exponen las diferencias con el plan económico: "Queda dicho que *disiento con el plan Gelbard*, no en detalles sino en su concepción. Es decir, que disiento con él en líneas generales, aparte de las numerosas objeciones particulares que puede merecer esta o aquella ley. A mi modo de ver es una *reedición fiel del plan Krieger* y debo repetir a su respecto lo que, casi en la soledad, afirmé del programa de marzo de 1967 cuando se lo dio a conocer. Baste señalar que lo que se pretende es una ofensiva frontal contra el problema inflacionario deliberadamente orientada a paralizar prácticamente el proceso de inversión para que queden en evidencia las identidades. Como entonces, se pretende atacar directamente a los precios mediante la congelación de salarios, la acen-
tuación de la presión fiscal y la restricción de los créditos. Como

entonces, se omite cuidadosamente toda promoción de la inversión en los sectores críticos, en especial los de la industria pesada. Se agrega a las propuestas de entonces la restricción de la inversión pública y la reducción de precios que, por supuesto, habrá de proyectar sus consecuencias inmediatas sobre la privada. También, como durante la vigencia del plan Krieger, se utiliza como pieza maestra el control de los precios agropecuarios, y los instrumentos de policía administrativa reemplazan al acuerdo con las grandes empresas que entonces, como ahora, saben que pueden soportar una etapa de recesión, lo que no ocurre con las medianas y las chicas.

"La discrepancia es, pues, global. Si consideramos que la ley de inversiones extranjeras conducirá a la desinversión o que el proyecto sobre corporación de empresas del Estado creará un nuevo monstruo burocrático, o que la nacionalización de depósitos bancarios nada hace a la política de créditos, todo eso importa poco si se lo aísla de la estrategia del plan. De más está decir que sus resultados nos conducirán, caso de mantenerse la línea, a una reedición agravada de la que dejó la política de Krieger y sus continuadores. Más quiebras, más empresas argentinas desnacionalizadas ostensiblemente o no, más debilidad del aparato productivo nacional para afrontar sus dificultades en el sector externo. Y, al cabo, una redistribución del ingreso todavía más regresiva. Sobre esta base no puedo formular observaciones parciales. Lo que se requiere aquí es un cambio realmente de fondo. Hay que atacar la inflación, pero sólo como parte de un programa que estimule las inversiones en todos los sectores de la economía nacional y las promueva en las industrias de base, los servicios de infraestructura y el sector agropecuario. Hay que estimular sin temores el crecimiento del mercado interno mediante una política de salarios, crédito e impuestos que atienda a las necesidades de consumidores y empresarios. No hay ninguna manera de estabilizar el país resolviendo amputaciones ni estancamiento. Se han hecho demasiadas experiencias de "estabilización" sin desarrollo para que se imponga una más a la Argentina, justamente en el momento en que enfrenta un proceso revolucionario de profundidad, sin precedentes que también es amenazador" (12 de agosto de 1973).

Dieciocho meses después del comienzo de su gestión, Gelbard abandonó el Ministerio de Economía. Era evidente entonces la necesidad de un replanteo total, pues se comenzaba a recoger los resultados que traía la política aplicada hasta entonces. El equipo saliente había perdido toda capacidad de iniciativa conforme se agotó la expectativa favorable con que fue recibido, usufructuando el enorme respaldo con que contaba el gobierno. Se hizo cargo entonces de la cartera un economista de probada militancia en el movimiento peronista, el doctor Alfredo Gómez Morales. El MID consideró en ese momento, y así lo hizo saber, que se abría una instancia que era necesario aprovechar para introducir un cambio sustancial en la política y de ese modo responder a las expectativas de la población.

El país se enfrentaba a una alternativa de hierro: o recaía en recetas monetaristas con la vana intención de frenar la inflación o asumía el desafío de lanzarse con toda energía por el camino del desarrollo.

La gestión de Gómez Morales terminó sin lograr imprimir un cambio sustancial. Viene entonces el episodio Rodrigo, sobre el cual no pocos analistas superficiales centran la responsabilidad de la caótica situación que siguió. En realidad, las condiciones de estallido se habían acumulado desde tiempo atrás. Tras el tristemente célebre "shock" de Rodrigo, expusimos nuestra opinión, que ponía las responsabilidades en su lugar. Antes de que se anunciara el plan Rodrigo y después de su intento de sinceramiento sin desarrollo (junio de 1975) dijimos que el país esperaba medidas de fondo.

Nuestro análisis fue el siguiente: "Las medidas adoptadas por el nuevo equipo económico han producido un tremendo impacto en la opinión pública. Ese impacto es proporcionado a los efectos que tendrán sobre el nivel de vida de la casi totalidad de los sectores del pueblo argentino. Cualquier razonamiento que se pueda hacer en torno de un paquete de decisiones del tipo de las adoptadas debe partir de la premisa de que es difícil debatirlas con serenidad cuando su efecto inmediato e inevitable es un brusco descenso en la capacidad de consumo popular. Menos aún cuando ese descenso tiene como punto de partida los bajos niveles actuales y cuando no puede imputarse a la pobla-

ción responsabilidad alguna en la configuración del cuadro que hizo inevitable la adopción de las medidas.

"Analizadas en sí mismas, las principales decisiones se presentaban como inevitables. Dos años de política económica que se orientó deliberadamente a paralizar totalmente el esfuerzo de inversión tiene un precio que tarde o temprano se debe pagar. Lo lamentable es que el esfuerzo que se impone a la población debe hacerse desde un punto que no tiene precedentes, por lo bajo y débil en la situación económica del país. Nadie puede discutir que las tarifas vigentes hacían totalmente imposible la continuación en el simple suministro de los servicios públicos más esenciales. Si quedaba descartada la posibilidad de ampliar a nuevos sectores de la población esos servicios a partir de la orientación adoptada por el equipo Gelbard, había llegado un punto en el que resultaba insostenible continuar con la ficción de los precios políticos. El caso más típico es el de los combustibles: un país que renuncia deliberadamente, por el acuerdo de casi la totalidad de sus sectores políticos dirigentes, a extraer el petróleo que desborda del subsuelo, tiene que resignarse a la realidad de los actuales precios internacionales. Si los argentinos no quieren sacar su propio petróleo a partir de la inconcebible subsistencia de la política Radical del Pueblo, nadie puede evitar que deban pagar el precio que fija el monopolio de los países exportadores. No se conoce tampoco ninguna fórmula mágica capaz de mantener el precio del pasaje de tren o subterráneo quince veces por debajo del nivel internacional. El largo tiempo en que se mantuvo esta ficción fue posible porque el déficit del servicio prestado a un grupo limitado de usuarios porteños lo pagaba el país entero y por la renuncia a través de largos años a ampliar las redes de esos servicios a los sectores permanentemente relegados de la población. En cuanto al tipo de cambio que se insistió en preservar, bastaba una ojeada a las vidrieras de Buenos Aires repletas de artículos importados a la mitad del precio de sus países de origen y aun así sólo accesibles a los grupos de más altos ingresos, para apreciar no sólo la inconsistencia económica sino también la intrínseca injusticia de tal situación.

"Sin embargo, no es posible formular un juicio acerca de las medidas adoptadas sin tener una clara idea del contexto dentro

del cual han sido concebidas. En efecto: adoptadas como están, en el actual estado de la economía argentina, consisten *tan sólo en un tremendo ajuste de la capacidad de ahorro de la población con el solo objeto de solventar el déficit de una estructura estatal totalmente ineficiente*. Su efecto no puede ser otro que el de provocar una fuerte baja de la demanda y orientar a la economía por los senderos de una severa recesión. Los entusiastas sostenedores del ahorro nacional como instrumento único del desarrollo pueden congraciarse con un esfuerzo de severidad sin precedentes para convocarlo.

"Ese juicio sería más fácil si las medidas orientadas a la estabilización hubieran sido siguientes a un claro programa de inversiones en el sector público y privado. No cabe duda de que tal hubiera sido el orden lógico, no sólo porque el debate quedaría clarificado desde el primer momento sino porque el importante factor de las expectativas económicas hubiera empezado a operar con signo diferente. En efecto: un paquete de medidas monetarias y financieras, anticipado a una decisión salarial e independiente de un programa de inversiones produce, como lo demuestra una larga experiencia argentina, inmediatas expectativas inflacionarias que afectan la base del programa escogido. Esas expectativas operan por encima del inevitable impacto inflacionario siguiente a la adecuación de los precios. Por otra parte, las decisiones económicas no se adoptan en el vacío económico y social, por ejemplo, el drástico incremento en el precio de los combustibles sucede a otros tres, también muy drásticos, adoptados por las anteriores conducciones económicas, cuyo solo resultado fue profundizar nuestra dependencia del petróleo importado. Es un error creer que el pueblo argentino ha olvidado esta reciente experiencia.

"En síntesis: la Argentina necesita con urgencia dramática incrementar la producción en todos los sectores de su economía. Necesita restablecer el ciclo de inversiones públicas y privadas, prácticamente interrumpido a partir del 25 de Mayo de 1973. Necesita enfrentar con seriedad, de una vez por todas, este problema oscurecido por todas las formulaciones irresponsables de quienes han provocado o concertado la actual situación y ahora se asombran de sus consecuencias. Se hace imperioso

reflexionar, todavía, que el sector de la economía nacional cuya virtual expropiación ha hecho posible la persistencia de tantos errores, el sector agropecuario, se acerca a un punto de inevitable parálisis. La situación es sumamente seria y la única posibilidad de corregirla es un giro total en la política hasta ahora seguida. Actuar tan sólo sobre algunos instrumentos monetarios representará una nueva experiencia falsamente estabilizadora que condenará a la desaparición a centenares de miles de pequeñas empresas y encenderá focos de agitación social de peligrosidad imprevisible" (11 de junio de 1975).

Falto de toda pretensión transformadora, el plan Rodrigo devino en un crudo plan monetarista. Su sinceramiento inicial impuesto por las circunstancias, no se propuso ser el pórtico de una experiencia de desarrollo acelerado. Como el de los liberales —no en vano entre los principales funcionarios de Rodrigo se contaba Ricardo Zinn— ese sinceramiento no perseguía restablecer el proceso de inversión, sino todo lo contrario: combatir con receso una inflación descontrolada. Su suerte estaba echada desde el momento en que fue concebido. Fue una prueba más de la miopía y falta de respuestas imaginativas para enfrentar la crisis por parte de los grupos dirigentes. Su insolvencia técnica iba de la mano con la falta de visión de los problemas fundamentales de la sociedad, precisamente aquellos a los que había que dar respuesta.

Lo que se llamó "Pacto Social", en 1973, que consistía en refrenar los reclamos de las bases obreras y empresarias poniendo límites al ascenso del salario y a la rentabilidad de las empresas, manteniendo un aparato estatal que sofoca con su hipertrofia las actividades productivas al extraer de ellas recursos sin contrapartida en bienes, pasó a llamarse hacia fines de la experiencia populista "política de concertación".

Cuando Antonio Cafiero se hizo cargo del Ministerio de Economía, esta idea se hizo "leit-motiv". Se insistía en la necesidad de "concertar" entre los diversos sectores y clases sociales, cuando lo que se requería era revertir el proceso de desnacionalización en que se encontraba la economía argentina. El salario real había vuelto a los niveles de 1973 y seguía muy acosado por la inflación, que alcanzaba para 1975 al 300% anual. Las empre-

sas tenían capacidad ociosa, y a la pérdida de valor del salario se sumaba la desocupación. La situación de pagos externos se acercaba a un punto crítico por el aumento de las obligaciones y la inexistencia de reservas para hacerles frente. La deuda externa se incrementaba, en esas condiciones, muy fuertemente.

La violencia se instalaba, además, en el centro de la vida social, desquiciándola, y creando condiciones irrefrenables de crisis institucional. El FREJULI, agotado en su capacidad de expresar la alianza de clases y sectores sociales, nada tenía que ver desde hacía tiempo con el Frente real. Otra etapa se abría, bajo los signos más pesimistas, para la vida política argentina. El desafío no sería asumido en plenitud.

CAPITULO III

***1976-1983: UNA COMUNIDAD MAS POBRE, UN PAIS
MAS SUBDESARROLLADO***

La descomposición social, el caos en la producción, el vacío de poder eran los rasgos dominantes de la comunidad argentina en el verano de 1976. En esta atmósfera se gestó el desplazamiento de las últimas autoridades constitucionales por las Fuerzas Armadas. Por severa que pueda ser la condena a la política que entonces se inauguró, no puede echarse al olvido la intensidad de los factores de desintegración nacional que actuaban en aquel momento; que fueron alimentados por el fracaso del gobierno popular, no por su éxito. La legitimidad originaria de la fórmula Perón-Perón, que obtuvo la más amplia mayoría de la historia reciente, encontró su punto de extinción en la incapacidad de los grupos que conducían al partido gobernante para enfrentar la crisis. La legalidad de las instituciones, vacía de contenido, no podía sostenerse. Tampoco el sistema formal de los partidos políticos estaba en condiciones de recomponer el poder gubernamental.

Con todo lo acuciantes que eran esos síntomas del deterioro nacional, el centro de gravedad de la crisis estaba en el núcleo del desenvolvimiento social: en la devastación que sufrían las fuerzas productivas. La recesión se profundizaba día por día, el consumo se afiebraba, acosado por el envilecimiento de la moneda. Las industrias básicas existentes elevaban su capacidad

ociosa. Las empresas industriales y comerciales funcionaban sistemáticamente a pérdida. La falta de inversiones se había convertido en una masiva corriente de desinversión, una fuga de capitales que trataban de alejarse del naufragio.

La restauración del orden social era entonces el primer cometido en el relevo gubernamental; en tal cuadro de desquicio nacional, en el que estaba cuestionado hasta el monopolio de la fuerza por el Estado, incapaz de asegurar vida, trabajo y bienes a los argentinos.

1. Diagnóstico errado: "Una economía básicamente sana"

Una semana después del alzamiento militar de marzo de 1976, el 2 de abril, el flamante ministro de Economía de lo que se denominó el "Proceso de Reorganización Nacional" expuso su plan económico: este programa impulsaría las tendencias primordiales que seguiría la comunidad argentina durante los siete años posteriores, sin variaciones sustanciales hasta el tramo final de una experiencia que ya se puede juzgar definitivamente fracasada.

José A. Martínez de Hoz sentó el punto de partida de esa política de fondo del "Proceso" en el presupuesto de que se trataba de actuar sobre una "economía básicamente sana", en la que apenas debían introducirse correcciones ordenadoras para que tomase el camino de la expansión y el progreso.

Con esa presunción, Martínez de Hoz afirmó que su programa trasladaría a la Argentina de una economía de especulación a una economía de producción. A su vez aseguró que resolvería los problemas del sector externo, sanearía la moneda, ampliaría las posibilidades e ingresos del agro, elevaría "razonablemente" los salarios. La verdad es que nada de esto ocurrió, sino todo lo contrario, a partir de que en realidad no se trataba de una "economía básicamente sana" sino de una economía básicamente enferma, enferma de subdesarrollo.

Detrás de ese rosario de intenciones, empero, quedó dibujado un típico plan de "estabilización" de corte idéntico al que ya había aplicado fracasadamente Krieger Vasena desde marzo de

1967; aunque ahora se lo llevaría hasta extremos no alcanzados.

El ministro señaló que el país afrontaba su "peor crisis". Pero al describirla la identificó con la inestabilidad monetaria, de donde se desprendía que todo el énfasis estaría depositado en la epidermis de esa crisis: los índices de la inflación eran el mal a curar; no se denunció ni se pretendió corregir ningún vicio profundo, a pesar de que la propia inflación tiene su verdadero origen en las estrecheces del aparato productivo.

En el enfoque e inclusive en su implementación inicial, el programa de abril de 1976 reprodujo el tradicional esquema recesivo de las escuelas monetaristas. Desde el comienzo, el plan estuvo signado por un fracaso inexorable; aunque únicamente el desarrollismo pronosticó oportunamente este destino. Otros críticos lo percibirían tres años más tarde, sólo cuando los resultados saltaban a la vista. Más aún, hubo cuestionadores formales que siguieron defendiendo la supuesta "filosofía" del plan de Martínez de Hoz, por más que objetaban lo que dieron en llamar "desvíos instrumentales". Alvaro Alsogaray, por ejemplo, postulaba todavía en febrero de 1979 que "no hay que volver atrás, no hay que echar por la borda todo lo bueno que se ha hecho. No hay que prestar oídos a las críticas indocumentadas y no hay que tolerar la insidia desarrollista".

El MID, en cambio, a sólo 17 días de su lanzamiento denunció el carácter del programa económico y social del "Proceso", y acusó allí las consecuencias que irremisiblemente acarrearía.

Conviene recordar aquel texto, diseñado como un memorándum de circulación interna (Nº 2, sobre la política económica) ya que era el momento más intenso de la veda política; pero que alcanzó amplia difusión periodística. Y no es oficioso traerlo a colación sólo en honor a la verdad histórica —no se podrá decir que no hubo advertencias acerca de los efectos que acusaría el planteo económico impuesto— sino porque demuestra la cierta eficacia del método de análisis empleado por el desarrollismo.

En las "conclusiones" de aquel memorándum se afirmó: "1. El plan Martínez de Hoz responde a la concepción de otros anteriores, de inspiración monetarista y objetivos simplemente estabilizadores.

"2. Es verdad que se habla de fomentar la producción y las inversiones, pero las medidas propuestas en materia tributaria, cambiaria y tarifaria conspiran contra la formación del ahorro y las inversiones.

"3. Con el justificado objetivo de corregir la recesión, o de no profundizarla al menos, se incurre en un gradualismo que ya fracasó en el pasado, y se omiten políticas de fondo que son las únicas aptas para reconstruir la economía.

"4. A este respecto, llama la atención el tratamiento marginal que se da a las inversiones en la industria de base. En cuanto a las inversiones de infraestructura, la timidez en suprimir las tarifas políticas resultará en la imposibilidad de reducir el enorme déficit de las empresas del Estado y de preservar las inversiones.

"5. Es erróneo —y la práctica universal lo demuestra— dar prelación a la política de estabilidad sobre la de desarrollo, alegando que es indispensable comenzar por ordenar las finanzas y contener la inflación, antes de lanzarse a un plan de inversiones prioritarias en los sectores básicos. La acción debe ser simultánea y se debe imprimir urgencia a la política de inversiones, pues la experiencia demuestra que solamente ella incrementa la oferta y diversifica la producción, única política eficaz para combatir la inflación.

"6. El plan pone —correctamente— énfasis en el estímulo a la economía agropecuaria y a las exportaciones. Pero se ha comprobado que una política de incremento de los precios agropecuarios es incompatible con una política crudamente estabilizadora, dada la incidencia de esos precios en el salario real de los trabajadores.

"7. Finalmente, cabe señalar que la insuficiencia del plan obedece al error de enfoque sobre las causas de la crisis argentina. A semejanza de anteriores ministros, el doctor Martínez de Hoz afirma que nuestra economía es fundamentalmente sana y que sólo hay que "corregir" sus distorsiones. Se esperaba que después de tantos años de incurrir en ese equívoco —con los resultados consiguientes— se elaborara una política orgánica de cambios

fundamentales en la atrasada y dependiente estructura de producción de nuestro país, causa verdadera de la crisis. Y no es verdad que éste sea un objetivo a muy largo plazo. Podrá requerirse cierto tiempo para su ejecución, pero es urgente ponerlo en marcha antes de que se agote el margen, cada vez menos extenso, que la comunidad otorga a quienes le prometen liberarla del estancamiento en que se encuentra" (19 de abril de 1976).

Lamentablemente esos vaticinios no fueron escuchados. Al contrario, nuestro aporte fue descalificado públicamente (como también se puede ver en la crónica de aquella época) y los desarrollistas fuimos acusados de "agoreros".

¿Por qué teníamos tanta certeza? ¿Por qué la realidad demostró tan cabalmente la precisión de nuestros pronósticos?

Porque, una vez más, de la mano con el error en el diagnóstico, aparecía la política económica exactamente contraindicada para atacar los males que sufría —y padece ahora más intensamente— la Argentina.

En vez de ser entendida como el síntoma que es del deterioro económico que afecta al país, la inflación fue señalada como el factor determinante del menoscabo productivo. Oculta por la ceguera ideológica su causa esencial, que es la insuficiencia crónica del aparato económico para atender los requerimientos de la comunidad, la política oficial volvió a reprimir los efectos de la inflación. En lugar de afrontar la fragilidad —cuantitativa y cualitativa— de la oferta nacional de bienes y servicios, apuntó contra un presunto exceso de la demanda y, por ende, del consumo. Un criterio que desembocó de inmediato en la reducción de los salarios reales y en la depredación de la capacidad adquisitiva de la población.

A través de este enfoque, se agravaron los motivos profundos de la multiplicación inflacionaria aunque se lograra una moderación temporaria de los índices de precios (que son sólo una muestra de la inflación). La contracción del mercado, con la que se pretendía combatir el alza generalizada de precios, se corporizó en un receso que dejó amplias franjas de capacidad productiva ociosa, con obvio aumento en los costos unitarios de bienes y productos, lo cual vino a echar todavía más leña a la inflación.

2. El salario, "variable de ajuste"

Esa utilización del salario como "variable de ajuste" dirigida a contener las manifestaciones inflacionarias puso al desnudo una profunda indigencia teórica acerca del carácter del ingreso y el consumo de los trabajadores. Conviene dejar sentada esta cuestión porque, más allá de mostrar la raíz de los errores cometidos, ilumina el camino de las soluciones.

El salario es la expresión en dinero del costo de la fuerza de trabajo. Porque el salario, la retribución de los trabajadores, es representativa de la necesidad de sostener esa capacidad laboral; alimenta la fuerza de trabajo actual de los trabajadores y la fuerza de trabajo futura que está acunándose en la procreación y mantenimiento de su familia.

Por eso, cuando con la pretensión de restar presión a la demanda por vía de la rebaja del consumo se deprime arbitrariamente el salario por debajo de la posibilidad de atender las necesidades históricas concretas de los trabajadores, se está cercenando un consumo productivo: el consumo que alimenta el vigor del trabajo presente y del porvenir.

Al desconocerse este principio —en lo que incurren tanto los liberales como los populistas— se impone una reducción artificial del mercado, que desalienta la producción y la inversión; así como se minan las bases productivas de la comunidad, especialmente porque se inhibe el sostén del núcleo generador de la riqueza social, que es el trabajo humano.

Nada menos que este atentado fundamental cometió el programa económico ejecutado en un principio por Martínez de Hoz y prolongado, en lo sustancial, por sus sucesores; desde la óptica del salario y del mercado, en ningún punto desde 1976 hasta ahora la capacidad adquisitiva del grueso de la población nacional tuvo una recuperación duradera, ya que en el extremo en que ha desembocado el país, el salario medio de los argentinos representa la mitad del costo estadístico de la canasta familiar de bienes y servicios. Peor todavía: a la luz de los antecedentes inmediatos, el salario ha retrocedido virtualmente hasta la tercera parte de su significación histórica real.

Esas restricciones aplicadas férreamente al mercado interno de producción y consumo fueron articuladas con la "apertura económica". Este nombre es sólo una moderna designación del librecambio, que tan repetidamente en la historia argentina impidió la industrialización integrada del país. Consistió ahora (dicho sea sin perjuicio del análisis especial que merece, pág. 84 y sig.) en favorecer la importación —productos que venían a sustituir a los nacionales— con el propósito de detener el alza de precios a través del ingreso subsidiado de esos artículos provenientes del exterior: un subsidio que se corporizó especialmente en el retraso del tipo de cambio.

El mismo freno artificial de la inflación se obtenía también, a la inversa, porque ese retraso cambiario desalentaba igualmente las exportaciones engrosando la oferta local arbitrariamente, en la medida en que se deterioraba la retribución de las colocaciones externas.

En ese cerrojo aplicado a los mercados interno y externo, con el consiguiente desaliento para las actividades productivas y la inversión, estaba implícito el naufragio de los que inicialmente aparecieron como "buenos propósitos" de la conducción económica: allí quedaban ahogadas las postulaciones de ampliar la rentabilidad del agro, el verdadero saneamiento del sector externo y, por supuesto, se arriaba de hecho la bandera de elevar el ingreso popular. Más aún, el enunciado que no se deja de formular por los supuestos estabilizadores, de constreñir el sector público y el déficit fiscal —que se asocia con las infulas anti-inflacionarias— se estrelló contra la recesión, que obstruye el traslado desde el sector público de mano de obra y recursos a las actividades más productivas.

El desarrollismo denunció esta inopinada orientación apenas se lanzó el programa de Martínez de Hoz. Nueve meses después estaba en pleno curso, aunque más adelante alcanzaría los mayores extremos, impulsada por mecanismos cada vez más perversos, puestos en acción a medida que fue comprobándose el fracaso en los primeros pasos del plan. En lugar de corregir el rumbo, como era necesario con toda evidencia, se insistió en aherrojar el esquema. Interesa recordar aquellos flagrantes tropiezos, pues el contraste de la realidad con los objetivos pro-

puestos marca también la contumacia oficial de forzar la misma política sin solución de continuidad, a pesar de que sus propios resultados señalaban el fracaso, confirmando las advertencias que se formularon —como las nuestras— desde el primer momento.

A fines de 1976, debido al embate recesivo, la actividad económica se caracterizaba por un leve achatamiento en las curvas de los índices de precios, mientras que la recuperación del equilibrio externo formal (muy auspiciada por el respaldo financiero externo que se pudo recobrar merced al retorno del orden que por entonces garantizaban las Fuerzas Armadas) se había logrado mediante el empobrecimiento de los once millones de trabajadores, del millón y medio de empresarios urbanos y de los dos millones de productores rurales argentinos. Otra suerte corría aún el par de centenares de empresas líderes que se beneficiaban con la concentración económica incitada por las determinaciones oficiales y la trama financiera que se favorecía con el giro especulativo interno y externo.

Los desbordes de la administración y las empresas públicas se mantenían intactos, después de la desmedida expansión que habían protagonizado entre 1972 y 1975. El sector público no sólo seguía contribuyendo a la destrucción del salario, sino que continuaba siendo en mucho responsable de los altos costos de los empresarios nacionales, que ya empezaban a sufrir las afrentas que provocaría la devastación de las producciones argentinas en nombre de la "apertura" y la "eficiencia". Un Estado que competía con las actividades económicas en la plaza financiera, de donde obtenía crecientes fondos para solventar su desequilibrio, encareciendo el crédito a la producción. La falta de redimensionamiento y racionalización del Estado era, ya en diciembre de 1976, la contraprueba de la frustración en marcha.

3. El petróleo, otra vez testigo del fracaso

El hecho esencial era que ningún cambio estructural se había emprendido, mientras las medidas de saneamiento iniciales desaparecían en medio del gradualismo que se practicaba. Donde

se había prometido específicamente recuperación, como fue el caso de la producción de hidrocarburos, las posturas formales quedaban en palabras y papeles.

No compartimos la sorpresa de muchos frente a estos cursos de acción o, lo que fue peor, a la inacción, como en el caso del petróleo. A las erradas definiciones de fondo inscriptas en el programa, ya con principio de ejecución, se agregó la comprobación personal de que no existía la intención auténtica de encarar con decisión los requerimientos del país.

El petróleo aportó, de nuevo en la historia argentina, una demostración crítica de los criterios que sostienen el subdesarrollo en el país, como pude verificar personalmente. El 7 de abril de 1976, cinco días después de la presentación de su plan, almorcé con Martínez de Hoz. Si bien participaban otras tres caracterizadas personalidades, la conversación fue centrándose en un diálogo del ministro conmigo. Objeté su propuesta en general, en los términos que inmediatamente quedarían expuestos en la posición partidaria¹; pero particularicé el caso del petróleo. Cuestioné que frente a una importación que representaba el 8 por ciento del consumo, el autoabastecimiento se hubiese planteado para 1985, sin que se advirtiese ningún motivo para tal postergación.

Martínez de Hoz me respondió: "Mire, Frigerio, el petróleo va a seguir una explotación gradual. Yo no voy a hacer lo que hicieron ustedes, voy a hacer cualquier cosa menos lo que hicieron ustedes, porque no quiero que me digan lo que les dijeron a ustedes". Me quedé perplejo. Presidía la mesa en su propia casa un ex ministro de Economía que también se quedó asombrado, lo mismo que el doctor Frondizi, que estaba presente. Era algo verdaderamente inadmisibile. Entonces no me cupo otra cosa que decirle: "Pero entonces en el país hay dos razas de argentinos: los que van a la función pública para hacer lo que el país necesita y los que van a la función pública para exhibir honradez".

Quedé muy preocupado. Salí de esa reunión con la certeza de que ni el problema del petróleo, ni el problema de los ferrocarriles, ni el problema de Agua y Energía, con las consecuencias

¹ Memorandum del 19 de abril de 1976 (ver pág. 73)

históricas posteriores, iban a ser resueltos. Y efectivamente no fueron resueltos.

La anécdota ilustra un desolador desapego por la atención de los problemas y especialmente la falta de determinación para enfrentarlos. La falencia del diagnóstico tenía su confirmación en la política instaurada. La ofensiva contra la inflación mediante la contracción de la demanda y el receso; la desprotección de la producción nacional; el mantenimiento del peso aplastante del gasto público improductivo; y, por supuesto, la postergación sin término de las transformaciones estructurales fueron las líneas maestras de la gestión económica desde el mismo comienzo del Proceso.

4. El peso muerto del sector público

Descriptas ya las características de la compresión del mercado como presunta vía hacia la estabilidad monetaria, con sus efectos contraproducentes en el propio campo de la inflación y con muy gravosas consecuencias en el cuerpo social, conviene detenernos brevemente en la cuestión del sector público.

Se trata de un problema crítico de la economía argentina, pues la gravitación del Estado multiplica los costos, al mismo tiempo que su ineficiencia vulnera la productividad global. El sector público es a su vez un formidable motor de la inflación en la Argentina por su incidencia en el encarecimiento de las operaciones productivas y por la espuria financiación de su déficit. Y es un problema cuya falta de solución demuestra una y otra vez la ineptitud de los planteos liberales y populistas. Únicamente el desarrollismo logró encararlo con éxito entre 1958 y 1962. Por el contrario, la última gestión oficial prometió racionalizar y redimensionar el sector público pero concluyó con un aparato estatal agrandado, con un déficit fiscal muy superior al que existía, con un gasto público igualmente elevado y con una peor composición por la declinación relativa de las inversiones. Otro aspecto, en suma, que condena la reciente conducción económica.

Es obvio el sobredimensionamiento del sector público de la economía argentina cuando se computa que su gasto alcanzó a

un 54,2 por ciento del Producto Bruto Interno, en tanto que su déficit —bien medido— ascendió, también en 1982 a un 23,7 por ciento del PBI. Un 45 por ciento de la inversión es al mismo tiempo realizado por el sector público, naturalmente en condiciones de reducida eficacia. Y cuenta con una nómina de más de 2 millones de agentes, cuando 800 mil podrían perfectamente integrar un Estado eficiente y ágil. Posee más de 200 empresas privatizables —que tienen un desequilibrio financiero prácticamente incalculable— cuando no hay ningún motivo que lo justifique.

Resulta así que la financiación del sector público, que por uno u otro mecanismo recae sobre toda la comunidad, sustrae enormes recursos a las actividades más productivas y dinámicas. Que lo practique mediante la exacción fiscalista, de la absorción del crédito en la plaza financiera o la emisión de moneda, es indistinto en su efecto obstruyente del desenvolvimiento de la economía y desalentador de las inversiones.

Era inevitable que la política recesiva se combinara con el mantenimiento de la sobredimensión y la ineficiencia estatal, pues sin una intensa reactivación productiva las tensiones sociales y políticas impiden la racionalización del sector público. El contexto de expansión productiva es imprescindible para que se pueda acometer el achicamiento de la elephantiasis pública.

La conducción económica, sin embargo, fue sorda y ciega ante estas imperiosas necesidades, a pesar de que fueron puntualmente planteadas en el debate político nacional. Especialmente sobre estas cuestiones protagonizamos —en marzo de 1978!— una polémica pública con el propio Martínez de Hoz. No es menester cotejar ahora las distintas afirmaciones cuando los hechos han sido tan elocuentes; aunque conviene recordar los argumentos fundamentales que esgrimimos, cuya validez ha quedado demostrada ampliamente por la realidad.

Explicamos entonces:

“La riqueza no sale de la nada, como ya lo probó el fracaso de los estatistas y populistas. Los recursos que van al gasto público improductivo se sacan del consumo de las familias y de la inversión; es decir, del nivel de vida y de la posibilidad de superar la crisis y asegurar el futuro de la Argentina y de sus hijos. Esa

transferencia, esa sangría, se opera ineluctablemente a través de la emisión sin respaldo, de los impuestos y del endeudamiento que luego obliga a mayor emisión y mayores impuestos.

"La actual política económica mantiene el gasto público en esa magnitud paralizante y pretende atacar la inflación con contracciones de la demanda, tanto de bienes finales como de insumos; con contracciones de la demanda para consumo y para inversión. La consecuencia es que persiste la inflación combinada con receso. Y no hay salida porque en el actual esquema económico ambos términos actúan como vasos comunicantes: si el nivel de inflación baja, aumenta el de recesión, y a la inversa. Seguiremos teniendo, en cantidades crecientes, descontrol del índice de precios, caída del salario real, quebrantos empresarios, desempleo y empobrecimiento colectivo.

"No habrá inversión porque el gasto público devora toda posibilidad de darle incentivos. Aniquila el proceso de formación de capital. El país necesita inversiones nacionales y extranjeras, orientadas con prioridad hacia los sectores económicos fundamentales, pero no se realizarán ni las unas ni las otras. Las empresas multinacionales, que están en mejores condiciones para sobrellevar el receso y podrían aportarnos su aptitud de acumulación e innovación, preferirán ocupar los espacios del mercado que dejen por el receso las firmas argentinas sin hacer nuevas inversiones o traer bienes importados desplazando la producción nacional y la posibilidad de crear riqueza y trabajo para los argentinos.

"Y en el plano social, las consecuencias de la actual política son explosivas. No porque se exijan esfuerzos a la población. Podrían exigírselos mayores si condujeran a restablecer el proceso de inversión y abrieran perspectivas de superar la crisis. Pero el producto de esos sacrificios va al gasto público improductivo y a una minoría que operará en el mundillo financiero y en una élite de grandes empresas multinacionales. Por eso, además del empobrecimiento general, se está produciendo una polarización, una división del país entre una minoría ínfima y opulenta y la pobreza que abarca no sólo a la clase obrera sino a vastos sectores de la clase media, especialmente la de ingresos fijos. Esa polarización amenaza la paz social y puede esterilizar la victoria

sobre la subversión lograda por las Fuerzas Armadas al precio de mucha sangre y muchas vidas.

"Estoy persuadido de que hay que decir, aunque a muchos les parezca duro: con esta política económica no hay ninguna esperanza. Es evidente que ha perdido el control de las variables económicas fundamentales, pero aun cuando cumpliera sus metas y objetivos nos conduciría al fracaso. Es indiferente si recauda o no lo que se propone y si consigue o no el financiamiento que necesita, porque todo está orientado a solventar el gasto público que nos devora y a sostener una estructura productiva insostenible.

"Sólo habrá una aurora de esperanza cuando haya un cambio radical, de 180 grados, en la actual orientación económica. Cuando se ataque el gasto público y a la vez se restablezca el proceso de inversión y se emprenda el desarrollo. Esa simultaneidad es necesaria y posible, porque ambas cuestiones son interdependientes. Ya dijimos que sin atacar el gasto público no habrá proceso de inversión. A la inversa, sin desarrollo será imposible la racionalización del sector público y la privatización de cerca de 200 empresas que injustificadamente están en la órbita estatal; porque sólo una economía en expansión puede asegurar el pleno empleo y armonizar la estabilidad de precios, la elevación del nivel de vida y la inversión.

"Desgraciadamente estamos en las antípodas de eso. Lo digo con profundo dolor. Sin ánimo polémico, sin dirigirme a tal o cual adversario. Tengo una grave preocupación por el curso de los acontecimientos que no experimenté nunca en mi ya larga vida pública, pese a que ella tuvo momentos muy amargos y difíciles. Estoy persuadido de que decir francamente lo que sé y pienso es un imperativo moral, más allá del eco que puedan encontrar mis palabras. Más allá de cualquier contingencia política o personal" (17 de marzo de 1978).

En la respuesta que intentó Martínez de Hoz (22-3-78) no pudo rebatir ni corregir una sola de nuestras afirmaciones, a pesar de que mediaba una denuncia tan severa como la de señalar que el déficit público no equivalía al 1% del Producto Bruto Interno, según se afirmaba oficialmente, sino al 14 por ciento. Y la contestación, plena de excusas por la inacción gubernamen-

tal; prefirió incurrir en el agravio personal antes que considerar el problema de fondo. Por eso en la contrarréplica (25-3-78) refirmé:

"Proponer un programa global y simultáneo de reducción del gasto público y promoción de la inversión nada tiene de mágico ni de mágico. Es a la inversa. Si la política económica tuviera éxito atacando sólo uno de esos frentes, en verdad estaríamos ante una hechicería capaz de separar la sombra del cuerpo. Porque el exceso del gasto público absorbe los recursos que requiere la inversión productiva privada y porque su reducción en condiciones de receso o estancamiento provocaría un desempleo mayor del que estamos sufriendo. De allí que la única alternativa sea la simultaneidad que propusimos".

No se corrigió el rumbo entonces ni se lo rectificó después; ni durante los cinco años en los que Martínez de Hoz fue titular del Palacio de Hacienda ni a lo largo de los cuatro ministerios posteriores que completaron el período dentro del mismo esquema.

En vez de atacar simultáneamente la declinación económica y la reducción del desborde estatal, se combinaron la recesión (que imperó durante seis de los ocho ejercicios pertinentes) con la perpetuación del sobredimensionamiento y el desequilibrio público.

5. "Apertura económica": otro estatuto del subdesarrollo

Esas condiciones predominantes no se enfrentaban sino que estaban plenamente articuladas con la estrategia teórica que enmarcó la política oficial: la "apertura económica". También en este aspecto el punto de partida fue que la Argentina tiene "una economía básicamente sana". La especialización en la producción de granos, carnes y sus derivados, en cuya exportación se basan más de las tres cuartas partes de la capacidad de compra externa del país, no fue tomada como síntoma de una deficiencia estructural decisiva, sino como una mera característica nacional que no era preciso modificar.

La Argentina debía, en cambio, según la tesitura que se

implantó, aprovechar sus ventajas comparativas en esos rubros para insertarse con éxito en el mercado internacional. La ley del deterioro en los términos del intercambio que sufren las economías primarias fue desconocida. El afianzamiento del país —se afirmaba— no requería la integración de su aparato productivo a partir de las industrias básicas, sino ensanchar los canales tradicionales del comercio argentino: la Argentina debía abrir sus puertas a los productos y a los flujos financieros externos. Ti-biamente al principio, con toda energía después, estas formulaciones apuntaban precisamente a consolidar ese perfil de exportador de productos primarios, en particular alimenticios, para emplear el poder de compra que estas colocaciones produjesen en la importación de todos los bienes que la economía nacional no estuviese en condiciones de producir competitivamente, en términos mundiales de comparación.

El primer paso en este sentido fue la eliminación, progresiva en el comienzo y drástica después, de la protección arancelaria, alegando que la confrontación abierta con la competencia externa estimularía la eficiencia de las producciones locales y con el implícito que sólo subsistirían las ramas o empresas que pudieran superar este cotejo. El argumento hacía caso omiso de que la eficiencia empresarial no depende únicamente de su propia contextura, sino en grado muy significativo de la economía y de la infraestructura de que está rodeada. En otras palabras, que una empresa instalada en un país subdesarrollado como la Argentina no puede nunca afrontar la libre competencia externa que proviene de naciones altamente industrializadas, con economías de alta integración, y donde las operaciones son titularizadas por colosales corporaciones de alcance global. De acuerdo con la prédica oficial, por lo demás, junto con el avance de la eficiencia y el aflujo de las importaciones vendría la contención del alza de los precios, que se atribuía a la ineficiencia y aun a una presunta perversidad de los empresarios nacionales.

Como la reducción abrupta de las defensas aduaneras fue inconducente para lograr estos objetivos, en lugar de revisar la estrategia se recurrió a mecanismos más artificiales y filosos, como el manejo arbitrario de la paridad cambiaria mediante lo que popularmente se conoció como la "tablita del dólar".

Ese cronograma cambiario consistió en ajustar el tipo de cambio mediante una tasa prefijada muy inferior a la inflación local y estaba acompañado por pautas similares para los salarios y las tarifas. El planteo apuntaba a equiparar la inflación interna con la internacional; pero significaba también reestructurar la economía de acuerdo con las ventajas comparativas, además del freno a los precios en el corto plazo por la mayor presencia de sustitutos importados en el mercado (auspiciada también por las antiguas y nuevas rebajas arancelarias).

El retraso del tipo de cambio aceleró la "apertura" abaratando las importaciones y dificultando las colocaciones externas; un efecto que resultó verdaderamente depredador cuando el rezago alcanzó proporciones inverosímiles, como ocurrió: las divisas extranjeras llegaron a cotizarse a la mitad de su paridad teórica de equilibrio (habitualmente se toman los niveles relativos existentes a principios de la década del '70).

El resultado de esos impulsos fue un creciente desequilibrio comercial, que debía financiarse mediante el endeudamiento externo. El ingreso de fondos desde el exterior fue alentado con la elevación de las tasas de interés locales, que superaron con exceso todos los niveles vigentes en la plaza internacional, al mismo tiempo que se garantizaba la paridad cambiaria, a través de la "tablita" o cronograma cambiario. Está de más señalar el devastador efecto de este encarecimiento del crédito para los productores y empresas nacionales; mientras que el sistema dejaba un lucro inmenso a los participantes en el circuito especulativo: un banquero extranjero que en 1977 trajo al país un millón de dólares pudo retirar en 1980 tres millones de la misma moneda, en tanto que el país trabajaba para pagar esos dividendos con altísimas tasas de interés, únicas en el mundo.

Ninguna consecuencia provechosa arrojó ese régimen, que se tradujo en un receso sin parangón y en mayores presiones inflacionarias, que se expresaron con creciente virulencia a medida que resultaba imposible embozarlas: la tasa mensual promedio durante el período de marzo de 1976 a mayo de 1983 ascendió al 8,2% —en el índice del costo de vida— lo que es muy superior a cualquier lapso precedente.

Y fueron asimismo inducidos retrocesos estructurales en sen-

tido inverso a las modificaciones capaces de poner al país en el camino del desarrollo. En otros términos: se acentuaron las condiciones del subdesarrollo, lo que no tardaría en causar una lacerante secuela de efectos sociales, desde la desocupación y el empleo improductivo, hasta males tan perversos como las elevadas tasas de mortalidad infantil o el aumento de la deserción escolar.

De ese planteo surgió también la proliferación del endeudamiento externo con lo que el país quedó hipotecado a raíz de la "apertura" comercial y financiera que se impuso a la economía nacional. Un gravamen enorme, como se advertirá al analizar los resultados finales del plan; pero que es particularmente pernicioso pues los recursos externos no fueron aplicados a ampliar o a mejorar la estructura productiva, sino simplemente a financiar su deterioro.

6. La bancarrota financiera

Esa política de financiamiento del receso mediante el endeudamiento externo, que tenía como instrumento la elevación de las tasas de interés locales hasta niveles reales sin competencia en el mundo, estaba dirigida a desembocar no sólo en el colapso de la producción, sino también en el vaciamiento del sistema financiero, irremisiblemente ligado al quebranto progresivo de sus deudores: las empresas productivas.

La crisis financiera y el colapso bancario eran secuelas implícitas en ese esquema. Así ocurrió efectivamente, por más que se pretendió descargar la culpa en irresponsabilidades empresarias y personales que, si existieron, no fueron contradictorias con los lineamientos oficialmente instaurados, sino que contaron con su auspicio. La perversidad estaba inscrita en el sistema, puesto que las finanzas son dependientes del desenvolvimiento productivo, y la serie de quiebras bancarias producidas especialmente a principios de 1980, probaron que la especulación no tardaría en arruinar a los propios agentes financieros; muchos de los cuales están mantenidos hoy artificialmente para evitar que su falencia arrastre a decenas de entidades y provoque un caos generalizado.

Los acontecimientos sucedidos en el sector bancario, que sacudieron a la opinión pública, no fueron fenómenos autónomos y separables del contexto. Al contrario, expresaron en su ámbito específico la diseminación de la crisis, que excedía los arbitrios con los que se pretendía encubirla. El reflejo financiero del colapso económico es una constante que no se puede eliminar sino con la recuperación de los emprendimientos productivos. La rentabilidad de la producción en los distintos campos debe permitir solventar la indispensable refinanciación del endeudamiento anterior, así como las empresas deben tener acceso al crédito para el giro de los negocios y para encarar inversiones.

Esos síntomas financieros de la crisis, que se han sucedido sin solución de continuidad, bien que con matices diferentes, no pueden medicarse en la epidermis bancaria, como se ha hecho en estos años, sino con un tratamiento profundo en el restablecimiento de la economía productiva.

La reforma financiera que cumplió inicialmente Martínez de Hoz, cuyos rasgos centrales no fueron corregidos con los ajustes posteriores, demostró su ineptitud para encauzar al propio sistema bancario que sólo sobrevivió merced a un masivo auxilio oficial, corporizado en una corriente de subsidios como la que no disfrutó ningún sector de la producción agropecuaria, industrial o minera. Pero también impuso una vinculación especulativa devastadora entre la plaza financiera y la cambiaria, según la cual las tasas de interés deben mantenerse inaccesiblemente elevadas para evitar el traslado de los fondos al resguardo de las divisas, impulsando por lo tanto su cotización. Condición ésta que permaneció invariable hasta los tramos finales de la experiencia de estos años, con la que el crédito quedó cegado para las empresas productivas; así como se esfumó la asistencia a las economías regionales; se eliminaron las tradicionales líneas de crédito para la promoción agropecuaria y se instauró el desaliento a las inversiones. El esquema financiero fue articulado como un elemento decisivo en la pendiente del desequilibrio económico, en vez de ejecutar su función de palanca del crecimiento mediante la financiación de las actividades productivas y de las inversiones.

CAPITULO IV

LOS RESULTADOS DEL PLAN APERTURISTA

Con la asunción de Martínez de Hoz al Ministerio de Economía, en abril de 1976, se inició un período que llega hasta nuestros días y tiene como característica central, desde el punto de vista de la política económica, la implementación de un esquema de corte monetarista, reseñado en el capítulo anterior. Así se buscó cambiar la estructura de la producción interna bajo los cánones de la división internacional del trabajo. Los instrumentos utilizados fueron la rebaja arancelaria y el retraso cambiario, la reforma financiera y las altas tasas de interés y la depresión de los salarios.

La aplicación de tal política dio por resultado una fuerte retracción de la economía, la ausencia de incentivos para invertir en actividades productivas, el creciente desempleo, serias dificultades en el balance de pagos, el aumento del gasto público y el mantenimiento de las presiones inflacionarias.

La conjunción de todos estos datos de la realidad puede ser mostrada sintéticamente con la reducción del ingreso disponible de la población y la magnitud de la deuda externa, ya que de una manera u otra reflejan lo que está sucediendo en otras áreas de la economía. El ingreso neto disponible per cápita (equivalente al producto bruto interno deducidas las ganancias o pérdidas del intercambio, la remuneración a factores del exterior, las depreciaciones y los impuestos), del año 1982, es menor

que el de 1960. Por su parte la deuda externa era de 38.700 millones de dólares, que generan intereses anuales cuya magnitud supera los 4.000 millones de dólares.

Pero conviene puntualizar otros resultados globales del plan:

- Durante 1982 el PBI declinó 5,7% completándose así un período de ocho años durante los cuales en sólo dos se registraron tasas positivas de crecimiento en términos per cápita.

- Este largo ciclo adverso ha determinado que el nivel del PBI actual por habitante sea menor que el de 1969, el de la industria, menor que el de 1965, y el de la inversión resulta similar al de 21 años atrás.

- El consumo, medido en valores absolutos, es un 7% inferior al de 1974. Por su parte, el consumo anual per cápita de carne vacuna disminuyó de 83 kg en 1970 a 63 kg en 1982; en igual lapso, el de harina de trigo bajó de 94 kg a 88 kg; el de leche fluida, de 68 lts. a 50 lts.; el de azúcar, de 37 kg a 33 kg; por señalar ejemplos críticos de la depredación que sufren las condiciones de vida populares, degradadas inclusive en la alimentación, además de otros despropósitos.

- La mortalidad infantil es de 42,4 por mil, mientras que en los países desarrollados oscila entre 4 y 10 por mil.

- El déficit de viviendas es de 2.200.000 aproximadamente.

- El 42% de la población del Gran Buenos Aires no tiene red cloacal. En igual situación se encuentra el 80% de la Gran Córdoba, el 60% del Gran Santa Fe y el 89% de Formosa, por ejemplo.

- Sólo el 62% de los niños en edad escolar completaron el ciclo primario, según el Censo de 1980.

No obstante ese menoscabo de la comunidad experimentado en estos años, cabe destacar los efectos en la órbita de la formación de capital, que es donde se prenuncian los resultados futuros de esta política económica:

- Durante 1982 la inversión bruta cayó el 20% determinando en consecuencia que su nivel per cápita sea inferior al del año 1962. En la correspondiente a los equipos durables de producción, el nivel por habitante no supera a la del año 1960.

- En términos netos, la inversión en equipo durante 1982 fue por segundo año consecutivo negativa, lo cual significa una re-

ducción del stock de capital. A ello debe sumarse la obsolescencia de muchos de los equipos que actualmente están en funcionamiento.

- La inversión neta en equipos de producción durante el período 1976-82 fue de 3.759 millones de pesos de 1970; esto significa una inversión anual de 537 millones de pesos de 1970. Entre 1959 y 1962 la inversión fue de 7.922 millones, lo cual equivale a 1980 millones por año. O sea que hace veinte años, durante el gobierno desarrollista se invirtió por año y en términos netos casi cuatro veces más que ahora.

1. Una estructura económica y social más débil

Más allá de los daños múltiples y profundos que ha dejado en el país la aplicación sin resuello del plan lanzado en 1976, sin embargo, ha arrojado otras secuelas generales que conviene sistematizar desde la óptica de la estructura económica y social. La inestabilidad y el estancamiento caracterizaron genéricamente al período 1976/83 como tendencias dominantes, en nada alteradas por las oscilaciones periódicas que naturalmente aparecen en un lapso de varios años.

Y hay que señalar, dentro de ese marco global, que en este tramo se operó una transferencia de ingresos entre los sectores económicos y sociales que vulneró directamente las posibilidades de crecimiento. Está expuesto que el salario se redujo abruptamente; pero esta caída no se revirtió en un firme proceso de acumulación, que fue débil al principio y decididamente negativo luego, porque las condiciones económicas canalizaron el ahorro hacia la especulación en desmedro de las inversiones productivas.

Más aún, dentro de la menguada inversión hubo un creciente componente en el rubro de las construcciones respecto de los equipos durables de producción, en tanto que dentro de aquellas cobraron predominio las del sector público. Y cuando la tendencia se corporizó francamente en la caída absoluta de las inversiones —como sucedió con toda crudeza en los años 1981 y 1982—, las mayores declinaciones se anotaron a la vez en los ramos más reproductivos del equipamiento; en particular

en los equipos durables de producción, que sólo en 24 meses exhibieron una contracción de la inversión de más del 33 por ciento. Esta severa reducción del tercio de la inversión en esos renglones dinámicos significó más que estancamiento; porque la magnitud de la caída implicó que ni siquiera se lograra reponer el desgaste y la obsolescencia del aparato productivo: fue una disminución en términos absolutos del parque productivo del país.

2. El desmantelamiento industrial

Junto con esos retrocesos cualitativos hubo también otras modificaciones perniciosas en la estructura de la producción y en el perfil del empleo, debido a la declinación de las actividades productivas más dinámicas y con mayor capacidad de enriquecimiento de la economía.

El estancamiento generalizado se acentuó en la producción manufacturera, y este atraso fabril quedó finalmente evidenciado en que los niveles de producción industrial por habitante fueron equiparándose con los de épocas pretéritas cada vez más lejanas. En 1980 eran similares a los de 1976 e inferiores a los de 1974; para 1982, la producción industrial ya había retrogradado al rango que ostentaba en 1964: ¡18 años antes!

Por ese camino iba perjudicándose aún más la estructura productiva. Dentro de un conjunto en aguda contracción, la actividad manufacturera perdió posiciones frente a otros sectores menos pujantes. De casi el 30 por ciento del Producto Bruto Interno global que aportaba en 1974, la industria descendió al 25 por ciento en 1980 y, todavía más, al 23 por ciento en 1982.

El debilitamiento se volcaba especialmente sobre las industrias básicas, pues la indiscriminación con que se consideraban las distintas facetas de la producción fabril revertía en menoscabo de los emprendimientos que requieren una mayor densidad de inversión, mayor aporte tecnológico, e insumen un tiempo de maduración más prolongado. Estos rasgos caracterizan a las industrias pesadas fundamentales, como la siderurgia y la metalurgia no ferrosa, la petroquímica, la fabricación de maquinarias y equipos, la de la celulosa y el papel. Los pilares pri-

mordiales que necesita implantar el país para emerger del subdesarrollo fueron así desalentados.

Los registros fabriles de estos años exponen con crudeza la magnitud del menoscabo industrial, así como su incidencia social:

- El PBI industrial por habitante de 1982 fue un 9% por ciento inferior al del año 1965.

- El valor agregado por la industria manufacturera durante 1982 fue el más bajo de la serie que arranca desde 1970.

- En el caso del sector alimentos, bebidas y tabaco, el nivel de producto es similar al de 10 años atrás; en textiles, confecciones y cuero el más bajo desde 1970; lo mismo ocurre en el caso de madera y muebles, minerales no metálicos, maquinaria y equipos y otras industrias manufactureras. En lo que respecta al papel, imprenta y publicaciones, el PBI manufacturero de 1982 resultó inferior en un 25,8 por ciento al de 1974; el de productos químicos y petroquímicos alcanzó niveles similares a los de 1975, y en las industrias metálicas básicas se recuperaron los valores de 1974.

- La producción total de automotores de 1982 fue apenas un 1,7 por ciento superior a la de 1962; un 32,1% más baja que la de 1965 y un 55 por ciento inferior a la de 1973.

- El consumo aparente total de acero crudo por habitante fue en 1982 de poco menos de 80 kilogramos; esto es, un nivel similar al de 1956.

- El consumo de papel por habitante en 1982 fue similar al de 1960.

- En 1960, el valor agregado por la industria manufacturera argentina era equivalente al 18,7 por ciento del PBI industrial de América Latina; en 1982, esa proporción se había reducido a poco menos del 9 por ciento.

- El número de obreros ocupados en la industria fue en 1982 un 28 por ciento inferior al de 1970. Y esta reducción en los niveles de empleo no fue una consecuencia de la capitalización del sector ni de la introducción acelerada de modernas tecnologías, sino, simplemente, del achicamiento del aparato productivo fabril.

- Las mayores caídas en los niveles de empleo se registraron

en actividades como la fabricación de textiles, prendas de vestir, calzado, construcción de maquinaria no eléctrica y de máquinas y aparatos eléctricos, con reducciones que en todos los casos superaron el 50 por ciento respecto de los volúmenes ocupados en 1970.

El flagrante proceso de desindustrialización que exponen esas cifras es el resultado inevitable de una política económica para la cual era lo mismo producir "caramelos o acero". Martínez de Hoz y su equipo abusaban del dominio de los medios de comunicación para formular publicitariamente estos falsos enunciados, mientras se estaban carcomiendo las bases económicas de la Nación. El retroceso industrial que verifican esas cuantificaciones denuncian igualmente un desmedro cualitativo, computable en la desaparición de franjas integrales de la actividad manufacturera, desplazadas por la importación o eliminadas del aparato productivo, que nunca pudieron recobrarse.

3. Degradación de la fuerza de trabajo

Esos cambios vulneraron la propia estructura de la economía argentina, en cuanto avanzaron en su desintegración. La perjudicaron técnicamente pues forzaron un descenso de la productividad media, pero también menoscabaron la organización social del trabajo en el país.

Ya antes que el desempleo se manifestara abiertamente en toda su crudeza, se registró un fenómeno precedente con la misma orientación de deteriorar la conformación de la comunidad, que persiste desde entonces, como es el auto-empleo, en especial en el área de los servicios. Cientos de miles de trabajadores pasaron a revistar como operarios "por cuenta propia", a raíz de la expulsión de mano de obra de las actividades manufactureras, con lo cual su productividad y su inserción en la disciplina laboral quedaban anuladas.

Este fenómeno que ocurrió en el país contradice la tendencia histórica que impone el desarrollo económico; pues el auge del trabajo por cuenta propia (repetidamente encomiado por los voceros oficiales como prueba de "creatividad" y de "independencia" laboral) implica la difusión de los modos de producción más

atrasados; es un paso atrás en la organización productiva. La suelta "autonomía" se asienta en la habilidad personal del trabajador, pero significa que su capacidad laboral no se aplica a un capital productivo de envergadura, capaz por lo tanto de valorizar la producción; asimismo implica que no se obtendrá un excedente que pueda ser destinado a incorporar nuevas unidades de capital. Estos efectos son más perniciosos cuando el mayor contingente de trabajadores por cuenta propia proviene de la desocupación fabril, puesto que supone el abandono de una tarea de mayor intensidad de capital por actividades menos enriquecedoras del trabajo.

La comprobación más descarnada del achicamiento económico, sin embargo, se observa en la proliferación de la desocupación y el subempleo abiertos, que en conjunto llegaron a abarcar en la Argentina, al cabo de la experiencia monetarista, una proporción lindante con el 20 por ciento de la población económicamente activa¹. Y a la par del desempleo debe registrarse la profunda reducción de los salarios, que esparce sus efectos sobre las condiciones vitales de la comunidad.

Después del cercenamiento inicial, que nunca fue recupera-

De acuerdo con los datos del INDEC, en octubre del año anterior la tasa de desempleo abierto alcanzaba al 4,6 por ciento de la población económicamente activa urbana de las jurisdicciones relevadas. Proyectando esa tasa a la población económicamente activa total, esto es, la urbana y la rural, ello equivale a 510.000 personas que carecen de trabajo.

Si se considera la población subempleada voluntaria e involuntariamente, el grado de subutilización de la fuerza de trabajo alcanzaría al 12,6 por ciento es decir, 1.400.000 personas.

De acuerdo con datos del INDEC, el porcentaje de no asalariados en la población ocupada total pasó del 25,2 por ciento en 1974 al 28,9 por ciento en abril de 1982. Si a estos valores que surgen de la Encuesta de Hogares para las doce principales jurisdicciones urbanas del país se los proyecta sobre la población ocupada total, significa que en 1974 había 1.995.000 no asalariados, y que en abril de 1982 llegaban a 2.600.000; esto es, 605.000 no asalariados más. Esto implica también una mayor subutilización de la fuerza de trabajo que debe relacionarse con el desempleo abierto y el subempleo voluntario e involuntario.

do, en los últimos tramos de la experiencia monetarista lanzada en 1976, los salarios volvieron a sufrir un retroceso, a tal punto que el nivel promedio se ubicó en menos de la mitad que el vigente en los primeros años de la década del '70. El costo de la canasta familiar en enero de 1983, por caso, se podía cifrar en casi 1.400 pesos argentinos, en tanto que el ingreso medio de los ocupados representaba el 55 por ciento de esa cantidad, y esta proporción siguió decreciendo.

De esta constatación de la caída en los ingresos reales de los trabajadores durante estos años se desprende que en el país está lejos de cumplirse el principio de que los salarios deben reponer con suficiencia la fuerza de trabajo; es decir, que la capacidad adquisitiva de los salarios no alcanza para solventar la canasta de bienes y servicios necesarios, conforme al momento histórico, para mantener al trabajador y su familia. Esta impotencia se expresa en la falta de reposición del desgaste físico e intelectual que involucran las tareas productivas, así como también se manifiesta en la imposibilidad de preservar las condiciones sanitarias de la familia, su instrucción y la elevación de sus conocimientos. Junto con estos deterioros específicos, la reducción del salario importa igualmente la degradación de las condiciones generales de vida de los trabajadores y de sus familias; inhibe el descanso y el ocio, pervierte el desenvolvimiento cultural de la comunidad.

La distancia entre la real significación de los salarios y el costo de los bienes que deberían sufragar debilita el sistema productivo y conspira contra sus posibilidades futuras. Y esto ocurre cuando se comete el despropósito conceptual de considerar al salario como una variable que se puede emplear para "ajustar" la economía, en vez de reconocer que representa un consumo productivo. No es que los salarios puedan elevarse artificialmente; si la remuneración de la fuerza de trabajo es equivalente o mayor que el producto generado se deteriora el ciclo productivo, que precisamente descansa en la aplicación de excedentes a la inversión y la acumulación. Pero el salario real puede elevarse sin resentirse la formación de capital cuando la producción global aumenta: éste es el camino eficaz para aumentar la cantidad y calidad de los bienes que componen el consumo de los tra-

bajadores y sus familias.

En estos años, en cambio, se impuso la contracción de los salarios reales sin que aumentasen la inversión y la producción, porque el ahorro de la comunidad se desvió hacia la especulación. Esta degradación del salario contrajo los consumos esenciales de las familias argentinas y llegó a expresarse en el menoscabo generalizado de la comunidad a través de la desnutrición, el crecimiento de los índices de mortalidad infantil, las enfermedades endémicas, la deserción escolar, el analfabetismo; datos que contradicen en el país la tendencia universal hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, de alimentación, de salubridad y de educación.

Pero además de ese desmedro social, la consecuencia económica inmediata de la escasez salarial es que la falta de poder adquisitivo de la población determina que importantes volúmenes de la producción no sean consumidos. Esto constriñe el mercado y quita atractivo a la producción así como a la inversión reproductiva. El excedente generado en la producción deriva entonces hacia la especulación, en vez de volcarse a sucesivas ampliaciones productivas.

Estas tendencias gobernaron la economía argentina a partir de 1976, con el consiguiente deterioro del mercado y de la producción como correlato de la destrucción del salario y del perjuicio que sufrieron las condiciones de vida de los trabajadores.

Durante el primer quinquenio de la década del '70 creció la proporción de la canasta familiar de bienes y servicios cubierta por el promedio salarial: ascendió del 82 por ciento en 1970 hasta el 97 por ciento en 1974 y 1975. Después, la política económica recesiva redujo severamente esa cobertura. Con algunas oscilaciones, se mantuvo estrictamente esta tendencia, de modo que en 1982 el salario medio representaba la mitad de esa canasta familiar, en una tendencia que se prolongó. En otras palabras, en 1983, casi las tres cuartas partes de los asalariados no alcanzaban a solventar la totalidad de esos consumos elementales.

En la comprobación de los efectos concretos del deterioro salarial se advierte que quedaron afectados hasta los rubros más críticos de la alimentación, con devastadoras secuelas sobre la

comunidad. Que el consumo de carne por habitante y por año cayera de más de 90 a unos 65 kilos marca un defecto de proteínas que repercute en debilidades orgánicas; que el consumo de leche fluida disminuyera al mismo tiempo de 68 a 50 litros por habitante indica por sí mismo que la niñez argentina es hoy más frágil que cinco años atrás. El consumo de harina bajó de 96 a 88 kilogramos por habitante y por año, y el de azúcar, de 37 a 33 kilogramos.

4. Los golpes contra el campo

Del recuento del colapso alimentario que sufre la comunidad argentina, que naturalmente se profundiza en otros rubros menos esenciales, se desprende sin esfuerzo que en ese contexto es imposible que prospere la producción agropecuaria nacional.

Y, en efecto, los registros del desenvolvimiento rural durante estos años revelan que también el campo acusó los golpes de la política económica oficial, por más que supuestamente debió resultar favorecido por el planteo de las ventajas comparativas.

- El PBI del agro creció un 9,5 por ciento en el último sexenio; esto es, a una tasa anual del 1,5 por ciento. En tanto, en el período 1970/76 el PBI había aumentado el 19,1 por ciento, o sea a una tasa acumulativa del 3 por ciento anual.

- En el período 1976/82 mostró un dinamismo el subsector agrícola al que debe atribuirse el incremento global del sector. Su aumento del 27,3 por ciento permitió expresar un crecimiento global a pesar de la caída del 9,8 por ciento del PBI pecuario.

- La producción pecuaria neta observa retrocesos consecutivos desde 1977. Ello ha resultado en una contracción del rodeo nacional muy severa. A mediados de 1982 la existencia de vacunos mostró una caída de alrededor de 8 millones de cabezas, o sea, un 14 por ciento con respecto a 1977. El número de ovinos es inferior en 7,5 millones de cabezas, o sea 21 por ciento.

- En 1982 hubo una importante recuperación de los precios relativos agro/no agro —del orden del 19 por ciento con respecto a 1981— que lleva el nivel al valor de 1976. La mayor incidencia sobre este aumento estuvo dada por los precios pecuarios que crecieron un 15 por ciento más que los agrícolas; son todas

variaciones dentro de la misma crisis, como cuando los índices reales para la producción de granos mejoraron al rededor de un 5 por ciento en la campaña 1981-82 pero resultaron inferiores a los de 1977-78-79. En el ciclo 1982-83 se estima que había una recuperación de igual orden con respecto al ciclo pasado.

El invariable resultado final de las evoluciones rurales durante estos años fue el estancamiento global, desde que el escaso incremento del 1,5 por ciento anual acumulativo es inferior al crecimiento vegetativo de la población. En contraste con el avance vertiginoso de la oferta agropecuaria en los países industriales, cada argentino dispone año a año de un menor contingente de alimentos y materias primas rurales.

Y junto con el estancamiento y la pérdida de rentabilidad en el campo están los preanuncios de próximas contracciones, pues quedó gravemente afectado el núcleo de la inversión en el agro: en 1982 las construcciones agropecuarias fueron inferiores a las de 1970 y la producción de tractores resultó menor que la de 1957!

5. Una década perdida, el futuro comprometido

Así como pueden recontarse los daños padecidos por cada segmento de la comunidad a lo largo de la década pasada, conviene estimar la magnitud global de la pérdida que ha causado al país la imposición de políticas recesivas e inflacionistas.

Si la economía argentina hubiese crecido a una tasa anual del 4,5 por ciento anual acumulativo entre 1974 y 1982 —lo que no es mucho decir, ya que fue la media latinoamericana— el producto bruto interno durante el último año habría sido un 50 por ciento mayor que lo que realmente fue. Y la diferencia entre ese crecimiento hipotético y lo que en verdad sucedió es una magnitud de producción que se equipara con la de una vez y media el Producto Bruto Interno logrado en 1982. Esta suma —en dólares corrientes— trepa a más de 100 mil millones de dólares, que a su turno equivalen a 15 años completos de exportaciones o al triple de la deuda externa que dejó como gravosa hipoteca al país la gestión de Martínez de Hoz y sus sucesores.

En este monstruoso endeudamiento que la política económica de estos años impuso al país está la tajante desmentida de la proposición de "sanear el sector externo" que también se hizo a los argentinos el 2 de abril de 1976.

El fracaso es aquí una espectacular catástrofe, ya que la deuda externa por habitante ascendió hasta convertirse en la mayor del mundo. Pero es un pasivo que además gravará por muchos años el desenvolvimiento nacional, condicionado como estará por la necesidad de atender esa deuda, que fue asumida sin beneficio alguno para el accionar productivo.

El país debía unos 9 mil millones de dólares en 1976, de donde saltó a un pasivo externo de más de 38.000 millones de la misma moneda a fines de 1982, que serán todavía muchos más al cabo de 1983: a pesar de la intensidad del receso de este año, el excedente comercial derivado de la contracción de importaciones resultará insuficiente para pagar siquiera los intereses del endeudamiento, que superan por sí solos holgadamente los 4.000 millones de dólares en el año. Esto obliga a refinanciar no sólo la enorme proporción del capital con vencimiento pactado para 1983, sino también una decisiva porción de los intereses.

La relación entre el servicio de la deuda externa (amortizaciones e intereses) y los ingresos por exportaciones empeoró dramáticamente durante los años de aplicación de la política monetarista. El 49 por ciento de la deuda que vencía en 1976 era un 3,2 por ciento superior a las exportaciones de ese año; mientras que el mismo 49 por ciento del total de la deuda con vencimiento en 1983 significa más de dos veces el total de las colocaciones externas.

El empinado crecimiento de la deuda externa estuvo totalmente desvinculado de procesos de inversión en el país. Martínez de Hoz intentó justificar el endeudamiento aduciendo que la inversión pública tuvo entre un 20 y un 25 por ciento de componente importado. Pero sucede que el equipo durable de producción al que corresponden esos porcentajes declinó sensiblemente en el total de la inversión pública, con lo que esa proporción pierde significado. Tampoco encontró legitimación la deuda externa, ni mucho menos, en la importación de bienes de

capital para la industria; lo cual salta a la vista en el desmoronamiento de la producción fabril que tuvo lugar en estos años. Tuvo lugar, sin embargo, el pernicioso fenómeno adicional que los bienes de capital que efectivamente se importaron vinieron a sustituir en enorme medida a los fabricados localmente: de modo que la deuda para adquirirlos no está justificada y su efecto indirecto fue agredir a la industria nacional.

Aunque sea escasa respecto de la multiplicidad de los daños causados a la Nación, la reseña de los mecanismos y consecuencias de la política de fondo aplicada sin solución de continuidad durante estos años expone su índole frontalmente contradictoria con los intereses históricos del pueblo argentino. Y esto no se computa finalmente sólo en el meollo económico de la vida social, sino en todas las manifestaciones políticas, culturales y aun morales. La profundización del subdesarrollo que se verificó en el país durante esta década infligió hondos daños materiales; pero más dolorosamente trascendente es que contribuyó a distanciar a los argentinos de las conquistas y avances de la civilización universal. Que una nación como la Argentina, pionera en la afirmación de la democracia republicana, en el respeto de la soberanía popular, tenga hoy una imagen internacional que más bien se asocia con el desconocimiento de los derechos humanos esenciales —sea por obra del terrorismo o de la represión indiscriminada—; o que la violencia recurrente siembre el miedo sin distinciones en los hogares nacionales, son afrentas que no merecen los hijos de esta tierra. Para erradicarlas definitivamente no hay otro camino firme que el de rescatar la condición nacional y elevar la condición humana de nuestro pueblo por la sólida vía del desarrollo material, la paz social y la legalidad para todos.

CAPITULO V

LAS HERIDAS ABIERTAS POR LA VIOLENCIA

El país se desangra todavía por las cuestiones no resueltas que derivan de la violencia y la represión. El cuadro de la situación general, lejos de desmontar las condiciones que alimentan el caos y la violencia no hace sino acumular tensiones que los promueven. No habrá paz plena mientras no se remuevan las causas de fondo que sirven de caldo de cultivo, y no habrá condiciones políticas para iniciar esa transformación mientras no se sinceren las situaciones creadas y sean asumidas todas las responsabilidades que derivan de las acciones realizadas al margen de la ley. Es preciso que el país y los familiares sepan cuál ha sido la suerte de los desaparecidos para poder mirar al futuro, enterrar a los muertos y garantizar el imperio de la justicia.

La Argentina viene padeciendo la lacerante experiencia de una violencia desembozada o sorda, pero siempre presente. Sin duda está estrechamente conectada con la depredación de las condiciones de vida de la comunidad. La insatisfacción de legítimas aspiraciones sociales, la frustración de los anhelos y el rechazo de los requerimientos elementales alimentaron un estado propicio a la proliferación de la violencia y la acentuación de las tendencias a la disgregación.

1. El terrorismo, un brazo de la pinza antinacional

El terrorismo es un cruento agente de enfrentamientos comunitarios y a la vez un factor de disociación nacional. Pero no ac-

túa aisladamente. El caos, la anarquía política, el derrumbe de las actividades productivas, se confunden en el impulso de las tendencias/desintegradoras. Y así como la subversión tiene conexiones externas, cabe advertir una confluencia objetiva de sus efectos con aquellos intereses que en forma muy diversa se benefician con el debilitamiento nacional. La represión indiscriminada y ajena a todo cauce legal, por su lado, se articula funcionalmente con la subversión y contribuye así al caos; sin perjuicio de que gravite también por reflejo —y no tanto por reflejo— en la inhibición de los reclamos sociales, cuya atención es imprescindible para superar las dificultades nacionales.

En la Argentina de estos últimos diez años la violencia alcanzó tal extremo que llegó a cuestionar con éxito el monopolio de la fuerza por parte del Estado; es decir, que se perdía un atributo esencial de la organización nacional. Las sociedades pueden soportar muchas adversidades y aun circunstancias aciagas; pero es imposible que sobrevivan en el caos, el desorden y la proliferación del miedo. No puede subsistir un país donde el Estado es incapaz de brindar seguridad a sus habitantes y donde los miembros de la población tienen, cada día, fundados motivos para temer por su destino inmediato.

Así como el orden universalmente acatado en 1966 se había agotado en la inacción, diez años más tarde la legitimidad democrática del gobierno instalado en 1973 —con una amplísima mayoría en su respaldo— tocó a su fin rodeada por la ineficacia de su política de fondo, donde estaban enraizadas la anarquía y la inmoralidad. El propio Estado se estaba desmoronando. La violencia de los más diversos signos corría impunemente por las calles del país, fuera de todo control.

La intervención de las Fuerzas Armadas en marzo de 1976 tuvo entre sus más justificados propósitos el de detener ese desmembramiento de la comunidad y del Estado. En esta intención fueron acompañadas sin reparos por el grueso absoluto de la sociedad nacional; era un camino para el ejercicio del derecho de todo pueblo a defenderse de las agresiones cruentas y desintegradoras. Erradicar la subversión era —y es— un cometido sobre el que no hay dos opiniones en el país. En su ejecución los

organismos militares actuaban como una prolongación de la necesidad comunitaria de expulsar ese cuerpo extraño y violento de la organización social. Más aún, desde esta óptica era en muchos casos un desempeño heroico, cuyos actores se jugaban la vida y muchos de ellos la perdieron en esa "guerra sucia". La población era consciente de la necesidad de esta actuación a la cual prestó su más amplia solidaridad, con notables esfuerzos y sacrificios por la pacificación que se ansiaba.

No obstante, graves perturbaciones nacieron del ejercicio de acciones represivas fuera del control del Estado. Estos desvíos lesionaron los derechos de los habitantes; pero a la vez desfiguraron la imagen gubernamental y debilitaron su fuerza, como ocurre cada vez que se la emplea con desprecio de la legalidad.

La represión era absolutamente necesaria, tanto como eran y son siempre contraindicados los excesos. Y hay en esto un principio que debe regir en cualesquiera circunstancias. Durante el propio gobierno desarrollista, en 1960, ante situaciones embrionariamente similares a las de 15 años después, señalé: "es hora de que los argentinos reaccionemos enérgicamente contra estos provocadores y asesinos. Pero que reaccionemos en la forma organizada y civilizada con que una sociedad de hombres libres reacciona contra el crimen antisocial y antinacional. No con otros crímenes ni con otras depredaciones, sino con el instrumento responsable de la ley y con el peso de la autoridad constituida".

Así se hizo, en efecto, en el gobierno de Arturo Frondizi. La ola de perturbaciones sociales, muchas veces artificiales y de carácter nítidamente provocador, fueron afrontadas con vigor, pero en el marco permanente de la ley. Esas perturbaciones, espontáneas o insidiosas, e inclusive los brotes guerrilleros, fueron repelidos sin que se registrase en aquellas operaciones un solo muerto.

Las acciones sujetas a la legalidad no debilitan la represión, al contrario: construyen las bases morales para sostenerla. Un país armado para defenderse contra el terrorismo por la propia conciencia de la criminalidad de la subversión, fortalece estas convicciones cuando se la combate legalmente y el estricto monopolio de la fuerza por el Estado robustece esa conquista ética,

que es imperiosa; pues el apoyo popular es indispensable en la lucha contra la violencia.

En verdad, ese respaldo de la comunidad en el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el terrorismo fue sólido y unívoco, siendo universal como es la condena a la subversión. Aunque los desbordes nunca fueron admisibles, pudo sin embargo reconocerse que un enemigo embozado demandaba respuestas no convencionales, que no tenían por qué apartarse del respeto más estricto a la ley ni desentenderse de la participación democrática.

La subversión desconoce los derechos humanos y al mismo tiempo crea una atmósfera propicia para su violación, por más censurable que esto siempre sea. Pero la derrota militar del terrorismo puso pronto término a la excepcionalidad de la "guerra sucia". Sin embargo, esa victoria de las Fuerzas Armadas y de toda la comunidad fue al mismo tiempo contrarrestada por la vigencia de una política de fondo que agravaba el empobrecimiento del pueblo y de la Nación. Esa política requería para sus fines mantener el estado de excepción.

Lamentablemente, en lugar de revertirse esa perversa estrategia económica y establecer el estado de derecho, con todos sus resguardos y garantías, la persistencia de la política recesiva se combinó objetivamente con las presiones represivas. Los errores y excesos, nunca justificables, aunque están invariablemente asociados a los tramós en que impera la anarquía, no dejaron paso a la firme implantación de las garantías individuales y de los derechos humanos. Restablecido el orden, aunque hubiese eventuales afloraciones de violencia, no había impedimento alguno para demorar su más acabado respeto.

La reticencia gubernamental para reponer plenamente el estado de derecho en la Argentina no puede sino vincularse con esa continuación de la política económica generadora de desempleo, cierre de fábricas, insuficiencia salarial, hambre y angustia para gruesas capas populares. La persistencia represiva inhibía los reclamos legítimos nacidos de estas condiciones y facilitaba, naturalmente, la perpetuación de la misma política.

Quedó instalado en la sociedad nacional un círculo vicioso de postergación de las necesidades sociales y silenciamiento de las

reivindicaciones o denuncias del camino depredatorio que se transitaba, con lo que a la vez se impedía el cambio de rumbo que pudo ser impulsado por una manifestación vehemente de los reclamos sociales.

Envuelta en esta cadena, la conducción gubernamental no impuso la vigencia de los derechos humanos ni modificó la política de fondo. Obstinación que no encontraba justificación válida de ninguna naturaleza. Mucho menos cuando las advertencias fueron planteadas con toda claridad. Partidaria y personalmente señalamos los excesos represivos, así como la equivocación fundamental en la política económica, durante el mismo año 1976. Dos años más tarde, fijamos nuestra posición en un documento de carácter frentista¹, donde afirmamos: "El gran protagonista de estos años difíciles ha sido el pueblo argentino. Y no hay duda de que respondió a la prueba con madurez y responsabilidad. Supo comprender todo lo que era necesario y aportó una cuota inédita de sacrificio y buena voluntad a la tarea de reconstrucción a la que fue convocado. Lo hizo, en lo que al pueblo correspondía, con actitud de paz y abnegación. El indudable anhelo de orden que unía a los más diferentes sectores facilitó la tarea del gobierno y ayudó a disimular, sin justificarnos, los errores que se han cometido.

"La Argentina reconoce unánimemente a las Fuerzas Armadas la victoria obtenida contra las fuerzas subversivas, anti-patrióticas y antinacionales. La pretensión de convertir a nuestro país en un centro del debate ideológico internacional, como lo había sido de la lucha armada, ha fracasado. Y su fracaso ha actuado como causa, y a la vez como efecto, de una recuperación impresionante de la conciencia nacional y de la identidad de la Nación Argentina como una entidad con perfiles propios, que todos compartimos y que a todos nos pertenece.

"Ese saldo indudable dejado por la lucha contra la subversión permite, también, dar por concluido un capítulo en definitiva trágico de la historia del país. No hay ahora pretexto para no

¹ Ese documento, del 25 de agosto de 1978, fue suscripto, entre otros, por Manuel Anchorena, Roberto Ares, Deolindo Felipe D. Bittel, Eloy P. Camus, Angel F. Robledo, Miguel Unamuno y Alberto Simón Lázara, además de los principales dirigentes desarrollistas.

consolidar la paz restaurada, lo cual supone el pleno respeto de los derechos y garantías de las personas que siempre constituyó el primero de los fines del Estado. Superada la etapa en que el Estado argentino debió reconstituirse como centro monopolizador de la fuerza legítima, nada autoriza a no devolver a todos el derecho a no tener miedo.

“En el campo político, luego de la derrota de la subversión, es necesario que el gobierno y el país convaliden la democracia, con las actitudes consiguientes. Los problemas de seguridad son concretos y mensurables. Cuando se los extiende más allá de lo que requieren, engendran problemas de otro tipo, de difícil solución. La paz supone el respeto a los derechos humanos y convierte en crimen lo que en otras circunstancias pudo ser imperativo de la acción de factores que el estado de necesidad hacía de control difícil”.

Era, por otro lado, la misma declaración en que destacábamos: “Son pocos los que hoy creen que las tendencias que apuntan la realidad económica nacional pueden justificar la continuidad de la política que sobre ella se ha aplicado. Por el contrario, opiniones crecientemente unánimes coinciden en un diagnóstico totalmente opuesto, diagnóstico que reclama un cambio profundo en la orientación actual que además, debe adoptarse sin más demoras”.

2. La represión, instrumento del modelo antinacional

Esos llamamientos no fueron atendidos. Al paso que se acentuaba la política de fondo se daban nuevas vueltas de tuerca en el amordazamiento de la comunidad. Este giro se hizo particularmente notorio en el mantenimiento de las restricciones gremiales. La supuesta corrección de antiguos excesos se prolongó hasta quedar convertida en un vehículo de indefensión de la clase obrera, precisamente cuando se acentuaba el menoscabo de los trabajadores.

Para revertir ese detrimento era imprescindible asegurar la auténtica representatividad de los dirigentes sindicales, así como eran necesarias la unidad y la garantía de los derechos de defensa de los trabajadores. En cambio, la pretendida moralización de las prácticas sindicales se transformó en una

herramienta para imponer al país a través del forzado silencio de las reivindicaciones sociales, un modelo económico que favoreció a los factores externos y que condujo a la concentración del ingreso, en medio del empobrecimiento general de la comunidad, sin perjuicio de que este sacrificio se derivase a la especulación y no a la inversión reproductiva.

A ese fenómeno y a esos instrumentos estuvo relacionada la persistencia de los esquemas represivos, que también se volcaron sobre los empresarios nacionales, cuando se formularon denuncias sobre la devastación de las entidades productoras que se cumplía en la Argentina. El encarcelamiento arbitrario de los dirigentes agrarios o industriales fue el corolario de más de una asamblea donde se acusaron los perjuicios que estaba sufriendo la producción.

Formó parte del mismo esquema represivo el manejo —directo o indirecto— de los medios masivos de comunicación por parte del Estado, que fueron empleados para encubrir la realidad y las reclamaciones sociales. Mediante coerciones o recursos más sutiles, por lo tanto más dañinos, se engañó a la comunidad acerca de lo que en verdad ocurría en el país. Se montó un abigarrado mecanismo dirigido a crear una visión tergiversada de los hechos y a manipular la opinión pública. Se denunció la existencia de un idílico país “oficial”, gestado por la ilusión de la propaganda gubernamental, en contraste cada vez más flagrante con los signos del desastre que cundía. Esta trama de ocultamientos y distorsiones fue prácticamente intangible. Ninguna voz discrepante con la desviada visión “oficial” tenía espacio en el sistema de comunicación social, mientras que el elenco de funcionarios rotaba interminablemente para presentar ese cuadro torcido de la realidad. Ya desde antes de 1976 los canales de televisión —por tomar el caso más obvio— habían bloqueado el acceso a todos los disidentes, cualquiera fuese su representatividad. Partidaria y personalmente, por ejemplo, los desarrollistas fuimos excluidos absolutamente de los programas radiales y televisivos por más de siete años.

Este esquema de distorsiones alcanzó el paroxismo durante la guerra de las Malvinas, cuando el país fue cubierto por una ola de triunfalismo que nada tenía que ver con lo que sucedía en el

teatro de operaciones bélicas ni en las repercusiones que el conflicto armado alcanzaba en el resto del mundo: sólo los éxitos —reales o supuestos— y los ecos favorables al planteo gubernamental pasaban el cerrado filtro de los medios de comunicación. Y la comunidad entera debió despertar bruscamente a la terrible realidad de la derrota cuando el curso de la información oficial apuntaba mentidamente a una inminente victoria.

Más allá del incumplimiento sistemático de las funciones culturales que los medios de comunicación tienen en la sociedad, las presiones oficiales —muchas veces la ejecución directa por los funcionarios— trastocaron la información, negándola, mutilándola o parcializándola, al tiempo que se impedía el debate y el esclarecimiento de la realidad. Peor aún, los instrumentos de difusión se emplearon para desprestigiar y denostar a los opositores a la política de fondo, hasta con campañas planificadas por los círculos del gobierno ligado a esa política, como bien sabemos los que fuimos arteramente acusados desde “agoreros” hasta “traidores”: calumnias e injurias que ya es ocioso enfrentar cuando los hechos han probado con tanta puntualidad la veracidad de los pronósticos y la lealtad nacional de las observaciones.

Estas conductas eran por supuesto exactamente contrarias a las que demandaba la atención de los problemas y la puesta en marcha de las soluciones. El cambio en la política de fondo que los negaba, contra toda la evidencia, suponía la manifestación de las dificultades, no su silenciamiento. Requería la normalización y liberalización de la acción gremial de obreros y empresarios, factores fundamentales de la comunidad, por su conexión íntima con el proceso productivo.

Más todavía, en lugar de entorpecimientos, la acción sindical demanda ser vigorizada; como ocurre con la necesidad de restablecer el principio de la unidad del movimiento obrero, presupuesto de un normal desarrollo de las relaciones laborales y también elemento de la unidad nacional. Por el contrario, las limitaciones a la actividad gremial y su atomización permiten el desenvolvimiento de modelos económicos recesivos como el que se implantó en el país. Y la unidad y la fuerza de las organizaciones sindicales de ningún modo se contraponen con el re-

quisito de asegurar su representatividad, basada en la democracia interna. Muy a la inversa, la dispersión beneficia las desviaciones o el empleo de las instituciones gremiales con fines extraños a los requerimientos de sus integrantes.

Los canales de comunicación con todas las clases y sectores sociales tienen que permanecer abiertos cuando se pretende llevar a cabo una política que responda a los intereses nacionales; sin temor a las reivindicaciones o protestas, que son en sí mismas un germen de democracia, a la vez que permiten orientar las soluciones.

El freno de los reclamos sociales, franco o con sabotajes arteros, fue impuesto en cambio como correlato de la política de fondo que se ejecutó. Las organizaciones de la comunidad fueron silenciadas hasta donde se pudo hacerlo y los medios de expresión pública quedaron también en gran medida sujetos al mismo esquema.

En ese cuadro, las operaciones represivas, pero más precisamente sus desbordes indiscriminados y sus excesos, fueron instrumentos que actuaron objetivamente al servicio de ese silencio y, como es evidente, contribuyeron a la permanencia de la política económica y social que se llevó a cabo a despecho del rechazo de la comunidad nacional.

La violencia articulada con los excesos de la represión en el juego de la agresión subversiva, fue el feroz complemento de la profundización de la crisis. La ofensiva que cuestiona el monopolio estatal de la fuerza es un revulsivo provocador que incita la insoslayable recuperación de ese atributo, que ninguna sociedad puede permitirse perder. Es una premisa básica de la organización de las comunidades nacionales. Y los enfrentamientos violentos son especialmente perversos en un país subdesarrollado donde es primordial la composición de los factores sociales para acometer el problema sustancial que los agrede sin distinción de ubicaciones en el campo productivo o en la arquitectura política.

Confrontadas con la necesidad de afianzarse, inclusive para que puedan desenvolverse plenamente los distintos segmentos sociales que las componen, las naciones encaran la exigencia del orden y la paz como estado indispensable para resolver sus

conflictos: no se trata de negarlos sino de buscarles dinámicamente soluciones pacíficas, pues éste es el único contexto donde puede plasmarse la alianza de las clases y sectores fundamentales, sobre el eje de una propuesta programática dirigida a revertir el subdesarrollo.

El terrorismo, la guerrilla, la subversión violenta en todas sus formas, son frontalmente contrarios a este imprescindible cambio político cualitativo que significa la consolidación del Movimiento Nacional donde se concreta esa alianza.

Pero cuando el ejercicio de la acción política por el Estado, el empleo del poder que resume el gobierno, no se dirige a atender esos requerimientos de los factores sociales —lo que tiene necesariamente que comenzar por concebir y aplicar una estrategia de desarrollo nacional que haga posible cumplirlos igualmente— se favorece la creación de una atmósfera violenta. Que tanto más agravia a la sociedad cuanto más se empeña en silenciar esos reclamos legítimos.

En última instancia, la profundización del subdesarrollo deposita una impronta de violencia en la sociedad. Tanto porque cierra los caminos para resolver las dificultades objetivas que encara el país, con lo que impulsa tensiones sociales cada vez más acendradas, como porque la estrategia estatal que no se dirige con firmeza a revertir la declinación, que en consecuencia no encauza las fuerzas sociales detrás del objetivo convocante de superarla, queda implícitamente incitado a detener por los medios a su alcance las reivindicaciones que su política de fondo es incapaz de satisfacer.

Las tácticas que recurren a los medios violentos como presunta vía de respuesta a las angustias de la comunidad son, además de agresivas de la condición humana, por completo estériles. En primer término, son ineptas para representar los anhelos populares porque no les dan respuesta e igualmente porque son moralmente repelidas; pero, por lo mismo, son también inviables pues están inevitablemente huérfanas de apoyo masivo. Y debe tenerse presente que el empleo de la violencia engendra su propia dinámica; una vez echado a andar difícilmente se retorna al orden y a la paz que son indispensables para la construcción de la sociedad: las tendencias de la descomposición se afirman con

peligro de cobrar una virtual permanencia. Pero más allá de esta multitud de efectos deletéreos, desintegradores de la comunidad, debe considerarse asimismo que estas características se oponen frontalmente al desenvolvimiento de las fuerzas productivas, que es donde se encuentra la posibilidad de atender las apetencias del pueblo. No hay, por ejemplo, ninguna vacuna más eficaz contra la inversión —el único factor que puede promover ese proceso— que el imperio de la violencia en la atmósfera nacional.

Concretamente, durante estos años, en la Argentina, el terrorismo y la subversión, por sí mismos u ofreciendo justificación a las represiones indiscriminadas, han estado funcionalmente asociados a políticas económicas y sociales contrarias al interés histórico argentino. Fue bien sabido —y abundaron después las pruebas— que la estrategia económica del populismo estaba empalmada con ejecutores de violencia: la revulsión de la sociedad se levantaba como una cortina de humo detrás de la cual operaba la contracción de los salarios y el embretamiento de las empresas productivas, dos caminos igualmente conducentes al extrañamiento de la inversión que también se verificaba. Las represiones y en particular la inútilmente prolongada supresión del estado de derecho acompañarían luego el giro liberalmonetarista de igual corte recesivo para el mercado interno de producción y consumo.

La respuesta militar a la violencia era imprescindible, como herramienta de la comunidad para detener la desintegración social puesta en marcha por el terrorismo y el imperio de la inseguridad, afrontas constantes para el pueblo y para su desempeño productivo.

Sin embargo, esa respuesta militar no tuvo un apropiado correlato en la respuesta política que se ofreció, ni mucho menos en la estrategia económica y social que se aplicó.

En una cruel paradoja, la victoria en la batalla contra la subversión estuvo enmarcada por una política de fondo que en vez de actuar en el sentido del desenvolvimiento intenso de las fuerzas productivas, que abriese campo a la pacífica satisfacción de las necesidades nacionales y estimulara el debate político sere-

no, impuso un modelo restrictivo que agravó las condiciones propicias para la violencia social.

En efecto, se tomó el rumbo exactamente contrario al que conduce a la erradicación de las efusiones violentas. La recurrencia de este atroz fenómeno que sufre la Nación es la contraprueba del desatino. Las aguas se convierten en focos de infección cuando se estancan y se resumen. Otro tanto ocurre en las comunidades. El movimiento del progreso social, en cambio, diluye esa corrupción. La violencia no puede sobrevivir a los fuertes impulsos que genera el desarrollo económico, las oportunidades de trabajo fértil que éste brinda y, en especial, la intensa demanda de orden que promueve. La expansión multiforme de la organización productiva, la profusa inserción laboral, la proliferación de las vinculaciones económicas se cierran en una firme trama de necesaria solidaridad social, que expulsa por sí misma el cuerpo extraño de la violencia, al mismo tiempo que alumbra las posibilidades reales de responder a los requerimientos populares.

3. Reparaciones urgentes e insoslayables

Que la lucha librada contra la subversión no fuera encarrilada rápida y estrictamente en los cauces legales determinó, además de una temerosa incertidumbre en la comunidad, un sedimento creciente de rencor junto con un larvado impulso vengativo. Y en la órbita del desempeño estatal, el monopolio de la fuerza fue quedando de nuevo extrañado, ahora en manos de grupos vinculados con el aparato de seguridad oficial aunque aparentemente desligados del firme control que corresponde al poder público.

La ausencia de juridicidad en los procedimientos, por su parte, al lado de la inseguridad que volcaban sobre la sociedad, alimentó una larga —aunque la extensión no se acaba de conocer— nómina de desaparecidos y detenidos sin proceso judicial.

Ninguna explicación cabal sobre la intimidad de la lucha contra el terrorismo fue proporcionada por la autoridad constituida, ni se asumieron las responsabilidades consiguientes. Esta actitud debió tomarse sobre la base de la legitimidad de la ac-

ción del Estado en defensa de la convivencia pacífica; pero tenía que prolongarse hasta dar cuenta del verdadero curso de las acciones, con el reconocimiento de los errores que se hubieran cometido y con la sanción de los eventuales excesos.

Esas explicaciones eran moral y políticamente imperativas. Indispensables para las familias de los desaparecidos, aun cuando el conocimiento de la verdad significase asumir el duelo en lugar de vivir entre fantasmas. E imprescindible para que la comunidad tomase acabada cuenta de los alcances y secuelas del enfrentamiento. No tienen por qué convertirse en una descripción vergonzante. La sociedad argentina no busca motivos de venganza, sino fundamento sólido para la paz comunitaria, que sólo puede ofrecerle la verdad.

Por el contrario, la actitud de ocultamiento y de silencio estimuló las acusaciones así como permitió que se hiciera espuria utilización del dolor de los familiares y amigos de los desaparecidos en la lucha antisubversiva.

La demanda de explicaciones no implica de ninguna manera revisar la condena absoluta que merece el terrorismo; sino que, precisamente porque el Estado tiene la función indelegable de erradicarla, debe asumir republicánamente la responsabilidad por el cumplimiento de sus cometidos. No puede haber motivo alguno para dejar de esclarecer las circunstancias del conflicto, tanto menos cuando se afirma que ha concluido —como ocurrió en este caso—, inclusive con la puntualización de las situaciones individuales involucradas.

Las generalizaciones que ofreció el gobierno, en lugar de la explicación y la asunción de responsabilidades, cobran entonces carácter encubridor de los excesos en los que se reconoció que había incurrido la represión y un grado no desdeñable de complicidad con los rebrotes de violencia de los signos más diversos que surgieron después que se afirmó haber cerrado el capítulo de la lucha militar contra el terrorismo. Sospechas de connivencia que no hubiesen tenido lugar si aquellas explicaciones se hubiesen dado frontalmente, con la eventual depuración pública y explícita de los elementos incursos en excesos.

La falta de esclarecimiento, por el contrario, prohija la reaparición de las condiciones del terror y la violencia en el seno de la

sociedad argentina, con el obvio efecto de empujarla aún más por el plano inclinado de la disgregación.

La sola represión no es suficiente por sí misma, con todo, aun cuando se cumpla con los resguardos de la juridicidad, con el más amplio esclarecimiento, ejercitando el Estado su carácter de organización capaz de emplear la fuerza en forma exclusiva y legítima. A pesar de que todas estas condiciones se cumplan, la sola represión es inútil para extirpar de cuajo la violencia de la comunidad. La experiencia universal demuestra que únicamente con la apertura de alternativas políticas verdaderas se cierra el camino al avance de la subversión. Una política económica y social como la que se aplicó en el país, implantando la realidad del estancamiento, el retroceso y la frustración, genera el fermento del ambiente disconforme donde prospera la subversión.

El Estado nacional pierde su capacidad operativa frente al extremismo por defecto en el cambio de esa realidad frustrante para los argentinos, sin distinción de sector o inserción social. Más todavía, la falta de una propuesta política con este sentido transformador debilita el poder de convocatoria para la lucha contra los grupos subversivos, que naturalmente debe concernir a la totalidad del pueblo.

Esta dimensión de las fuerzas nacionales que tienen que reunirse al mismo tiempo en el respaldo de la política de fondo y para la eliminación de la violencia conduce invariablemente al planteo del Frente Nacional. Idénticos son los protagonistas de la propulsión del programa de superación del desarrollo y los interesados en desterrar el terrorismo y la subversión. Más aún: la violencia juega un papel objetivo de enfrentamiento entre los componentes necesarios del Frente Nacional, mientras que el logro de sus objetivos políticos de desarrollo e integración nacionales precisamente exige todo lo contrario. El cumplimiento de la propuesta del Frente Nacional requiere paz social, eliminación del terror de cualquier signo que sea y el destierro de la violencia. El camino hacia esas metas, por lo demás, abre campo a la satisfacción de las necesidades sociales y diluye así la propensión a la violencia que impera en toda comunidad caracterizada por la estrechez y el deterioro permanente del nivel de vida.

El Episcopado argentino ha hecho una contribución importantísima en lo que a corregir las secuelas de la represión ilegal se refiere. Ha indicado la necesidad de reconocer los errores cometidos, de reparar el daño que se haya infligido a la sociedad y de asumir la firme decisión —el propósito de enmienda sin el cual no hay verdadero arrepentimiento— de no volver a utilizar medios ilegítimos en la vigilancia y la protección de la seguridad comunitaria. El Estado nacional debe ser el único en condiciones de ejercer la fuerza, y debe aplicarla cumpliendo estrictamente con las prescripciones de la ley que limitan su ejercicio y protegen los derechos de los habitantes.

CAPITULO VI

CRISIS Y VITALIDAD DE LA CULTURA NACIONAL

La realización de la nación es un proceso integrador y universal. En él están concernidas todas las actividades que realiza cada pueblo cuando trabaja para desenvolver sus potencialidades, proyectándose sobre el resto del género humano con los perfiles de su propio e intransferible genio cultural. Por ello no seríamos una nación si nos detuviéramos en el logro de la estructura material por avanzada que fuera. Es necesario que la comunidad, al par que lucha por liberar la economía de su dependencia y de su atraso, desarrolle los elementos espirituales que fortalecerán su unidad y su personalidad. Estos elementos existen en la raíz tradicional de las actuales nacionalidades. Todos los pueblos forjan su cultura en esta época dentro de las grandes pautas de la civilización universal, desenvolviéndola en el marco de su propio paisaje, estilo de vida, formas artísticas e ideas que constituyen el acervo vernáculo. El subdesarrollo económico y la gravitación de intereses materiales exógenos suelen soterrar temporariamente aquellas fuerzas espirituales de cohesión autónoma. Pero el alma de una nación, arraigada en su historia, tiende a prevalecer.

En medio de la crisis que estamos viviendo —descripta ya en los capítulos precedentes— es la comunidad en su conjunto la que sufre, tanto en sus mensurables aspectos materiales como en fenómenos de naturaleza cualitativa como el arte, la educación o la filosofía. Cuando caen simultáneamente fenómenos

tan disímiles como el nivel de ocupación productiva, el grado de alfabetismo y los índices de salubridad social —y todo ello ocurre de modo sistemático e ininterrumpido a lo largo de un proceso prolongado—, lo que se está dragando en realidad es la condición nacional, la posibilidad de configurar una entidad cultural y política con personalidad propia en el mundo, asentada sobre bases sociales y económicas firmes, que respaldan y potencian su desenvolvimiento hacia niveles cada vez más altos y perfectos de convivencia, y su consecuente proyección externa.

Y esa degradación es lo que viene ocurriendo en la Argentina, lo que es preciso revertir con urgencia para evitar la pérdida irremediable de aspectos singulares de la cultura nacional y de tener su creciente empobrecimiento.

Es evidente también que todavía tenemos defensas y que no ha desaparecido del seno del pueblo la capacidad de replicar la agresión a su identidad de que está siendo objeto. Lo que no ha sido logrado todavía es una expresión unitaria de la voluntad de ser nación. En este último sentido, el Frente Nacional es, en esta etapa histórica, el punto más alto de realización de la cultura argentina en lo que hace a su expresión política. Pero esta afirmación —y las que la han precedido— vinculando la crisis de fondo con la crisis de la cultura y de la identidad nacional, sólo puede ser cabalmente comprendida en el marco de un concepto de cultura que vincule todas las actividades humanas y que establezca su íntimo contacto con el fenómeno de la nación.

1. El concepto de cultura

Los desarrollistas nos hemos caracterizado por prestar al fenómeno cultural una atención específica, definiéndolo en su esencia y estableciendo su relación con la dinámica de toda la sociedad. Nuestros contradictores se han visto obligados a ignorar ese dato y deformar nuestro análisis y su propuesta para intentar una minimización de los efectos positivos que ésta tiene sobre el sentido y la dirección de las luchas nacionales, al establecer un punto de orientación para el estudio de los problemas y la elaboración de sus soluciones.

La evolución histórica ha permitido decantar un concepto científico de cultura que es hoy generalmente aceptado. La elaboración de ese concepto recorre etapas vinculadas con la propia experiencia histórica de la humanidad, y la reflexión sobre esa experiencia. Consideramos la cultura como acción del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo, modificándose y modificando su contexto exterior, con los instrumentos de que dispone, en un ámbito y un medio dados. Ámbito y medio dados que no son universales sino nacionales; que se universalizan con la suma de realidades particulares, como aceptación y adaptación de instrumentos materiales e ideales.

Compréndese así como cultura desde la fabricación de una cesta o de una vasija de barro hasta la creación de un poema o de una sinfonía pasando por las formas de sembrar, forestar y criar el ganado, hasta las de concebir y realizar los modernos procesos industriales y las nuevas formas de la novela, de la poesía y de la música.

Vista la cultura como la actividad total del hombre sobre la naturaleza y reciprocamente sobre sí mismo, va de suyo que el hombre se entiende, aquí, como hombre social, que actúa y crea unido a otros hombres, a quienes transmite y de quienes recibe los conocimientos. Se trata, en suma, del hombre como concepto, como ser humano, no del individuo.

Aunque la cultura es el acto de hacer y de crear, este acontecer es algo histórico, algo que es también resultado de una actividad cultural anterior. De allí dos conceptos derivados:

1) El de la herencia cultural, en el que caben las tradiciones vernáculos y populares, el folklore y los modos de trabajar, de comerciar, de crear y de guerrear.

2) El de cultura histórica, o historia de la cultura, que es la reflexión empírica, en cuanto cuantitativa, o filosófica, en cuanto cualitativa, sobre la cultura anterior.

Si bien es lícito aislar conceptos componentes de una cultura dada para estudiarlos y analizarlos, ello sólo puede hacerse a partir de una concepción unitaria o, más exactamente, integrada de la cultura, pues, a los fines filosóficos, ella implica una totalidad.

La vinculación entre el fenómeno cultural y el nacional resul-

ta del hecho —también histórico— de que las comunidades se reconocen a sí mismas en naciones. Esta afirmación obliga a dos precisiones: por una parte, que las naciones sean un dato político y social innegable no significa que no existan en su seno y fuera de ellas realidades culturales más pequeñas, socialmente delimitadas o más amplias, pero es *en la nación* que alcanzan su rango pleno como fenómenos integrados, como una totalidad concreta, que requiere por lo tanto de un arsenal conceptual apto para ser comprendido. Por otra parte, la nación es una categoría histórica que —como ya dijimos— abarca, integra y armoniza en su universalidad todas las regiones, grupos sociales, actividades económicas y las corrientes ideológicas o políticas. Dada su naturaleza, la nación es un fenómeno cultural unitario que admite en su seno la diversidad, pero que contiene articulada y dinámicamente los elementos diversos que lo componen.

El proceso de integración cultural se desenvuelve, pues, en el tiempo. Su traza debe ser buscada —como hacen los arqueólogos con las culturas desaparecidas— a través de los elementos materiales con los que cada pueblo organizó el dominio de la naturaleza. Ellos nos brindan también datos sobre la organización social y política, sobre las nociones del mundo de cada pueblo y sobre sus creencias y modos de sentir. Es un proceso en el cual se realizan intercambios entre diversas culturas. Estos son asimilados y transformados con más vigor conforme tiene fuerza la cultura receptora. Análogamente, en la medida de su debilidad, la cultura es más profundamente influida y modificada por los contactos externos. Por esto puede suceder que la cultura nacional sea invadida por elementos extraños, foráneos, inauténticos, que la deforman; proceso que se da más bien en los niveles superiores antes que en los inferiores; pues en las capas profundas del pueblo —allí donde lo popular y lo nacional aparecen plenamente identificados— las defensas son más tenaces y más fuertes.

Toda cultura popular es cultura nacional. Pero no toda cultura nacional es popular. Lo popular es siempre la suma de forma y contenido; lo nacional puede quedar en la forma sin llegar a los contenidos auténticos.

La simbiosis nacional-popular es un logro, es un conflicto,

una lucha; implica una actividad consciente del hombre y requiere deliberación y voluntad. Sólo si el hombre, los partidos, las clases y sectores sociales, los gobiernos, se proponen impulsar, cuidar, alimentar esta simbiosis, ella se acelera y se logra plenamente.

Tenemos así resumidos los elementos conceptuales básicos para abordar la realidad de nuestra cultura nacional. Ello no puede hacerse fuera del contexto de la crisis.

2. *El deterioro de la cultura nacional*

La crisis castiga y degrada todos los fenómenos sociales. La cultura, que es su manifestación integral, expresa esa decadencia. El primer sacrificado es el ocio. En esta época de intensa mecanización del trabajo, cuando las máquinas suprimen la fatiga obrera y llegan a reemplazar totalmente la labor humana, reduciendo continuamente la jornada de trabajo, la tendencia es una gran apertura hacia el ocio. En el pasado, todas las grandes civilizaciones surgieron de la posibilidad que tenían los sectores sociales privilegiados de dedicarse a la creación. En cambio en la sociedad moderna, se produce el fenómeno social de la especialización, de la división social del trabajo. La sociedad subsidia también a un sector, el sector de la inteligencia que se consagra en las universidades, en los institutos, en la cátedra, para que produzca una clase de bienes dentro de la especialización del trabajo: los bienes culturales. Cuanto más adelantada es la sociedad, cuanto mayores son sus excedentes destinados a la educación y la cultura, más florecen las labores del espíritu, de la investigación, del conocimiento altamente especializado. Cuanto más próspera y autosuficiente es la producción de bienes materiales en una comunidad, más extenso y profundo es el sector social que puede dedicarse al estudio y la creación. El fenómeno minoritario de la cultura de *élites* se convierte en un fenómeno social de masas con acceso a la educación y a la cultura.

Pero el desarrollo de las fuerzas productivas exige, aquí y en cualquier parte del mundo, la formación de grandes contingen-

tes de técnicos, investigadores, obreros calificados capaces de administrar esta masa productiva. La sociedad industrial moderna genera también los recursos sociales indispensables para la difusión de la cultura, para la promoción del espíritu creador de intelectuales puros, de científicos puros y de artistas puros.

Por eso, el destino de la cultura, el acceso del pueblo al libro, a las artes, al estudio, están íntimamente ligados al desarrollo económico y a la alta tecnificación y mecanización de la industria, que es el rasgo universal de nuestra época. La automatización y la cibernética liberan al hombre y ensanchan el tiempo de ocio que el hombre puede consagrar al perfeccionamiento de sus conocimientos y a su labor creadora.

De ahí que los intelectuales, los escritores, los poetas, los músicos y los artistas plásticos, en una palabra, la inteligencia no pueden desentenderse de los esfuerzos que hace la comunidad y de la lucha que libra para acelerar el crecimiento económico, modernizar la producción y, como resultado final, reducir la jornada de trabajo. Este resultado final es la condición necesaria para liberar al hombre de las cadenas de sus apremios materiales y darle la posibilidad de gozar del "tiempo libre", es decir, del ocio creador, que es la base que sustenta la verdadera libertad. Por eso, el acceso de todo el pueblo a la cultura depende de la liberación de los trabajadores de las jornadas agobiantes y de los salarios inadecuados. Como son las formas avanzadas de la producción las que crean las condiciones para la reducción de la jornada laborable y el aumento del poder adquisitivo de los salarios. Pensemos en estas cifras: hoy en la Argentina, el salario está por debajo del nivel de subsistencia (en promedio, el 85 por ciento del ingreso está dedicado a la alimentación y al abrigo) mientras en los Estados Unidos esa parte del salario es menor al 20 por ciento. Ese contraste pone en evidencia, sin mayor necesidad de explicación, las posibilidades de acceso a la información, la educación, el arte y aun el reposo y la recreación que existen en las sociedades subdesarrolladas y en las desarrolladas. Diferencia cualitativa, como se observa.

Al no alcanzar un solo empleo para poder subsistir, siendo manifestamente insuficiente el salario, la posibilidad de ocio desaparece. La desocupación, sea en su forma plena o encubierta

por el empleo improductivo, está en las antípodas del ocio fecundo que resulta del acceso a niveles más altos de vida. En realidad, la desocupación crónica —estructural— crea una peligrosa tendencia hacia la desintegración del tejido social, aumenta la marginalidad y la delincuencia, forma una capa numerosa de personas cuyo rasgo común es la desesperación. Es el mejor caldo de cultivo para la violencia. De igual modo se degradan otros componentes fundamentales de la cultura, en lo que hace a su aspecto material, como lo es la alimentación, el vestido, la vivienda. La alimentación pierde progresivamente su capacidad restauradora y preservadora de la salud. La mutación caracteriza la historia de la cocina popular argentina, desde los platos regionales tradicionales y la incorporación y adaptación de los aportes de la inmigración. Hoy ella sufre en forma directa la crisis. ¡En el país de las vacas y el trigo disminuye hasta el consumo de carne y de pan! Y costumbres arraigadas, como el puchero, se hacen prohibitivas para el presupuesto familiar. La desnutrición infantil —ese crimen que daña muchas veces para siempre el desarrollo de pequeños compatriotas— es un lugar común en muchas regiones y aun en los suburbios de la propia Capital. Otro tanto ocurre con la vivienda. Tenemos un déficit habitacional que cálculos serios acercan a los tres millones de unidades. Ello supone hacinamiento, promiscuidad, destrucción de la convivencia digna. ¡Cuántos niños argentinos dejan de ir a la escuela porque sus padres no pueden calzarlos y vestirlos, o pagar su transporte!

En un repaso, siquiera esquemático, de la cultura nacional debemos referirnos también a otras manifestaciones sociales y políticas que definen nuestro perfil. Es el caso del comité político y del sindicato obrero. Expresión típica de la vida de los argentinos es el comité político. En sus orígenes, nuestros partidos son agrupaciones accidentales, que actúan en épocas de elecciones y bajo la inspiración personal de un jefe, de un caudillo. No tienen programas diferenciados y hasta las denominaciones son caprichosas, sin relación alguna con la orientación del grupo. La organización es vertical y jerárquica: del jefe nacional, se desciende a los caudillos provinciales, a los de parroquia, y a los "punteros", que son activistas de barrio en contacto directo con

los "puntos" y con el electorado, encargado de transmitir las órdenes de arriba y los reclamos y pedidos de abajo. El país tuvo figuras muy famosas entre los caudillos provinciales y municipales: Cantoni, Lencinas, Vidal, Ugarte, Barceló, Bidegain y tantos otros. Los caudillos y el comité son las únicas formas que conoció nuestra democracia originaria. Eran las células del civismo y reproducían la sociedad patriarcal heredada de los españoles. Pero eran reducidos aislados, sin participación de las masas, actividad de profesionales de la política. Los socialistas incorporan el primer comité-biblioteca y centro de difusión doctrinaria, pero también limitado a minorías dirigentes.

El peronismo hizo de la política una actividad de masas, aunque tampoco esta actividad se canaliza en el comité, porque las llamadas "unidades básicas" no logran atraer el concurso masivo de los simpatizantes. El vehículo multitudinario del peronismo no fue el comité, sino el sindicato obrero.

El movimiento sindical argentino es un hecho fundamental de nuestra historia contemporánea.

Es verdad que el sindicalismo fue importado de Europa, especialmente desde Francia al calor de las ideas de Sorel, allá por los primeros albores de este siglo. Pero también es verdad que no se debe a su origen el hecho de que el sindicalismo fuera durante muchos años un fenómeno sin raíces ni objetivos nacionales. Fueron sus primeros dirigentes locales muchos de ellos extranjeros, quienes entendían que la lucha social en la Argentina era idéntica a la de la clase obrera de las grandes naciones industriales de Europa. Así tuvimos aquí réplicas de las divisiones del socialismo internacional. Anarquistas, comunistas, socialistas, reformistas. El socialismo científico fue importado por un intelectual alemán, el ingeniero Lallemand, que intenta aplicar el método dialéctico a nuestra realidad criolla desde el periódico sindical *El Obrero*. Esta aproximación al problema nacional fue una experiencia fugaz. La tarea doctrinaria del socialismo argentino recaería por mucho tiempo en la persona de Juan B. Justo, cuyas enseñanzas convirtieron a todos sus partidarios en exegetas del socialismo europeo y de la cultura europea. Fueron partidarios del libre cambio, de la importación sin trabas de las manufacturas que estábamos en condiciones de producir aquí,

como lo comprendieron estadistas conservadores, de la dimensión de Carlos Pellegrini. El comunismo, que nació como escisión del partido socialista, no difiere de éste en cuanto a la apreciación de la realidad argentina, sino en cuanto al enjuiciamiento de un hecho histórico geográficamente remoto: la revolución rusa de 1917. El internacionalismo comunista llegó hasta fomentar la formación de grupos idiomáticos, entre las colectividades extranjeras; a las que incitaba a publicar periódicos y libros en sus idiomas originarios. Desarraigados de la masa popular argentina, sin influencia alguna en el interior del país, el socialismo y el comunismo nunca fueron fenómenos nacionales. Influyeron en los sindicatos mientras éstos eran pequeñas agrupaciones metropolitanas, escindidas por el más crudo fraccionismo ideológico.

La migración interna, que es el fruto del auge industrial, y el advenimiento político del peronismo han transformado la naturaleza y los objetivos del movimiento obrero argentino. Hoy el país tiene una clase obrera eminentemente nacional, dirigida por criollos y representativa de los trabajadores de la ciudad y del campo. Este es el aspecto más imperecedero del peronismo y la contribución más significativa de ese movimiento al proceso de formación nacional.

La fractura que se registra en los últimos años entre las dirigencias políticas y gremiales, por una parte, y sus bases, por la otra, condiciona el accionar del sindicato y del comité como ámbitos de integración cultural y de síntesis representativa de un aspecto organizativo de la sociedad. Ya nos hemos referido a la rutina intelectual con que la dirigencia enfrenta en la Argentina los problemas de fondo. Ese fenómeno no puede ser separado de una evaluación de la cultura nacional y su estado actual. La fractura entre bases y cúpulas genera tensiones que pueden tener desemboque en formas violentas o explosivas. A su vez, la conducción del Estado expresa la incapacidad de la clase dirigente para desenvolver desde los puestos de comando de la Nación una estrategia para revertir la crítica situación actual. El factor externo incide por ese camino en la propia actividad del Estado, que sirve así a los factores monopólicos antes que a los de orden nacional. Tal como lo señalamos en el capítulo prime-

ro, la condición nacional del Estado no se logra, y ello plantea los términos de una lucha para instalar en su cúspide a los representantes del Frente Nacional, que no serán tales plenamente sino cuando apliquen el programa de la alianza de clases y sectores.

Un importante factor de cohesión que no ha disminuido esa condición integradora —y por lo tanto su gran significación cultural— es la religión. Ella estuvo ligada a la formación de la nacionalidad desde sus comienzos. Lo hizo con su obra catequística y alfabetizadora durante la colonia, funciones que amplió durante las luchas de la Independencia, registrándose a lo largo de nuestra historia política muchas intervenciones de sacerdotes. La obra misionera y asistencial de la Iglesia —especialmente relevante en algunas regiones como la Patagonia— se ha visto completada con su aporte en materia científica y universitaria. Desde el Concilio Vaticano II y bajo la influencia renovadora que inició Juan XXIII, la Iglesia asumió en la Argentina con mayor impulso aún su obra pastoral. Habiendo definido que su compromiso específicamente espiritual la obliga a plantearse la situación social en cuanto es el marco real donde ella debe predicar y dar testimonio, ha venido cumpliendo una valiosa labor. Han sido los obispos quienes señalaron los principales males que sufre la comunidad y la imperiosa necesidad de atenderlos para preservar la dignidad del hombre como criatura de Dios. La voz de los pastores ha indicado la necesidad de preservar el orden moral, sin dejar de señalar el factor de desquicio que supone la miseria. En materia de derechos humanos, han sabido formular los justos reclamos expresando las legítimas aspiraciones de los argentinos. Frente a la violencia y la guerra, la voz de la Iglesia se alza recordando el escándalo y el error que significa promover situaciones en que la paz esté amenazada. Durante la guerra de las Malvinas, el propio Papa Juan Pablo II viajó a la Argentina a predicar la necesidad de la paz. Su presencia permitió entonces a la población expresarse masivamente en ese sentido, lo cual no había podido hacer dada la manipulación compulsiva de la opinión pública, con la complicidad de la mayor parte de las dirigencias.

Y ahora, cuando la paz está nuevamente amenazada al per-

manecer sin solución el diferendo con Chile por el canal de Beagle, es nuevamente la Iglesia quien toma la iniciativa para impedir la exaltación ideológica que puede concluir en un nuevo y gravoso enfrentamiento. No abandona en ningún caso su función religiosa, pero sabe bien que lo trascendente no es ajeno a la vida y no elude su compromiso con la realidad. Gracias a esa conducta, que no deja de ser interferida por la crisis, la función de la Iglesia reviste máxima importancia para preservar la identidad de nuestra cultura.

3. *El retroceso educativo*

Menos del cincuenta por ciento de los niños que ingresan en la escuela en la edad correspondiente culmina el ciclo primario. Ese es el promedio que desmiente categóricamente la ilusión de país con bajos índices de analfabetismo, tal cual era su característica. Es obvio que un niño que deja de concurrir a la escuela es tendencialmente un analfabeto aun cuando las estadísticas no lo registren por inercia burocrática en la definición. Los mayores, que abandonan sus estudios para incorporarse al trabajo a fin de ayudar a sus familias, tal vez conserven los rudimentos de la escritura y la lectura, pero no puede considerarse seriamente que escribir su nombre garantice el dominio mínimo aceptable del idioma. Son analfabetos por desuso. Esa es la situación que atraviesan centenares de miles de argentinos.

La deserción escolar supera el 70 y hasta el 80 por ciento en no pocas provincias e inclusive en zonas marginales de la propia Capital Federal. Es verdad que la escuela admite reformas y reclama la incorporación de nuevas técnicas educativas; pero el obstáculo principal está fuera de la institución que imparte la enseñanza. Por una parte, consiste en la incapacidad de una porción muy significativa de familias que no pueden asegurar la asistencia de sus hijos a las aulas. Por otra, la remuneración del trabajo docente se mantiene en niveles que en modo alguno logra compensar las necesidades básicas del educador. Este hecho es la causa de secuelas que distorsionan el proceso educativo.

La deserción no es sólo un fenómeno de la escuela primaria, aun cuando es allí donde tiene más perniciosos efectos sociales futuros. Es también un dato del ciclo medio, donde no llegan a finalizar los estudios más del 40 por ciento de los que ingresan a primer año. Estas cifras son aún mayores en la universidad. Que los jóvenes argentinos aspiran a educarse lo indica el interés que despiertan las diversas carreras terciarias y los distintos tipos de estudios secundarios; pero el hecho de que los estudios no sean completados está mostrando que defectos en el sistema y dificultades en la situación de los estudiantes conspiran contra el éxito. Antes de referirnos a la situación estructural de la universidad, que es donde la deformación del sistema de capacitación de recursos humanos de alta especialización asume su mayor gravedad, hemos querido referirnos a lo que consideramos que es el principal problema de la educación argentina: la incapacidad global del sistema social para formar a las nuevas generaciones.

No existe en la tierra pueblo alguno que habiendo descuidado la educación haya llegado a ocupar un lugar significativo. La educación es una necesidad y una consecuencia necesaria del desarrollo; ambos se implican y esa vinculación tiene tal fuerza que hace imposible plantear aisladamente uno y otro término. Advertirlo es ya dar un mentís definitivo a quienes nos acusan de grosero materialismo y economicismo. Sin educación, los pueblos no llegan a ejercer jamás su libertad y ésta al mismo tiempo —para salir del plano declarativo— necesita de condiciones sociales que no esclavicen a sectores mayoritarios de la población.

Esto explica que para los desarrollistas, en términos de experiencia histórica, la educación haya tenido tanta significación. La gestión del gobierno desarrollista —1958-1962— apuntó a lo que es lo fundamental: crear condiciones para un acceso y permanencia masiva de niños y jóvenes en el sistema educativo mediante los impulsos del desarrollo acelerado. La elevación del salario real y la plena ocupación crearon las condiciones básicas para eliminar en forma sostenida el flagelo crónico de la deserción —hoy agravado por la crisis a niveles mucho más profundos— que ya venía diezmando las filas escolares.

Atacamos el asunto de la remuneración y de la preparación y actualización de los docentes. El Estatuto del Docente (promulgado durante el gobierno del doctor Frondizi), suspendido en su aplicación por gobiernos posteriores, se ha transformado en bandera de lucha de los trabajadores de la enseñanza. La aplicación de esa obra desarrollista es la reivindicación gremial fundamental, que resume las aspiraciones del sector. Junto con la enseñanza libre, constituyen los dos ejes de la política desarrollista para la tarea educativa.

Pero conviene detenerse momentáneamente en la Universidad desde la perspectiva de la cultura, para evaluar el significado del principio revolucionario que supone la enseñanza libre. La Universidad es uno de los centros donde se elabora la cultura nacional. Hemos dicho que la Universidad argentina del pasado reflejaba la naturaleza del país pastoril. La reflejaba en cuanto formaba profesionales que servían los intereses de los grupos sociales que vivían del campo pero que no vivían en el campo. Así vemos que esa Universidad no formaba ingenieros de empresa, ni agrónomos, sino abogados y doctores en filosofía. Los pocos agrónomos que producía no eran para el campo sino para las oficinas. En esa formación puramente libresco se enseñaba a nuestros jóvenes una historia nacional, una filosofía y una sociología inspiradas en moldes extranjeros y divorciadas del contexto local. El Estado, administrado por la minoría política atada a la economía portuaria, monopolizaba esta enseñanza.

La reforma universitaria y los cambios políticos sobrevenidos en el país como consecuencia del sufragio universal y el arribo de la clase media al gobierno cambiaron en parte el espíritu de esa Universidad tradicional. Sin embargo, siguió privilegiada por su autonomía institucional y en el monopolio. Muy lentamente evolucionaba hacia la consideración y estudio de los problemas nacionales; el cientificismo, la especulación y el enciclopedismo teóricos eran y son aún caracteres predominantes de nuestros medios universitarios, que no están vinculados al ambiente social argentino, a la vida de la industria, del comercio, de la agricultura y su problemática, de la actividad económica y social del país. En las grandes naciones modernas la universidad está profundamente enlazada con el progreso técnico y

científico de la comunidad y de sus empresas. Gran parte de la investigación de los procesos industriales se hace en sus universidades con fondos que provee la actividad privada. Nuestra Universidad espera aún la reforma fundamental que corresponde a la Argentina del desarrollo.

Nuestra evaluación crítica del movimiento reformista y su contenido ajeno a los intereses concretos de la sociedad argentina, que muchas veces disolvía en postulaciones ideológicas irreales y solidaridades ajenas a los problemas vividos directamente por el pueblo, no supone menosprecio del valor de la reforma como incorporación efectiva de los estudiantes en la vida política, que abrió la puerta a su incorporación en las luchas del movimiento nacional. La crítica se dirige, precisamente, a señalar la desviación que sus dirigencias plantearon en las décadas siguientes al triunfo del movimiento renovador que encarnaba la Reforma. Esa desviación corresponde a la enajenación ideológica de las clases dirigentes, tanto se tratase de liberales como de la izquierda.

En 1958 se dio un gran paso hacia la modificación estructural de la universidad cuando se rompió el monopolio estatal y se consagró la enseñanza libre resistida por quienes debieron ser sus más ardientes defensores: los estudiantes, movilizados éstos por las consignas que emanaban de los centros políticos liberales e izquierdistas. Solamente en el cuadro de la libertad de enseñanza podemos esperar que las universidades y otros institutos de enseñanza superior y de enseñanza media respondan crecientemente a la necesidad de preparar los técnicos e investigadores que demanda el crecimiento de las fuerzas productivas y la modernización del agro, la minería y la industria. Pensemos que hasta hace poco más de un lustro nuestro país, que posee reservas de petróleo para alimentar la actividad económica de más de un cuarto de siglo de desarrollo acelerado, tenía apenas unos pocos ingenieros especializados en ese rubro. No obstante, se ha avanzado en este camino, como lo prueban los institutos tecnológicos privados que funcionan en todo el país, religiosos, laicos y militares, pero apenas se ha dado el primer paso y no siempre ajustado al objetivo que perseguimos cuando se estableció la libertad de enseñanza. Muchas de las universidades privadas

duplican las carreras y los programas de la universidad oficial. Pero faltan institutos aplicados a las industrias regionales y a la formación de técnicos especializados.

En la última década todo el modelo educativo se adaptó como la sombra al cuerpo a las políticas de fondo aplicadas como fue evidente en la universidad. Convertida en escenario de la agitación y la provocación ideológica, ella fue, entre 1973 y 1976, sucesivo coto de caza de las tendencias ferozmente enfrentadas que lograron el control formal de su gobierno. El resultado fue la pérdida del ya deteriorado nivel académico y la antesala de una represión sistemática ejercida en su seno.

Lejos de modificarse la estructura de la universidad —las carreras que se cursan y los contenidos de los estudios que se realizan para adaptarlos a las necesidades concretas del país en esta etapa histórica— se avanzó en la dirección inversa con consignas revolucionarias o reaccionarias, manteniendo las estructuras académicas intactas y mucho más ajustadas a las necesidades del *establishment*.

Análogamente con lo que sucedió en otras áreas de la vida argentina y como resultado de la política de fondo que se aplicó, el proceso de desmantelamiento de la universidad fue mucho más lejos desde 1976 hasta la fecha. La voz de orden fue el limitacionismo, cercenando la posibilidad de ingreso de diversos sectores. El cierre de universidades como la de Luján (precisamente un centro donde se estudiaban carreras no tradicionales), con falaces argumentos eficientistas, fue la nota más sonora de esa orientación y el punto que marcó la inflexión en lo que a la reacción popular y universitaria se refiere. Las trabas para ingresar a la universidad y para permanecer en ella se correspondían con la política que achicaba el salario y comprimía las oportunidades laborales.

El monopolio ideológico alcanzó niveles inauditos, sólo comparables con el paroxismo y el revanchismo pseudorrevolucionario que se instalaron en los claustros en los primeros meses del gobierno que asumió en 1973. Pero esta vez se aplicó más sistemática y metódicamente. Perdieron sus cátedras valiosos profesores que habían logrado permanecer en ellas a pesar de las conmociones anteriores y no pocos docentes y alumnos fueron de-

nunciados a los mecanismos de la represión, además de perder su condición universitaria. La tabla rasa fue prolija y logró su objetivo de paralizar la universidad como ámbito de debate riguroso de los problemas nacionales, para iluminar su estudio y su investigación. La salida del país de valiosos investigadores y docentes se acentuó marcadamente en esos años. Salvo excepciones, ocuparon sus puestos personas que ante todo significaban una garantía ideológica para el régimen. Lo prueba el hecho de que las doctrinas económicas aperturistas (librecambistas) y monetaristas fueron enseñadas como verdades científicas, cuando sólo eran artículo de fe para justificar la aplicación del modelo que se implementaba fundamentalmente desde la conducción económica.

El efecto sobre la formación de los jóvenes profesionales no pudo ser más nefasto. Es evidente que la ausencia de formación sólida es la característica más destacada de las últimas camadas de profesionales. El propio análisis que las agrupaciones estudiantiles plantean parece marcado por las taras sucesivas que tantos desencuentros trajeron. Por un lado, se agitan consignas anacrónicas que soslayan cuidadosamente la modificación de las estructuras académicas para servir a un proceso de desarrollo acelerado como el país reclama y, por otro, el debate estudiantil parece encerrado en aspectos formales capaces de dividir la opinión o agitar las conciencias, pero estériles en el momento de formular una política para la Universidad. Tal es el caso de la consigna agitada mucho últimamente del "ingreso irrestricto". En apariencia ella responde al planteo limitacionista formulado desde el gobierno que debe ser denunciado y combatido. Pero esa apariencia se desvanece en cuanto esa consigna se confronta con la propia experiencia realizada durante el gobierno justicialista, cuando el ingreso irrestricto no modificó nada ni garantizó una mejor ni mayor formación de jóvenes. Por otra parte, se reclama el libre ingreso para la misma Universidad —aquella que forma fundamentalmente profesionales en las disciplinas en las que el país no tiene puesta su prioridad— sin plantear en primer término la creación de nuevas opciones de estudio y su auspicio mediante todos los mecanismos de estímulo de que dispone el Estado, que no tienen por qué ser implementa-

dos por el mismo aparato burocrático y requieren directamente el concurso coordinado de la enseñanza libre. Universidad estatal y privada forman conjuntamente el potencial educativo que posee el país y ambas deben concurrir a realizar los objetivos nacionales en la materia.

La tendencia al enciclopedismo universitario y a la preparación masiva de científicos e investigadores "puros" está expresamente contraindicada en el actual estadio de nuestra evolución económica. Ahora tenemos que darle prioridad a la formación de técnicos para el desarrollo, por dos razones: a) porque es lo que falta para sacar petróleo, tecnificar el campo, electrificar el país, desenvolver y perfeccionar nuestra industria, y b) porque, si invertimos el orden y procedemos a formar investigadores en vez de técnicos, continuaremos exportando científicos que, una vez formados, carecen en el país de perspectivas para sus altas especulaciones y se ven constreñidos a emigrar.

4. Asfixia del arte y la creatividad

A pesar de todos los esfuerzos del régimen para sofocar las manifestaciones genuinas de la cultura, que necesariamente despertan un gran eco popular, es posible hacer un registro de la vigencia de los creadores argentinos al mismo tiempo que se constatan las limitaciones de todo tipo que conspiran contra una producción artística vigorosa y cada vez más abundante.

Los condicionamientos a la creatividad y la tarea artística abarcan tanto el plano material como las más diversas formas de la censura. Desde la más burda represión hasta las sutiles formas de la confusión y la autocensura. Lograr implantar la autocensura en el interior de cada creador es el objetivo del modelo antinacional que se propone subordinar la Argentina al esquema internacional regido por las grandes corporaciones, puesto que, de lograrse plenamente, se evitaría tener que recurrir a la represión abierta.

Pero las dificultades empiezan mucho antes, cuando cada creador encuentra crecientes obstáculos, para formarse y para poder realizar su obra. Por eso, los desarrollistas sostenemos que

para un eficaz estímulo a la creación intelectual y artística no basta con respetar la libertad de expresión en abstracto. Es menester asegurar la existencia de condiciones objetivas que sostengan y propaguen las obras resultantes de la aptitud creadora. Es obvio que el marco adecuado para que la creación prospere al máximo es el desarrollo. Sólo éste puede asegurar que la libertad sea ejercida por todos y que el resultado del trabajo de los artistas e intelectuales —único e irrepetible por naturaleza— llegue a concretarse, conocerse y multiplicarse. A su vez, en el marco de una expansión de todas las fuerzas creadoras, la comunidad estará en condiciones de aprovechar al máximo su patrimonio cultural, tanto en lo que atañe a la herencia, lo que recibe del pasado, como a lo que resulta de la labor actual de sus artistas.

Los argentinos tenemos un patrimonio cultural extraordinario, producto de las cualidades de nuestro pueblo y de quienes dentro de él expresan en el plano superior del espíritu y el sentimiento estético una síntesis peculiar de las vivencias de la comunidad. Pero ese patrimonio está desenvuelto parcialmente. En la crisis, se degrada, y cuando florece, es sólo como resultado de esfuerzos aislados. Es que la situación general no es propicia para que todos los productos de la creación sean alumbrados y conservados.

En los últimos años, por ejemplo, nuestra literatura no ha dejado de producirse y de conocerse, pero ha retrocedido considerablemente la industria editorial. Hace ya tiempo que hemos perdido la posición preponderante que teníamos en el mercado de habla castellana y retrocedemos en países vecinos y en el propio mercado argentino frente a las editoriales españolas, mexicanas y hasta venezolanas. Nada hay más elocuente, en este sentido, que ver las obras de nuestros mejores autores publicadas en editoriales extranjeras, cuando esa situación era impensable años atrás. No sólo tenemos que leer a Sábato o a Borges en editoriales españolas, sino que las nuevas generaciones de narradores y poetas, que recogen la tradición de la gran literatura nacional, aspiran a publicar en casas que les aseguren una distribución continental, tiradas significativas y derechos de autor compensatorios.

No tenemos quizás un Sarmiento que, pese a su visión maniquea y sus pretensiones extranjerizantes, fue el más grande pintor de la pampa y de las contradicciones y sufrimientos que en ella planteaba la necesidad de transformarla. Será muy difícil igualar la síntesis de Hernández, donde la épica alcanza niveles irrepetibles de simbiosis entre lo popular y lo nacional, pero la inextinguible veta de nuestros escritores, que no desaparece en ningún momento de nuestra historia, está sin duda viva y a la espera de su oportunidad para estallar y permitir a los argentinos verse reflejados en sus luchas y en sus esperanzas. Si Roberto Arlt —por nombrar sólo a uno que fue sistemáticamente soslayado hasta que la necesidad de conocer las propias raíces impuso a los jóvenes su relectura y revalorización, rescatándolo del rincón al que había sido relegado por la literatura oficial— pudo narrar la situación social sin desdeñar la subjetividad, queda hoy abierto el desafío para que sea descrita, descarnada y rehecha la realidad contemporánea, sin duda la más dramática que nos ha tocado vivir.

Algo análogo ocurre con el teatro argentino, que pese a todas las limitaciones sobrevive orgulloso, muchas veces refugiado en pequeñas salas que se niegan a desaparecer y desde donde, a veces, saltan las mejores obras a los más importantes teatros de la Capital. Hay gente de teatro irreductible en cada una de las ciudades importantes del país. Se realiza un festival de la vitalidad de Teatro Abierto donde —más allá de la diversidad de las propuestas estéticas— lo que se afirma es la vitalidad del teatro argentino. Allí concurren autores ya consagrados, como Roberto Cossa, junto a otros que intentan sus primeros pasos exponiendo los resultados de su creación al saludable ejercicio de la crítica y el público, que no siempre coinciden.

Muchas más estrecheces padece el cine, donde la censura muy rara vez llega a aplicarse, puesto que opera de antemano inhibiendo la filmación de películas que la calidad de nuestros cineastas garantizaría para el mercado local y el exterior. Pocas que logran realizarse permiten prever que nuestra filmografía se proyectaría rápidamente a un primer plano y hacer conocer el país fuera de él si una política de estímulo permitiese concretar centenares de proyectos que mueren sin haber visto la luz. Co-

mo toda industria, requiere, para desenvolverse, las condiciones que la favorezcan. Es un elemento importante en la actividad creadora de directores, actores y escritores, quienes cuando han tenido oportunidad han mostrado sus cualidades sobresalientes.

Otro tanto ocurre con la música, desde la culta a las diversas manifestaciones y géneros populares. Nuestros músicos son reconocidos en todas partes, y en los hechos nos hemos convertido en exportadores de excelentes artistas que se destacan en los escenarios de los países desarrollados. Las dos vertientes mayores de la música popular —el tango y el folklore— conviven ya sin disputa y enfrentan los desafíos que su propia evolución les plantea. Si Ariel Ramírez llegó a proponer en sus Misas la sublimación de los sentimientos religiosos y de solidaridad en los que nos reconocemos, Atilio Stampone, Horacio Ferrer, Eladia Blázquez o Astor Piazzolla —cada cual con su aporte— han logrado junto a otros creadores mantener vivas y renovadas la música y la poesía ciudadana.

El fenómeno musical que merece una reflexión especial es el del rock. En ese complejo, contradictorio y multitudinario fenómeno que apasiona a nuestros jóvenes, está resumida la lucha que en el plano de la cultura se libra entre las manifestaciones genuinas, auténticamente nacionales y populares y las influencias externas que pueden llegar a desnaturalizar el perfil propio de nuestro sentir musical. Es una lucha que no está en modo alguno resuelta, que por una parte se refleja en las estructuras musicales y en las letras de las canciones, y por otra se desenvuelve en la propia sensibilidad de los jóvenes. Es un fenómeno que viene auspiciado y sostenido por las grandes centrales de irradiación musical y su comercialización, pero que sufre mutaciones al llegar aquí: comienza a adaptarse. Sin embargo, no es un proceso lineal, puesto que registra avances y retrocesos que no están en modo alguno desconectados de las contradicciones que deben resolver las nuevas generaciones en cuanto a la identificación con su propia cultura, todo lo nueva que sea necesario, pero sin perder la identidad que la singularice en el mundo. ¿Quién puede negar que junto a denuncias válidas y sentimientos genuinos, se transmiten mensajes pasatistas y alienantes? Sólo los jóvenes, los destinatarios, podrán separar la paja del trigo.

El rock, para convertirse en una expresión cabal de nuestra cultura, debe atravesar el Jordán de su convalidación popular hecho suyo por las diversas clases sociales. No puede predecirse si lo logrará o si se constituirá finalmente en una cuña en nuestra sensibilidad que nos haga perder el sentido de lo propio. Ello depende en última instancia de la fuerza que tenga la cultura nacional. Cuando llegó la polka y se hizo nuestra, correntina, o cuando el tango andaluz, la habanera y la milonga se amasaron en los suburbios para alumbrar el tango, la cultura nacional era vigorosa y capaz de modificar todo lo que fuese necesario la influencia externa hasta convertirla en expresión auténticamente argentina.

Cierto es que las grabadoras argentinas y aun las filiales locales de empresas multinacionales, dueñas como eran de un catálogo riquísimo —tanto como lo es nuestro patrimonio musical— están atravesando dificultades que nunca antes conocieron, y ello no puede dejar de vincularse con la inédita y extraordinaria retracción del mercado consumidor, que es el que se reconoce en esas obras, más allá de aquellas tan singulares que logran trascender al exterior.

En el registro de lo que está vivo a pesar de todo no puede dejar de señalarse la plástica, que tiene tradición y vigor envidiables y que no deja de manifestarse a pesar de que allí también el mercado se ha contraído notablemente. Se advierten signos de conciencia muy nítidos entre nuestros pintores, escultores y dibujantes, que ha llegado a expresarse en forma de reclamo y exposición de los problemas del sector. Tenemos, entre centenares, a Victorica, Lacámara, Castagnino, Berni, Butler o Petorutti, que serán emulados por los nuevos maestros que vuelcan con legítimo orgullo sus obras en las galerías comerciales, los concursos y exposiciones de los museos. La actividad plástica, como todas las otras artísticas, también está viva en el interior, donde las limitaciones son todavía más severas que en Buenos Aires. Y lo mismo ocurre con la danza, que se mantiene en unos pocos centros, pero decidida a dar su testimonio irrepetible.

El registro pormenorizado es imposible, pero nos basta comprobar su existencia, su definida vocación creadora y su condición expresiva de nuestros sentimientos y realidades. Tra-

tándose del arte, de la literatura, la plástica, la poesía, el teatro y la música de los argentinos; hay que distinguir siempre entre "forma" y "contenido"; entre la riqueza expresiva de un vasto e importante movimiento estético localizado en nuestro país y las obras de ese movimiento que reflejan el espíritu nacional en sus múltiples facetas.

Y ese criterio metodológico, que nos permite discernir lo que hay en cada aporte y en cada escuela de trascendente y significativo para el porvenir, se complementa con la actitud con que hay que asumir el estudio de la historia de nuestra cultura. En la indagación de las raíces culturales debemos prevenirnos contra todo sectarismo de escuela, contra toda fragmentación partidista de la historia y la cultura nacional. Debemos concebir a una y otra como un proceso indivisible y asumirla en su totalidad sin beneficio de inventario. Los sucesos históricos no son fenómenos aislados sino eslabones de una cadena sin fin. Los hechos particulares responden en gran parte a ideas y criterios que se expresan en un proceso continuo hacia la integración, la síntesis y la afirmación de la personalidad nacional. Es un proceso en el cual cada etapa actúa como supuesto de la siguiente, de modo que las tesis y antítesis actuales entrañan la síntesis de mañana. Por lo que es pueril negar lo que fue, o desfigurar lo que es, cuanto más, pretender excluirlo de la historia.

5. Los desafíos de la cultura nacional

Los argentinos tenemos un patrimonio espiritual que necesitamos preservar. Arranca de nuestro origen hispano y se enriquece con el aporte de nuestras propias vivencias criollas y la influencia fecunda de los inmigrantes. Comprende la tradición, los hábitos sociales, las ciencias, las letras y las artes, los modos de vida, la moral religiosa, los principios de paz y de convivencia que hemos practicado a lo largo de nuestra historia; y que hoy —cuando están cuestionados por la amenaza del terror— cobran mayor vigencia que nunca.

Todos estos elementos configuran nuestra personalidad nacional. Sin ellos, sin su preservación y constante desenvolvi-

miento, nuestro país no sería una nación. Podríamos alcanzar quizás altos niveles de progreso material, pero nos faltaría este factor aglutinante, el espíritu nacional que une a los argentinos en una comunidad diferenciada y vigorosa. En la medida en que vayamos siendo una Nación integrada material y espiritualmente, alcanzaremos dimensión universal. La región, el continente, el mundo, pasan necesariamente por la consolidación nacional. Lo universal no solamente no niega sino que se nutre de las particularidades nacionales.

El desarrollo económico nos dará la fuerza para imponer esa personalidad, para apuntalar el genio nacional. De lo contrario, marcharemos a la zaga de otras naciones que nos someterán económicamente y nos impondrán su cultura, su "forma de ser". Hasta ahora hemos dependido frecuentemente del factor externo que no sólo nos asfixió materialmente, sino que nos invadió con sus formas culturales, deformó y falsificó nuestra historia y sobrepuso una cultura de importación sobre el fondo autóctono de nuestra propia cultura nacional.

El desarrollo económico transformará la estructura de la dependencia. Introducida la conciencia nacional en la determinación precisa de los objetivos comunitarios, la cooperación internacional ya no se aplicará a financiar el simple intercambio de nuestras carnes y granos por bienes intermedios y de consumo. Ahora la necesitamos para que se sume al ahorro nacional y al esfuerzo de nuestros empresarios y trabajadores en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la integración económica, vertical y horizontal de nuestra patria. En esta empresa debemos poner una voluntad nacional de preservar nuestra autodeterminación, rechazando toda interferencia extranacional. Esta voluntad de soberanía y desarrollo es una magnitud espiritual, es una actitud deliberada y consciente y nunca será el resultado mecánico del progreso material.

Por eso repetimos que para ser Nación "hay que querer" ser Nación. Y para que esta aspiración no sea una idea girando en el vacío debemos asegurar la participación del pueblo, de todo el pueblo, en la solución y en la conducción de los problemas nacionales. Ningún dirigente aislado de su pueblo, por genial que sea, puede en esta época conducirlo a la grandeza y a la libera-

ción. Todos los sectores sociales deben participar dinámicamente en la lucha trascendente por afirmar los trazos característicos, espirituales y materiales del ser nacional.

Luego de estas reflexiones, es evidente que la defensa de la cultura nacional —o sea la preservación y el despliegue de nuestra identidad cultural— no concierne sólo a los creadores, a los artistas y a los intelectuales, sino a todo el pueblo. El papel de quienes trabajan en las expresiones del arte y del espíritu se corresponde con la importancia de su tarea para el destino de la comunidad. Ellos son quienes deben expresar las vivencias, los sentimientos y las aspiraciones del conjunto. Su misión es insustituible y no puede estar desligada de las luchas de todos por lograr la emancipación nacional. Integrar sus reivindicaciones y la dinámica motivacional de su obra en el ancho campo que plantea la condición humana es un imperativo ético del creador, pero también lo es sumar su esfuerzo a la universalidad de la lucha nacional, que concierne al conjunto de las clases y sectores sociales. Sus compatriotas son, para el artista, su prójimo, y el destino de su obra debe aspirar a trascender a todo el género humano. Lo logrará cabalmente en la medida en que más genuinamente exprese la singularidad de la cultura a la que pertenece.

Es falsa toda dicotomía que se plantee entre las realizaciones superiores del espíritu y la construcción material de la nación. La única forma de demostrar su falsedad es articular la labor creadora al trabajo de todos para modificar la realidad, para engendrar la cultura. Esto nos obliga a introducir una reflexión sobre la ideología. Entre los intelectuales y los artistas la ideología, en tanto es una deformación de la realidad, puede hacer más daño y sembrar más confusión. El antídoto no es otro que reforzar el vínculo con la causa de la nación, con la práctica concreta de todos y de cada uno de los sectores y clases sociales. En el pasado, esa vinculación fue deformada y envilecida haciendo jugar a los artistas el papel de repetidores y propagandistas de las ideologías, tanto por parte de la izquierda como de quienes ejercen posiciones de privilegio y poder. Nada más repugnante que esa manipulación, y a ella se opone frontalmente la concepción que reclama la libertad más amplia para la creación.

No hay ideas subversivas ni es concebible una amenaza de la convivencia que provenga del plano cultural. Existen, sí, actitudes subversivas cuando ellas enfrentan con las armas en la mano la convivencia pacífica de la comunidad, tal como sucedió en nuestro país cuando grupos sediciosos disputaron al Estado el monopolio de la fuerza. En ese caso, el Estado debe reprimir con toda su energía, pero con la participación democrática del pueblo y de acuerdo con la ley. Por estas razones no es posible admitir ninguna limitación ni forma de censura cuando se trata de expresar auténticos movimientos creativos. Las limitaciones a la creación se corresponden también con la manipulación de la conciencia a través de los medios masivos de comunicación. Esto es lo que hace tan importante una política que respete la pluralidad y la libertad y que ponga énfasis en preservar la identidad y desenvolverla en todo lo que ella tenga de potencialidad en su seno.

Convocamos también a la juventud a esta reflexión sobre la cultura argentina, y no perseguimos con ello un fin de mera especulación intelectual. Aspiramos a que los conocimientos que puedan obtener actúen como arma, como instrumento de acción colectiva. Queremos que el pueblo aprenda a amar y defender su patrimonio espiritual. Queremos que ratifique sus creencias profundas y sus vivencias culturales para reafirmar su vocación nacional y para que luche contra todos los intentos de desviarla o diluirla. Antes, el ser nacional luchó y se defendió de las deformaciones que querían imponerle desde afuera; ahora, tiene que defenderse de corrientes internas y externas que quieren hacerle cambiar su decisión de constituir una Nación por una idea supranacional de una pretendida nacionalidad latinoamericana. Seremos mejores latinoamericanos en la medida en que seamos mejores argentinos. ¡No hay sustituto para la condición nacional!

6. ¿Existe una cultura latinoamericana?

Este interrogante se plantea frecuentemente y no siempre ha sido impulsado con inocencia. En efecto, la cuestión está conec-

tada a la intensa propaganda con que se promueve la presunta panacea de la integración regional como solución a los males del subdesarrollo. En la medida en que forma parte del debate político, es imprescindible su análisis y una toma de posición que sirva para iluminar el debate y la lucha política.

La pregunta sobre si existe o no una cultura latinoamericana tiene para algunos una respuesta tan obvia que ni siquiera merece ser formulada. Para nosotros también, la respuesta es afirmativa. No obstante, es obvio que estamos ante ese tipo de interrogantes que no pueden responderse con un monosílabo. Es una cuestión incitante, cargada de implicaciones y de una complejidad no siempre advertida ni siquiera por quienes hablan sobre ella en el campo de los especialistas.

¿Cómo se define la particularidad latinoamericana de la cultura, teniendo en cuenta nuestro concepto? ¿La diversidad de manifestaciones culturales existentes en Latinoamérica, aun dentro de una nación, se concilia con la existencia de una cultura común? ¿Hay culturas nacionales, propias de las naciones del continente? ¿Cuáles son las relaciones entre las culturas nacionales y la cultura latinoamericana? He aquí algunos de los interrogantes que se encadenan a la pregunta que encabeza este párrafo.

El primer paso del razonamiento, a nuestro juicio, debe ser el esclarecimiento de la noción de cultura; ya que el lenguaje suele confundir la cultura con algunas de sus manifestaciones, como el arte y la literatura. Se habla de cultura y se piensa, por cierto automatismo mental, en escritores o pintores; lo cual puede orientar bien si los escritores o pintores son expresivos de una determinada cultura —las formas llamadas superiores tienen el poder de sintetizar toda la materia cultural—, pero es metodológicamente incorrecto y puede inducir a error. Nos parece esencial que se parta de la noción de cultura que, después de muchos avatares, nos ha dado la ciencia, tal como fue formulada al comienzo del capítulo. La antropología cultural y en general las ciencias sociales han abandonado la noción, legada por el Renacimiento, que la identificaba como producto exclusivo de la educación y del refinamiento intelectual; noción que desarraigaba

ba la cultura de la vida social total, que por un lado la circunscribía a las *élites* y por otro la erigía en categoría universal, en cultura sin fronteras. Para los pensadores del Renacimiento el arte y la filosofía clásicas eran un modelo para imitar, y los hombres de espíritu refinado, únicos portadores de la cultura, eran iguales en todo el mundo.

La ciencia, para superar esa noción, ha percibido que no hay una separación tajante entre naturaleza y cultura, al modo que lo creía el pensamiento clásico y renacentista. Esa percepción aparece en la filosofía de la ilustración y, sobre todo, en el idealismo alemán de fines del siglo XVIII. A partir de ella ha podido avanzar hoy la antropología cultural.

Pero interesa apuntar aquí algunas cuestiones teóricas y metodológicas. Una es que, cuando hablamos de cultura como acción del hombre, lo concebimos como hombre social, que crea y actúa unido a otros hombres en una sociedad. En consecuencia, la cultura, como objetivo de estudio y como realidad, es histórica, está condicionada a circunstancias de tiempo y de lugar y es también el resultado de una actividad cultural anterior. De allí la importancia de rescatar el concepto de herencia cultural en el que se incluyen las tradiciones, el folklore y los modos de trabajar, comerciar, guerrear, crear estéticamente, etc., que van caracterizando una determinada cultura.

Otra cuestión es que la cultura debe ser abordada como totalidad, aun cuando sea lícito aislar conceptualmente sus partes para estudiarlas. Es preciso considerar la cultura como una unidad, como una integración de elementos en un proceso continuo. Por ejemplo, quien estudie elementos del folklore latinoamericano podrá encontrar que ellos fueron surgiendo en un encadenamiento de actividades del hombre de nuestra tierra. De su trabajo y de su relación con los elementos materiales surgían las artesanías, inicialmente bienes de uso, y su visión de la creación plástica. Durante el propio trabajo o en los momentos de ocio cantaba, o bailaba en las fiestas —en ellas, como en el noroeste de nuestro país y en muchos lugares de Latinoamérica, la celebración frecuentemente se mezclaba con el trabajo comunitario—, y así surgían canciones que reflejaban su contacto con los elementos, su sumisión o su rebeldía. El trabajo, la arte-

sanía, el arte, los hábitos de comer, beber, vestir y celebrar se integraban en un mismo proceso.

En otro nivel puede señalarse que nuestro proceso de formación cultural fue tomando e integrando elementos culturales diversos: los elementos culturales precolombinos cambiaron con la Conquista y a la vez los elementos de la cultura española o portuguesa que traía el conquistador cambiaron al contacto con los conquistados, integrándose ambos en formas culturales nuevas, las cuales fueron a su vez mutando e integrándose con nuevos aportes; entre ellos, la inmigración más o menos intensa según los países. El resultado final, la cultura latinoamericana, es específico, con elementos indígenas diversos y europeos también diversos pero distinto de ellos.

Esto nos permite visualizar la personalidad cultural latinoamericana, pero nos lleva al tema de las particularidades que a su vez la forman; nos lleva al tema de la diversidad cultural y al tema de las culturas nacionales. Por de pronto, las culturas con que se encontraron los conquistadores eran diversas. Al tiempo de la Conquista, con culturas superiores, como las de los Incas o los Aztecas, coexistía una variada gama de culturas en distintos estadios de desarrollo; en el territorio de la Argentina había formas culturales muy diversas en las distintas regiones, y las comunidades agrícolas y mineras del oeste no habían homogeneizado la nación y coexistían con las tribus recolectoras y cazadoras del este. Los ejemplos pueden multiplicarse. A su vez, el contacto del conquistador con la cultura existente fue diverso según los lugares; en algunos, los dominados dejaron una huella profunda sobre los dominadores, como en México y Perú, y éstos actuaron de distinto modo en cuanto al sometimiento o a la receptividad que hallaron. Solamente en lo que hoy es el territorio argentino se aplicaron, en grandes rasgos, tres formas de conquista y colonización: en el noroeste, el sistema de encomiendas, una forma feudal de incorporación del indio a la producción; en el litoral, la modalidad orientada por los padres de la Compañía de Jesús, dicho sea de paso, la acción evangelizadora de la Iglesia ofrece otra modalidad de contacto cultural, en el que había una mayor consideración del indio como persona y que puede sintetizarse en el hecho de que los sacerdotes apren-

dian el idioma nativo para cumplir su misión; y en la zona del Río de la Plata, la más vasta, no hubo encomiendas por la resistencia y la capacidad de dispersión de las tribus más atrasadas que la poblaban, y la producción agraria se encaró desde un comienzo bajo la forma capitalista, en el siglo XVII. El examen de la diversidad de modalidades puede extenderse a toda Latinoamérica e incluirse otras particularidades como la introducción en gran escala de la esclavitud en la producción azucarera del Brasil. Todas influyeron, aunque de modo diverso, en la conformación cultural.

A esas diferencias iniciales se sumó el factor de la multiplicidad de formas de organización administrativa y política que fue imponiendo la metrópoli en el periodo colonial; el proceso de diferenciación continuó luego con la independencia, cuando fueron surgiendo las naciones. En este proceso las naciones fueron continente de culturas particulares. Así, entre otras cosas y entre otros ejemplos, las *élites* dirigentes de Buenos Aires vinculadas con Europa por la economía agroimportadora adoptaban modelos europeístas que chocaban y se integraban con formas culturales propias. La economía esclavista del nordeste marcaría la cultura brasileña y la matizaría luego, en el siglo pasado, la implantación de una economía capitalista moderna en las explotaciones cafetaleras del litoral sur. México vería influida su cultura por la dialéctica de la influencia norteamericana y del rechazo nacional de esa influencia.

Para avanzar en el análisis cultural se justifica evocar el ya mencionado concepto de nación. La nación es una entidad histórica que integra en su universalidad a las clases y sectores sociales, a las regiones y a su cultura, como expresión ésta de la actividad humana y social que se desenvuelve en su seno. Por un lado, las naciones, que surgen de un proceso histórico complejo, separan grupos étnicos, separan culturas; así la cultura rioplatense fue separada por la conformación nacional de la Argentina y Uruguay. Pero, por otro lado, las naciones integran los elementos culturales heterogéneos que contienen.

Este último aspecto nos parece central. Ya hemos visto la cultura como proceso continuo de integración, y cómo en las naciones latinoamericanas se integró el componente indígena ori-

ginario con los aportes europeos introducidos por la conquista, por la inmigración y por las variadas formas de contacto con la cultura europea. Esa integración vertical se complementa con una integración horizontal de componentes propios de la región y de las naciones que interactúan y participan del complejo proceso de relaciones que tiene lugar en la formación de una cultura. Esa variada gama de elementos es la que compone una cultura, y la nación contribuye a consolidar su unidad.

Esa unificación, esa *nacionalización*, de la cultura no supone una homogeneización imposible. La nación para realizarse debe buscar la unidad en la pluralidad de sus manifestaciones culturales, las de sus regiones geográficas y las de sus clases y grupos sociales. Si una nación, o más exactamente los dirigentes del Estado, intenta ahogar lo que es hondamente sentido por el pueblo en tal o cual región, estará vulnerando una de las leyes básicas que rigen el proceso cultural y el precio será la rebeldía subterránea o manifiesta y, consecuentemente, la aparición de un factor actual o potencial de fractura de la unidad. Es conocido el fracaso de la coacción para soterrar manifestaciones culturales de vascos o catalanes en España o para imponer el idioma ruso en las *naciones* que integran la Unión Soviética. El proceso cultural puede orientarse si se respetan sus leyes, si se respetan las tendencias que arrancan de lo profundo del pueblo y si se respeta la libertad que le es connatural. La nación puede realizarse si da el marco a esas manifestaciones culturales diversas, si encuentra en todas ellas un fondo común y un principio de identidad en la diversidad. En la Argentina el hombre que vive en la ciudad de Buenos Aires es distinto del que vive en la provincia de Salta, y aun en la propia provincia de Buenos Aires; tan distinto como lo es el tango, música de Buenos Aires, respecto de la zamba, la chacarera, la vidala, la milonga y otras formas de la música del interior. Pero tanto el porteño, habitante de Buenos Aires, como el salteño o cualquier otro provinciano son argentinos, tienen rasgos comunes en su diversidad y se reconocen como pertenecientes a una misma nación. Ni uno ni otro resignará sus rasgos culturales más particulares —la nación no debe desconocerlos, vale insistir— pero ni uno ni otro renunciará a su condición nacional.

Este aspecto nos lleva ya a las relaciones entre la cultura latinoamericana y las culturas nacionales que la integran. América Latina tiene una identidad cultural, en los hombres del continente existe un fondo común, es posible reconocerlos como latinoamericanos. Pero se trata de una identidad de distinta calidad que la identidad nacional, no dotada de la fuerza cohesiva que le confiere la nación. Entre venezolanos o entre brasileños habrá vínculos culturales más fuertes que entre hombres de distinta nacionalidad, aun dentro de Latinoamérica; incluso en situaciones especiales como, por ejemplo, el caso de pueblos del noroeste argentino y del sur boliviano que podrán tener pautas culturales semejantes, pero que se diferenciarán por el factor nacional que los unirá a otros pueblos, a la Argentina y Bolivia, en cada caso. La ambigüedad que de todos modos suele darse en zonas de fronteras no hace sino confirmar la fuerza del factor nacional, porque es éste en uno y otro lado de la frontera el que interfiere.

¿Interesa desarrollar una cultura latinoamericana o interesa desarrollar una cultura nacional? ¿Ambos son términos contradictorios o no lo son? ¿Cuál es el punto de conflicto y cuál el de conciliación de ambos factores culturales? Interesa desarrollar tanto la cultura latinoamericana como la cultura nacional, porque justamente el tema de la cultura es central en la realización humana y la libertad dado que el hombre necesita reconocerse a sí mismo en la cultura. En tanto particularidad cultural, lo latinoamericano satisface ese requisito —pero no debe anular una particularidad mayor como es la nacional—, en otro nivel vemos cómo la unidad de la nación debe realizarse respetando la pluralidad de sus manifestaciones culturales.

La cultura latinoamericana se desarrollará cuanto más completo sea el desarrollo de las culturas nacionales que la componen. Si ejemplificamos con el arte o la literatura, que si son genuinos sintetizan y expresan toda la cultura, tendremos que será más apta para el desarrollo de una cultura latinoamericana cuanto más nacional sea. Nada podrá construir un arte abstraído de las particularidades, que diluya los matices y que busque una identidad latinoamericana donde ésta no existe; para encontrarla tendrá que ser genuino en expresar su cultura na-

cional. Así ocurre y ocurrirá en todos los campos culturales, como en la literatura. Los escritores trascienden y aportan a las letras latinoamericanas en la medida en que son fieles expresiones nacionales. Borges y Sábato aportan en la medida en que son bien argentinos, que expresan manifestaciones auténticas de la cultura nacional en la que actúan, y lo mismo puede decirse de Amado, de Vasconcelos o Guimarães Rosa, para Brasil, de Rulfo o Fuentes, para México; de Scorza o Vargas Llosa, para Perú; de García Márquez para Colombia; de Donoso, para Chile, de Roa Bastos para Paraguay y de Onetti para Uruguay. Eso se comprueba en las páginas perdurables de esos escritores y también, a la inversa, en otras que escribieron al influjo del llamado "boom de la literatura latinoamericana", que en algunos de ellos determinó una pérdida de calidad literaria explicable por el apartamiento de las fuentes nacionales, por el descenso a un latinoamericanismo abstracto surgido de los criterios de algunas editoriales europeas y no de la realidad.

Este enfoque, por lo demás, apunta más allá que a la elaboración de criterios estéticos; apunta a orientar en aspectos más generales, en lo que suele denominarse política cultural —y en general de toda la política. América Latina se desarrollará, si las naciones que la componen se desarrollan. Sólo así podrá ser el ámbito para un desarrollo pleno del hombre en su cultura y en su libertad, tal como todos los latinoamericanos lo queremos.

Con esta exposición hemos querido reunir los elementos fundamentales del debate sobre la cultura nacional y los temas que le conciernen. Hemos hecho, además, cuando se justificaba, algunas referencias a la situación actual, tanto como ilustración del planteo metodológico como de sugerencia para la acción.

Cuando insistimos en la integración económica y social del país, previa a toda otra integración regional, luchamos por que los argentinos volvamos nuestra mirada al país en su magnífica totalidad: la Patagonia, la Pampa Húmeda, el Delta, el Nuevo Cuyo, el Noroeste, el Gran Chaco, la Mesopotamia y el Gran Buenos Aires. Hacia las provincias mediterráneas, donde las grandes vivencias de la cultura tradicional han resistido la presión y la asfixia del subdesarrollo material. Hacia las remotas regiones australes, hasta ahora prácticamente segregadas de la co-

munidad, aisladas y sometidas a la influencia demográfica y cultural del extranjero. Hacia la pujante riqueza potencial del Nordeste, otra insula incomunicada a pesar de estar abrazada por los ríos más caudalosos de la República. Hacia el Gran Buenos Aires, centro principal del poderío industrial-financiero del país.

Queremos una nación total, una nación capaz de hacer florecer, con toda su potencia virtual, el arte, la ciencia, la literatura, la música de nuestros antepasados.

Solamente este país, integrado material y espiritualmente, será una nación plenamente soberana. Una nación que contribuirá con enorme vigor y personalidad, entonces sí, a la cooperación regional y a la convivencia pacífica de todos los pueblos del mundo.

CAPITULO VII

***PROYECCION DE LA CRISIS: LA POLITICA
EXTERIOR***

La política exterior de una nación —y en ello la Argentina no es una excepción— es siempre el resultado de su proyección al mundo. No puede existir una política exterior protagónica, influyente o poderosa por parte de quien tenga cuestionada su condición nacional. Dentro de los márgenes que confieren las posibilidades nacionales de cada pueblo pueden practicarse mejores o peores políticas, pero no puede modificarse la relación de fuerzas ni exhibir una influencia sin respaldo. La mejor política exterior será aquella que, a partir de la situación objetiva en la que cada país se encuentre, explote mejor la situación internacional en beneficio de sus intereses y en función del afianzamiento de la paz y la convivencia entre los pueblos.

No puede haber política exterior beneficiosa sin una política nacional a secas que actúe a partir de una concepción correcta y de aplicación tanto interna como externa. Esto es lo que falta en la Argentina desde hace dos décadas y nos ha llevado a sucesivos errores que no han hecho sino convalidar los retrocesos generales que el país viene sufriendo en todos los terrenos. También esos errores son imputables a los sectores dirigentes que, en su mayor parte, se niegan a aceptar la realidad de los hechos y cada vez encuentran menos argumentos para justificar la pérdida de posiciones. Instalada la anarquía en la conducción del Estado, hemos sido testigos de los sucesivos desaciertos en que se

ha incurrido. Y en los últimos tiempos se ha llegado al grotesco. Las consecuencias en no pocos casos han sido dramáticas.

El Estado, al ser conducido sin una perspectiva nacional integrada (lo cual supone atender tanto a los aspectos de la base material como a las mejores condiciones de convivencia y realización espiritual) se convierte en la expresión de intereses particulares que muchas veces no coinciden sino que enfrentan abiertamente los de toda la comunidad. Es el caso del Estado manejado en el sentido de favorecer a los grupos monopólicos y su predominio en la economía argentina. La soberanía no es una posición jurídica, sino el resultado de la condición nacional. Esto es lo que hace que el concepto de soberanía sea la pieza central de toda la teoría del derecho internacional, que se ocupa de compilar los resultados de la convivencia entre una pluralidad de entidades que aspiran a desenvolver en plenitud su capacidad soberana.

De esa experiencia y de su sistematización teórica surgen también principios claves, como el de no intervención, integridad territorial o autodeterminación de los pueblos, que configuran no sólo aspiraciones, sino que también expresan intereses muy concretos de los países que los sustentan. Ellos se han universalizado y consagrado en normas fundamentales de la convivencia internacional en forma históricamente articulada a los procesos de descolonización y afianzamiento de las naciones.

La política internacional es, a su vez, el campo en el que se entrecruzan las políticas exteriores de los Estados. En ella se dan los campos de fuerza que corresponden a las realidades que abarcan los diversos protagonistas. Por ello, la presencia y proyección internacional de las dos superpotencias es un dato primordial para comprender la situación mundial, tal cual lo señalamos en el capítulo inicial de esta obra. De esa relación deriva nada menos que la coexistencia pacífica, un factor principal del afianzamiento de los diversos procesos nacionales que sitúa el problema del desarrollo en el centro de los intereses que concierne al conjunto del género humano, del mismo modo que lo son la paz y su preservación.

En la medida en que los Estados nacionales constituyen el marco dentro del cual se plantea el proceso de desarrollo, se

convierten en puntos de referencia para el trazado de las diplomacias que se practican en el campo comercial y en el financiero. Olvidando el concepto y la vigencia del Estado Nacional es fácil proponer estrategias que se alejen de la realidad para el tratamiento de problemas acuciantes. Cuando esto ocurre, la suma de debilidades que deriva de soslayar la fuerza que sólo el Estado nacional puede ejercer, resulta fácilmente controlable por las fuerzas políticas y sociales dominantes. Esta conclusión corresponde a la experiencia que invariablemente se recoge cuando se traslada del titular del poder de cada nación, que es su Estado, a un organismo diferente de éste, la resolución de un asunto que concierne a su desarrollo. Es el caso de las relaciones con las multinacionales, o con el pago de la deuda externa o con el despliegue pacífico de la energía nuclear, para poner sólo algunos ejemplos.

En la misma línea cabe afirmar que el olvido y la no observancia de los principios fundamentales de no intervención y respeto a la autodeterminación en que ha incurrido la Argentina en los últimos años son resultado de su deterioro de la condición nacional y del consecuente peso que han adquirido los factores externos sobre las decisiones del Estado argentino.

Así, por ejemplo, el gobierno que anuló los contratos de petróleo que habían dado el autoabastecimiento al país, diez años antes de que el aumento de los precios del vital hidrocarburo pusiera de relieve su incidencia en la economía mundial, fue el mismo que votó a favor de la transformación del contingente de intervención estadounidense en Santo Domingo en una Fuerza Interamericana de Paz. Que luego no integrara esta fuerza en los hechos con contingentes propios no disminuye la gravedad de la violación cometida al principio de no intervención. Y que ahora se argumente todavía que la Argentina no participó en la invasión ilegal a Santo Domingo por el hecho de no enviar soldados tiende a ocultar el hecho político del apoyo irrestricto que se hizo a la diplomacia norteamericana. En esa misma línea se situó la presencia diplomática argentina en Saigón, en el más alto nivel ministerial, después de iniciada la escalada estadounidense en Vietnam.

Esa tendencia se fue acentuando en los años posteriores, par-

ticularmente en los más recientes, donde la proyección externa de la Argentina siguió puntualmente todos los vaivenes de la crisis y por lo tanto se hizo errática y perdió toda referencia con los intereses históricos de la Nación. Pero, como toda tendencia, reconoce también contradicciones. Puede registrarse la que existió en el gobierno militar instaurado en 1966. En 1967 el área económica fue entregada al monetarismo en la persona de Krieger Vasena pero desde otras áreas del gobierno se resistió la política de entrega, instaurándose en la misma conducción del Estado la puja entre el factor nacional y el factor externo. Ello implica que el gobierno que propició la desnacionalización de sectores enteros de la economía, rechaza las tesis de la integración regional que por entonces era llevada adelante en una audaz ofensiva política y psicológica que logró seducir a casi la totalidad de la dirigencia política, desde la izquierda hasta los liberales, pasando por los sectores de la dirigencia populista. Más adelante volveremos sobre este tema.

El tercermundismo, que presume de ser una formulación nacional de nuestra proyección externa, fue la voz cantante entre los años '73 y '76. Su insolvencia teórica es resultado de categorías ideológicas y no de un análisis científico de la realidad mundial. Este análisis muestra que las contradicciones entre el Este y el Oeste —muy marcadas en el plano de las ideologías— no lo son tanto en el de los intereses. Existen países desarrollados capitalistas y socialistas y existen países subdesarrollados capitalistas y socialistas. Entre los desarrollados, más allá de las diferencias políticas, se produce una creciente interdependencia basada en su propio desenvolvimiento acelerado. Invariablemente, el mundo desarrollado —sea capitalista o socialista— se beneficia de la relación de intercambio que mantiene con el mundo subdesarrollado y enfrenta a su vez trabas que derivan de su propio nivel de acumulación. La relación desarrollo-subdesarrollo mantiene por un lado el drenaje de riqueza desde los países dependientes a los países centrales y, por otro, crea dificultades nuevas y alimenta la crisis de sobreproducción a la que se enfrentan las naciones altamente industrializadas. La solución no es otra que el desarrollo nacional —es decir la expansión acelerada de todas las fuerzas productivas en el seno de una econo-

mía integrada—, la que no está en el centro de las preocupaciones populistas que confunden la política exterior nacional con las declamaciones retóricas de presunta independencia de los grandes sistemas ideológicos. La prueba del ridículo para la posición tercermundista está dada por el hecho de que ella fue ejecutada con desenfado por el mismo gobierno que practicó la más antinacional y antipopular de las políticas de fondo, al poner en marcha el modelo monetarista-aperturista de Martínez de Hoz.

Pero el gobierno militar no llegó por coherencia a esa posición. Previamente pasó por todos los tramos de la sujeción y el satelismo al que lo condenaba la política económica elegida. En los primeros tramos del régimen instaurado en 1976 el factor preponderante de la política exterior estuvo dado por el allanamiento a las presuntas aptitudes que tenía el equipo económico para obtener una consideración favorable a nuestra situación, por parte de los países industrializados y los centros de poder financiero internacional. El país sufrió la extorsión que se le hizo, asegurándole asistencia financiera a cambio de su sometimiento a la política mundial que conviene al sistema monopólico. Se enajenó el interés nacional en la propia concepción del modelo aplicado al país, y esto se expresó así en la política exterior.

Y aún cuando la presión de la opinión pública internacional en defensa de los derechos humanos comenzó a acrecentarse los grupos dominantes de la política argentina se las arreglaron para hacer convergente esa presión en la dirección de una más férrea sujeción al esquema aperturista. Haber determinado ese mecanismo nos permitió a los desarrollistas denunciar en 1977 que el reaceramiento a los Estados Unidos —necesario a toda política nacional que fije prioridades y requiera el concurso del capital externo— se desfiguraba si se hacía en el doble cuadro de la interferencia en nuestros asuntos internos y, a la vez, negociando derechos humanos por política económica.

Cuando sobrevino el embargo cerealero que se impuso a la URSS desde los Estados Unidos, la decisión argentina de mantener los embarques de granos fue presentada hipócritamente como una resolución de inspiración nacional, cuando en realidad correspondía directamente al interés comercial de las multi-

nacionales que controlan el comercio mundial de esos productos primarios y era, a la vez, una medida imprescindible para mantener la vigencia del modelo económico recesivo que se le había impuesto al país; puesto que el resultado de esas exportaciones era lo que permitía mantener en vigencia la "tablita" cambiaria (sobrevaluando el peso artificialmente y facilitando con ello el ingreso de divisas con finalidad puramente especulativa).

Tampoco estuvo inspirada por el interés nacional la tentación del gobierno militar de enviar contingentes de soldados armados al Sinaí; iniciativa que fue apoyada por diversos factores de poder y finalmente resultó impracticable.

La violación por parte de la Argentina de los principios de no intervención, se hizo grosera con la injerencia en los asuntos bolivianos y en América Central. En Bolivia, el gobierno militar de Buenos Aires intervino activamente pagando un alto precio, cuyas secuelas no han terminado todavía de aparecer. La cúpula del Ejército, que llevó a cabo su diplomacia propia (violando un principio operativo fundamental de la política exterior nacional que es la unidad de criterios), se asoció de la manera más notoria con el corrupto y desprestigiado gobierno de García Meza, comprometido directamente con el tráfico de drogas. Ese gobierno fue respaldado, incluso, con el insólito otorgamiento de créditos liquidados por valor de 250 millones de dólares no atados a ningún destino y de cobro altamente improbable, lo cual ha granjeado profundo resentimiento en amplios sectores del pueblo boliviano.

En América Central, aparte de las raíces últimas del problema que vive esa región que no puede desligarse del subdesarrollo, se ha venido practicando una activa injerencia militar por parte de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de Cuba, así como de otros países que responden así a los intereses de las grandes potencias o de sectores internos de poder en ellas. En los últimos tiempos, el gobierno militar argentino tuvo una desdichada interferencia en los asuntos internos de El Salvador y de Nicaragua. La participación de efectivos militares argentinos en operaciones encubiertas se ha constituido en uno de los más

grandes abusos practicados por sectores oficiales a espaldas del pueblo argentino y, a veces, del propio gobierno.

Pero en los dos temas donde la política exterior argentina se aparta más de la defensa correcta del interés nacional y que más graves consecuencias han provocado, es en las islas Malvinas y en el manejo del litigio fronterizo con la república de Chile por el canal de Beagle.

1. *Malvinas: "una huida hacia adelante"*

A fines de 1981 el proceso militar se había agotado como posibilidad de servir de cauce a la transformación revolucionaria que el país requiere. La Multipartidaria constituida seis meses atrás daba a conocer —tras una laboriosa compulsa de las aspiraciones y reclamos de toda la comunidad— su propuesta titulada **Antes que sea demasiado tarde**. En la cúspide del Estado y la cúpula de la Fuerzas Armadas el agotamiento acelerado del proceso obligaba a cambios de guardia. El general Galtieri reemplazó al general Viola en la Presidencia. Acababa de hacer una gira por los Estados Unidos donde ciertos sectores lo aclamaron como el hombre capaz de recomponer las difíciles relaciones entre ambos países. En la Argentina comenzó una campaña de prensa que mencionaba con insistencia la necesidad de recuperar por la fuerza las islas Malvinas del dominio inglés. El argumento predilecto fue que ese paso era necesario para garantizar la seguridad de Occidente que Gran Bretaña, potencia en franca decadencia, no podía asegurar. Hay que ocupar las islas, proclamaba esa campaña, gesto que se hará sin costo alguno, y ofrecer a los Estados Unidos compartir ese esfuerzo instalando una base militar en las islas que equilibre la amenaza soviética en la región.

Es imposible no relacionar esos acontecimientos con los intereses armamentistas que ya habían logrado colocar importantes partidas, en ocasión de la grave tensión internacional que casi llevó a la guerra con Chile a fines del año 1978. Conjurado el peligro por la decidida intervención pacificadora del Papa, con el envío del cardenal Samoré que abrió la instancia de la mediación, el frente malvinense fue una excelente oportunidad que los traficantes de la muerte no estaban dispuestos a desper-

diciar. Aún cuando para ello hubiera que ungir generales "majestuosos".

Esos intereses encontraban terreno fértil en la desorientación de la cúpula militar ante el evidente fracaso del modelo económico y social aplicado desde 1976, y en un cuadro de repudio generalizado a esa política. Las protestas sociales, sofocadas durante los primeros años del gobierno por la acción del fuerte aparato represivo desplegado para combatir la subversión (y aprovechado por la conducción económica para imponer su política), en 1981 ya estaban generalizadas. La dirigencia gremial seguía sin organizar movilizaciones específicas de lucha sindical, pero actuaba en la agitación callejera. El cuadro de situación era crecientemente complejo para el gobierno, decidido como estaba a no modificar un ápice de la esencia del modelo antinacional.

En esas condiciones se decidió realizar el operativo militar en las islas Malvinas. Lo que no podía sino regresar al patrimonio argentino por la vía de la negociación —puesto que poseemos títulos jurídicos inobjectables— fue tomado por la fuerza. La violación de las normas del derecho internacional cuestionó la legitimidad de los propios derechos. La sanción no se hizo esperar, con la condena a la actitud argentina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el plano interno, el verdadero destinatario de la decisión tomada, se puso en marcha el dispositivo de manipulación de la opinión pública más alevoso que se hubiera practicado en el país. Junto a la euforia que se volcaba en las calles, estimulada por todos los medios, no se manifestó una sola opinión discordante, salvo la nuestra. Algún dirigente, más prudente, guardó silencio, el resto de la dirigencia política y social negó alegremente su condición de orientador de las bases y se plegó irreflexivamente a la acción gubernamental. El núcleo de la vida política argentina y el consenso, a juzgar por las apariencias, estaba en la Presidencia y en el Ministerio del Interior.

Los desarrollistas asumimos, como invariablemente lo hacemos, toda la responsabilidad de actuar de acuerdo con los principios y resguardar, cualesquiera fueren los riesgos, los intereses de la Nación. Como correspondía, planteamos el debate en el se-

no de la Multipartidaria proponiendo que el nucleamiento hiciese un pronunciamiento crítico; iniciativa que no fue asumida por el resto de la dirigencia política. Estábamos dispuestos, incluso, a hacer las concesiones que hiciese falta, para permitir un pronunciamiento mayoritario sobre el tema, que debía rescatar lo esencial del cuestionamiento a la decisión del gobierno. Pero no lo logramos. La dirigencia de los demás partidos de la Multipartidaria no advertía el error cometido o no estaba dispuesta a exponerse a las represalias que el manejo totalitario de la cuestión hacía posible. Finalmente, cuando era evidente que el país entero marchaba hacia un callejón sin salida, decidimos hacer pública nuestra posición en un fundado documento. Hasta entonces habíamos manifestado reservas y críticas, en pronunciamientos individuales de los dirigentes; pero nuestra posición —que era una desde el primer momento— no había sido expuesta orgánicamente. Con el presidente del MID, el doctor Arturo Frondizi, y otros miembros de la conducción nacional desarrollista, publicamos nuestra posición antes de que comenzaran los combates. Esa pieza histórica merece ser recordada. Incluía, además del juicio crítico, una propuesta para enfrentar la crisis, que la euforia y la propaganda guardaban y encubrían. Cabe señalar que sus términos resultaban totalmente contrarios a lo que en un coro unánime repetían dirigentes y comentaristas. Pese a la prudencia de la formulación escrita —que sin embargo no elude definiciones precisas en todos los aspectos fundamentales de la cuestión— fuimos tratados públicamente de traidores a la patria. Defendimos sin titubéos el derecho democrático a exponer nuestro punto de vista sobre la conducción del Estado y las decisiones políticas estratégicas que en ella se estaban tomando y nuestra crítica no dejó lugar a dudas.

a) Documento del 22 de abril de 1982

"La Argentina vivió momentos de euforia con motivo de la recuperación física de las Malvinas, explicable tanto porque esa tierra hasta entonces irredenta es muy cara al espíritu nacional como porque para todo pueblo el sabor a victoria es dulce después de un largo periodo de frustraciones. Hoy el legítimo senti-

miento en favor de lo que es nuestro ocupa su lugar junto a la reflexión.

Sería absurdo suponer que en la Argentina hay quienes no apoyen la recuperación de las Malvinas. Pero así como la apoyamos queremos distinguir entre la acción de las Fuerzas Armadas, teñida ya de coraje y de sangre, respecto de la decisión política del gobierno que puso en movimiento esa acción. Todo el pueblo está y estará con sus soldados, pero tiene derecho a conocer el curso de acción para lograr que el sacrificio en vidas y bienes no sea en vano. Es falso que cuando hay un conflicto internacional haya que callar las discrepancias con el gobierno, aun las que suscite ese mismo conflicto. Salvo una restringida esfera de secreto diplomático y militar el país debe tener información genuina y debatir sobre cómo lograr que nuestros soldados y diplomáticos tengan éxito; sólo con la participación amplia del pueblo habrá una unidad real que trascienda la retórica.

- Los interrogantes fundamentales

Nuestras reservas iniciales se han acentuado con los hechos que sucedieron al entusiasmo inicial. Hay interrogantes cuyo solo planteo esclarece aspectos de la decisión política tomada para poner en marcha el operativo y conducir las negociaciones diplomáticas, y que si el gobierno no se las planteó a sí mismo es preciso hacerlo ahora, para que encontremos el mejor camino. ¿Se evaluó la relación de fuerzas internacionales, no sólo militares sino políticas y diplomáticas? ¿Se evaluaron las consecuencias económico-sociales del conflicto, no sólo en costo operativo sino en orden a las represalias y medidas de diversos países? ¿Se consideró el efecto debilitante en la posición del país de la crisis económica en la que ya nos encontrábamos? ¿Se reflexionó sobre los riesgos de romper la coherencia entre la posición estratégica del país en el campo occidental y la táctica respecto del conflicto particular que nos involucra? ¿No se tuvo en cuenta que hay argentinos que piensan que la soberanía territorial tiene el contrapeso de una creciente pérdida de nuestra soberanía eco-

nómica y política en virtud del programa que está en aplicación desde 1976?

No practicamos la política de esperar compensaciones por apoyo a lo que coincidimos por principios, como la soberanía sobre las Malvinas, y tampoco la de callar nuestros puntos de vista cuando estamos persuadidos de que ellos pueden contribuir a afirmar la posición del país en este trance. No creemos que haya tiempo para postergar esas cuestiones, cuando nuestros soldados están sometidos a riesgos y cuando nuestros obreros, nuestros empresarios y nuestros profesionales deberán sufrir aún mayores quebrantos. Esclarecer esas cuestiones es indispensable para respaldar la acción de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra diplomacia, esto es para la reconstrucción política y económica durante una etapa que aun cuando desde ahora no se dispare un solo tiro será de guerra y de posguerra.

- Nuestra postura internacional

Una cuestión de la política internacional que cabe subrayar es la que, dado el paso, se actúe preservando la dignidad nacional, pero sin que nuestros actos estén dictados por consideraciones de política interna o por una inadecuada evaluación de las relaciones de fuerza que operan en el conflicto. Un manejo del conflicto que se aparte de esas premisas puede tener un desenlace gravoso para esa dignidad y para el futuro del conjunto de la comunidad. El pueblo apoya la recuperación de las islas pero no apoya cualquier curso de acción. En la euforia de Plaza de Mayo supo distinguir entre la soberanía nacional y los funcionarios de turno. El perfeccionamiento del acto posesorio realizado dependerá de la relación de fuerzas que el gobierno debe evaluar con objetividad.

Siguiendo en el manejo internacional del conflicto cabe reiterar que la Argentina no puede tener una actitud incoherente con las líneas estratégicas de toda su política exterior. Nosotros en su momento fuimos injustamente cuestionados porque comprobamos el hecho del fin de la "guerra fría" y actuamos en función de los intereses nacionales con todo el mundo, sin subordinarlos a las ideologías. Pero hay límites que, pese a los cambios mundiales advertidos por nosotros hace un cuarto de

siglo, no pueden ser impunemente traspuestos. Nuestra inserción en el campo occidental es la resultante de una compleja gama de factores geográficos y políticos y salir de él por la contingencia del conflicto sería errar en la evaluación del esquema de alianzas que jugarán en favor y en contra de la Argentina. Sería, sin duda, desfavorable para la Argentina; y, por lo demás, si se llegara al extremo de una "mundialización" del litigio, a una intervención de las superpotencias, las consecuencias serían imprevisibles.

- Política interna para fortalecer al país

En torno de los problemas internos nuestra propuesta está implícita en lo ya dicho. Se trata de normalizar sin demora la actividad política y gremial. No como un negocio entre funcionarios y dirigentes sino como una exigencia del debate democrático, de la participación genuina para que la unidad del frente interno sea real y no formal. Un debate que deberá abarcar con la cuestión de las Malvinas el conjunto de la política de fondo donde se juega el destino de la Nación.

Aquí llegamos al aspecto central de la política económico-social donde el gobierno ha hecho exactamente lo opuesto a lo que imponen los acontecimientos. Librar una lucha contra el colonialismo inglés, que además de la usurpación de las islas ha expoliado durante mucho tiempo nuestra riqueza, es un objetivo convocante. Pero no puede soslayarse el dato de que, aun siendo un colonialismo decadente, en la contingencia del conflicto no está solo y de todos modos ninguna nación puede dar respaldo a sus soldados y sus diplomáticos con una economía postrada. Y ésa es la situación de la economía argentina como consecuencia de la política que se viene aplicando desde 1976 a la fecha. Cuando se cerraban fábricas en beneficio de la importación y de la especulación financiera, se estaba trabajando para el enemigo; y hoy duele escuchar a quienes engolan la voz en defensa de la soberanía y sostienen un modelo económico para el cual es indiferente producir caramelos o acero.

Estamos librando batallas diplomáticas y quizá, aunque no es deseable, debemos librarlas en el terreno militar con un aparato

productivo deteriorado. El ingreso por habitante en 1981 cayó al nivel de 1970, y según las estimaciones, en el primer trimestre de 1982 caerá un tres o un cuatro por ciento respecto de los deprimidos niveles del año anterior. El nivel de desocupación, sumando desocupados y el equivalente en subocupados, afecta a 1.900.000 argentinos, esto es, una explosiva tasa de desempleo del 17 por ciento de la población económicamente activa. En medio del conflicto y ante la insensibilidad de la conducción económica llegaron a pagarse tasas de interés del 15 por ciento mensual, preanunciando el crack financiero que sucederá al ya postrado sector de la producción. Ese brutal castigo tiene lugar sin que se haya hecho efectivo el control del déficit estatal y sin disminuir la inflación de los niveles más altos del mundo. El empobrecimiento del país se traduce en una deuda externa que se ha cuadruplicado en seis años, llegando a los 34 mil millones de dólares y obligando a pagar anualmente en solo concepto de intereses una cifra igual a la mitad de todas nuestras exportaciones. La vulnerabilidad económica del país no puede ser mayor.

Cambiar la política que nos ha llevado a esa situación es la única manera de dar respaldo eficaz a nuestros soldados y a nuestros diplomáticos. No cambios instrumentales, de adaptación del mismo esquema a la contingencia del conflicto, sino cambios de fondo, de 180 grados. El conflicto dramatiza y hace insoslayable la adopción de una política que el país agobiado por la crisis reclamaba antes desde todos sus sectores.

- Nuestro aporte programático

A nuestro juicio lo esencial del programa que se impone para la emergencia es liquidar los artificios monetaristas y concentrar los esfuerzos en movilizar el aparato productivo. A ello deben subordinarse con energía todos los instrumentos, el esquema financiero en primer término. No es posible continuar con las actuales tasas y con el aumento de los pasivos de las empresas productoras hasta niveles absurdos. Corresponde cortar de un tajo esa situación alucinante que en teoría podría determinar el traspaso de la mayor parte de los bienes de producción existente a

las entidades financieras. Eso no debe ocurrir y hay que adoptar las medidas de saneamiento de los pasivos que impone la emergencia en que nos encontramos. La política cambiaria, al margen de las medidas necesarias para la contingencia del conflicto y que deben impedir la salida de toda divisa que no sea para importaciones imprescindibles, tiene que diseñarse con un tipo de cambio adecuado para desvincular la tasa de interés de los movimientos en el precio de las divisas, para que de manera articulada con la protección arancelaria promuevan la expansión del aparato productivo y otorguen un "colchón" operativo al conjunto del plan. Los precios y tarifas deben sincerarse de manera correlativa a fin de no frenar el proceso de formación de capital. Los salarios deben actualizarse conforme a la realidad económica, deben estar en un nivel adecuado a una economía que deberá apoyarse en la expansión del mercado interno de consumo y no ser utilizados como variable de ajuste de la demanda y del índice de precios, tal como se hace actualmente creando descenso brutal del nivel de vida y a la vez acentuando la recesión.

El plan de emergencia no debe ser incongruente con los objetivos de largo plazo para superar la crisis y atacar la inflación en su causa, que es la insuficiencia de la estructura productiva y el déficit del sector público. La situación militar y diplomática no debe hacer abandonar ambos objetivos, porque está visto que hacerlo ni siquiera posterga los problemas, sino que agudiza a la vez la inflación y la recesión. La clave es la simultaneidad entre la movilización de la riqueza y la reducción del gasto público. Esas dos cuestiones esenciales tienen que ser encaradas simultáneamente, ya que si no se redimensiona el aparato estatal no podrá disminuirse la carga tributaria, bajarse la tasa de interés y en general restaurarse el proceso de inversión, ya que sin expansión de la inversión privada ésta no podrá absorber el desempleo. Encarar a fondo la crisis, poner en pie el aparato productivo, era antes del 2 de abril una exigencia de la sobrevivencia de la Nación. Hoy lo es con mayor razón. Lo es porque constituye un requisito de la unidad nacional, ya que, con una economía que se disgrega la unidad nacional carece de contenido y de sustento. En esas condiciones la unidad es una aspira-

ción pero no un hecho, la cuestionan los conflictos de intereses internos y la vulnerabilidad frente a los factores externos.

Sabemos que éste no es un programa fácil, pero sabemos que es el único y que continuar con la actual política o con variantes del mismo esquema nos lleva ineluctablemente al desastre. A partir de su puesta en práctica tendremos otra dimensión del problema porque el país estará en pie y confiado. El gobierno debe encarar todo el cambio de orientación que aquí se propone persuadido de que el pueblo, y entre él nosotros, no pretenderá sacar ventajas subalternas de esa necesaria rectificación. Nadie haría un manejo políticamente interesado de las negociaciones y concesiones que seguramente habrá que hacer en un litigio complicado y difícil. El marco político totalmente nuevo que se creará con un golpe de timón como el que proponemos hará que la afirmación de nuestra soberanía tenga un respaldo más firme y activo del que hoy existe más allá de la propaganda oficial y generará una energía nacional apta para que abordemos todas las contingencias del conflicto y la ardua etapa que luego sobrevendrá".

Retaceada su difusión en la prensa y anatematizados por haber osado criticar lo que aparecía como el punto más alto del patriotismo, nos vimos obligados a publicar como solicitada el texto completo de este documento. Muchos argentinos ya habían comenzado a reflexionar en torno de la dirección que tomaban los acontecimientos, en los cuales habían sido involucrados sin consulta previa. Imposibilitados de expresarse en forma orgánica porque las estructuras políticas y sociales estaban, por obra de sus cúpulas, plegadas a la estrategia del gobierno, vieron en la postura del desarrollismo lo que era: un acto de consecuentes defensa de los principios.

Lo que siguió está fresco todavía en la memoria de todos. Mientras los enfrentamientos bélicos mostraron sistemáticamente la superioridad de fuerzas del adversario y el arrojo y la valentía —tanto más conmovedores cuanto inútiles— de nuestros aviadores y nuestros soldados, la información oficial y la acción psicológica (en realidad nunca se diferenciaron) se ocuparon de confundir aún más a quienes, habiendo compartido a posteriori el paso dado, no tuvieron alternativa para examinar se-

renamente el asunto, distinguir entre la legitimidad de nuestros derechos sobre las islas y la errónea vía elegida para recuperarlas. La derrota, previsible desde el primer momento, llegó el 14 de junio. Para muchos fue como despertar de un sueño. Hasta entonces creían en la necesaria victoria argentina. La frustración y la desesperación se instalaron en el corazón de no pocos compatriotas.

Decidimos exigir las responsabilidades correspondientes, empezando por la necesidad de dar una explicación cabal al país de la decisión tomada.

b) Documento del 15 de junio

“Los argentinos estamos viviendo un momento muy triste de la vida nacional, que exige una serie de actitudes de reconstrucción moral y material; que exige desprendimiento y abandono de todo espíritu de sector, pero también evitar el escapismo y la deformación de la verdad. En primer lugar cabe distinguir el heroísmo de nuestros combatientes y la vocación de sacrificio evidenciada por nuestro pueblo respecto a la conducción política del gobierno que nos llevó a este resultado tan gravoso para el país en vidas, en pérdidas materiales y en frustración del sentimiento popular.

En nuestro documento del 22 de abril, en una total soledad, formulamos esa distinción entre el plano político y el plano militar del conflicto, así como formulamos una serie de interrogantes cuya respuesta negativa han dado los hechos señalando que se evaluó incorrectamente la relación de fuerzas y se nos llevó a una guerra que no podía terminar sino como ha terminado. Hoy sigue siendo válida esa distinción, justamente porque necesitamos de la unidad nacional, y ella no puede asentarse sino en la verdad. Los que teniendo elementos de juicio evaluaron mal la situación; los que no consultaron debidamente al país sobre una cuestión tan trascendente; los que desinformaron a la población y fomentaron un triunfalismo que hoy alimenta la frustración tienen que asumir cabalmente su responsabilidad política. Para superar este momento difícil es preciso evitar que toda la Nación se sienta responsable, y para ello se requiere el

acto higiénico de que queden identificados quienes verdaderamente lo son.

Es obvio que no debemos resignar nuestros derechos sobre las islas Malvinas, que son y serán argentinas; pero no es admisible que el gobierno, al margen de la voluntad popular, haya dicho que la guerra continúa en un postrer intento de ocultar su responsabilidad. La decisión sobre la guerra y sobre la paz concierne a toda la Nación y no puede ser adoptada al margen de su voluntad legítimamente expresada. Su Santidad Juan Pablo II dejó un mensaje que los argentinos debemos aprovechar sin deformaciones, necesitamos de la paz para reconstruir la Nación en todos sus aspectos e incluso para algún día reivindicar con éxito las islas irredentas.

Se trata ahora de pensar el futuro y comenzar a trabajar por él. Es un compromiso con nuestros muertos y con las víctimas de la guerra, y con la juventud que ha entregado sus esperanzas y en muchos casos su vida. Es preciso buscar la coincidencia programática —no sólo retórica— entre todos los sectores sociales y políticos, incluyendo militares y civiles, no como partes separadas sino como integrantes de una misma nación. Sólo un compromiso de esos alcances, asumido con honradez, nos abrirá el camino para superar la gravísima crisis que preexistía al 2 de abril y que ahora se ha acentuado, para asegurar pan y trabajo a todos los argentinos, para marchar rápidamente hacia una verdadera democracia y para dar cimientos sólidos a la grandeza nacional.”

c) Consecuencias: la situación militar

La decisión argentina de hacer valer su título con el recurso de la fuerza representó una violación poco meditada del sistema internacional instrumentado por la organización de las Naciones Unidas, que es la expresión jurídica del sistema de poder mundial que las potencias vencedoras de la última guerra mundial convinieron en los acuerdos de Yalta. En la medida en que el gobierno argentino, una vez cometido el error de apreciación inicial, no aprovechó ninguna de las líneas de retirada diplomática que hubieran permitido un replanteo conveniente de la situación, el consiguiente enfrentamiento militar con la OTAN

condujo a una derrota inevitable a pesar de los notables sacrificios y demostraciones de pericia y valor personal de muchos soldados argentinos.

La consecuencia fundamental de la derrota fue la modificación de las condiciones de seguridad en el Atlántico Sur, a partir de la instalación en las islas Malvinas de una poderosa fuerza militar británica en condiciones no sólo de defender el archipiélago sino, también, de atacar el continente. Por primera vez en el transcurso del siglo XX el cuadro de seguridad nacional tiene que incluir el factor amenazador de la presencia hostil de una potencia nuclear a pocas millas de nuestro territorio.

Esta situación ocurre en un cuadro de rompimiento de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, de reparación difícil en el corto plazo. La nueva situación involucra la posibilidad de que sobrevengan hechos muy peligrosos para los intereses argentinos. Uno de ellos se produjo ya, poco después de producida la rendición de nuestras tropas en las islas, con el desalojo por parte de los ingleses de la base científica Corbeta Uruguay, establecida desde hacía unos años en la isla Thule, del archipiélago Sandwich del Sur. Desde 1965 las negociaciones con el Reino Unido incluyeron siempre los otros dos archipiélagos. Existen indicios ahora de un interés británico acentuado, por las islas Georgias. Además el respaldo internacional que ha obtenido la Argentina para instar a negociaciones con el Reino Unido se refiere solamente a las islas Malvinas, tanto en la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como en la que sancionó la Reunión de Consulta de Cancilleres americanos, dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Durante la guerra de las Malvinas, el gobierno británico procedió a declarar una llamada Zona de Exclusión, hasta 150 millas en torno del archipiélago, con fines específicamente militares, mientras montaba el bloqueo previo al ataque. Existe ahora el riesgo, no sólo teórico, de que en los programas de expansión económica planeados para el futuro de las islas, el Reino Unido resuelva la declaración de una zona de Explotación Económica Exclusiva de 200 millas en torno de los tres archipiélagos. Una decisión de esta naturaleza, aparte del im-

pacto que provocaría por sí misma, llevaría a un conflicto sobre la proyección de las doscientas millas argentinas desde la costa de la Patagonia y de las islas de los Estados. Teniendo en cuenta las actividades potenciales de pesca y las actuales tareas y programas de exploración y explotación petrolera y gasífera existentes en la zona adyacente de la plataforma continental, la eventual pretensión británica podría dar lugar a un nuevo agravamiento del conflicto; en el momento escogido por el gobierno de Londres. Puede agregarse a esta hipótesis la que prevea posibles gestiones británicas para conseguir la instalación de una línea aérea comercial que una las islas con algún aeropuerto sudamericano en Chile, Uruguay o Brasil.

Estas reflexiones son algunos de los elementos que pueden oponerse a la discutible tesis, según la cual la posición argentina mejoró luego del episodio militar del año pasado. La circunstancia de que el conflicto Malvinas sea hoy universalmente conocido no significa que nuestra posición negociadora haya mejorado. Esto no implica, desde luego, ningún debilitamiento del título jurídico argentino sobre sus islas. Importa, si, tener en cuenta que ese título deberá hacerse valer en el futuro del cuadro global de seguridad del Atlántico Sur, con la previsible participación de todos los países que tienen peso decisivo en la temática de la seguridad atlántica.

La relación de fuerzas militares puede resumirse en el dato que, desde la derrota en las islas Malvinas, se ha modificado profundamente el equilibrio en el Cono Sur. La tradicional gravitación argentina en la zona se ha visto menguada considerablemente como resultado de la base militar británica instalada en las islas y por el hecho de que el litigio por el Beagle permanece abierto.

2. Beagle, la amenaza a la paz

Esa íntima vinculación existente entre la cuestión de las islas Malvinas y los conflictos fronterizos con Chile, se ha acentuado luego del nuevo cuadro de situación militar.

Dentro de los diferendos con Chile cobra especial relieve el caso Beagle por razones de cercanía geográfica y la posibilidad

teórica de que en aquella región deba enfrentar el país dos eventuales riesgos de guerra.

El caso Beagle ha llegado a un punto de maduración que descarta toda posibilidad de un planteamiento nuevo, como podría haber sido su inclusión en un programa de demarcación total y acelerada de la frontera. La capacidad relativa de negociación de la Argentina ha disminuido por el simple hecho de que ya ni siquiera cabe como hipótesis el recurso a la fuerza armada frente al país vecino, en el supuesto que tal recurso hubiera sido antes moral y políticamente sustentable. Esto no excluye, por cierto, la posibilidad de una nueva aventura militar, un golpe ciego destinado a producir efectos en el cuadro de situación política interna. En realidad, la exclusión de la hipótesis militar abre la perspectiva de la aventura. Lo que cierra el camino del análisis y la planificación equilibrada de la política exterior, lo destapa la falta de alternativas en que el régimen aparece crecientemente encerrado. Es verdad que la perspectiva electoral en cierto sentido excluye esa posibilidad, pero no es menos cierto que existen elementos que pueden precipitar la interrupción del proceso hacia el comicio, y que entre ellos un enfrentamiento con Chile puede suministrar los pretextos necesarios. La propuesta papal se presenta hoy como un marco aceptable para el país, no sólo porque otras variantes, como sería la elevación del caso a la Corte Internacional de Justicia, son más desfavorables, sino porque la solución arbitrada por el Vaticano es, en sí misma, conveniente.

La propuesta del agosto mediador mejora sustancialmente el laudo arbitral rechazado por la Argentina. Al delimitar las jurisdicciones oceánicas por el meridiano del cabo de Hornos crea la forma práctica de aplicación del principio de bioceanidad que estaba consagrado en los acuerdos firmados con Chile a principios de siglo. Es evidente que el principio bioceánico es de imposible aplicación mecánica a la delimitación geográfica, con sólo mirar el mapa de la zona. La costa oriental de la isla Navarino baña sus playas y rocas en el Océano Atlántico y, sin embargo —desde el Tratado de 1881—, hemos reconocido que es chilena. Esa isla está al sur del canal de Beagle. Puerto Williams es una base chilena y nadie discute la posesión pacífica e inin-

terruptida de la isla por parte de nuestros vecinos. El principio bioceánico se aplica en el sentido que le dan los pactos firmados en 1902, a saber la "defensa natural y el destino permanente" de la Argentina en el Atlántico. Ello es confirmado por la propuesta papal.

Al mismo tiempo, la propuesta establece límites claros en la extensión hacia el este de la jurisdicción chilena, y por otra parte, la presencia argentina queda garantizada en islas e islotes donde nunca existió antes (autoriza a instalar una baliza permanente en Barnevelt y Evout, que por encontrarse al sur del canal de Beagle pertenecen a Chile desde 1881, lo cual beneficia directamente a la Argentina). A todo esto cabe agregar una consolidación sustancial de los derechos de navegación de nuestro país en la zona, inclusive al este del meridiano del cabo de Hornos en los canales fueguinos.

La proyección antártica, asunto al que nos referiremos luego, también queda preservada con la fórmula propuesta por la mediación papal.

Lo que está en cuestión con Chile no es si existen o no tierras bajo soberanía chilena al este del meridiano de Hornos, sino si quedará trazada una frontera que contenga la proyección chilena sobre el océano Atlántico. A ello el documento papal agrega la delimitación de jurisdicciones marítimas en el meridiano de Hornos; lo que, en rigor de verdad, jamás había sido considerado un objetivo de cumplimiento factible por parte de la diplomacia argentina. Resulta, pues, indispensable que la discusión en torno del conflicto del Beagle sea despojada de los elementos de confusión que difunden sectores interesados en crear focos de tensión.

La razón fundamental por la cual la Argentina debe aceptar la propuesta papal es que se trata del camino que le permite eliminar definitivamente el pretexto que decide políticas armamentistas. La experiencia de una guerra perdida tiene que ser, de ahora en más, definitiva. Sólo caben en el futuro actitudes defensivas, todo lo enérgicas y eficaces que correspondan, pero que dejen claramente excluida para la Argentina la posibilidad de país agresor.

El papel positivo que pueden asumir en todo esto las institu-

ciones representativas es muy importante. La Armada argentina, por ejemplo, debe señalar al país que siempre propició la navegación por aguas propias en el canal de Beagle, así como también lo ha hecho para obtener un régimen adecuado de navegación en los canales fueguinos; lo cual, como hemos visto, está contemplado en la propuesta. Con esto —tomando los elementos positivos de las gestiones anteriores— se contrarresta la activa propaganda que se realiza en estos días para que la cuestión del Beagle sea postergada y quede sin solución.

Hay que defender la mediación no sólo porque nos beneficia, sino porque si cesa no existe alternativa que pueda sernos tan favorable. Y, por último, debemos señalar que la mediación asegura un marco dentro del cual es todavía posible negociar y mejorar algunas proposiciones, adecuándolas al terreno práctico y precisándolas, para que sirvan como clara y definitiva solución.

Argentina y Chile tienen mucho más que ganar de la cooperación y la convivencia fructífera que del conflicto. Para lograrlo es imprescindible encauzarlo por la vía del desarrollo, lo cual supone poner todas las energías de la comunidad en ese tránsito cualitativo. Necesitan arbitrar un mecanismo de solución pacífica para el resto de los potenciales diferendos limítrofes subsistentes, que no son pocos. El tramo por demarcar en la frontera continental es extenso y existe la certeza de que habrá diferencias de criterio en varios puntos, algunas de ellas importantes. Cometido el error de no haber englobado todos los casos en una sola negociación, lo que hubiera dado márgenes de maniobra a las partes, es indispensable prevenir la reiteración de situaciones como la que nos llevó al borde de la guerra, con un país cuya amistad es primera prioridad para la diplomacia argentina.

La política en la Antártida ofrece uno de los campos más promisorios de cooperación entre Buenos Aires y Santiago. Aunque las reivindicaciones territoriales de ambos países en el Continente Antártico sean parcialmente conflictivas, en la parte que no lo son permiten un reconocimiento mutuo, único por otra parte con el que cuentan Argentina y Chile. Es muy claro además que la principal oposición que enfrentan ambos países a sus pretensiones de soberanía provienen de los Estados Unidos

y la Unión Soviética que niegan perentoriamente estos reclamos, así como del conjunto de los países que integran el Movimiento de los No Alineados, en los cuales predomina la tendencia de que el gran continente polar debe ser declarado patrimonio común de la humanidad.

El Tratado Antártico constituyó una de las más difíciles negociaciones diplomáticas que debió enfrentar la Argentina, en condiciones sumamente precarias, pero que fueron suficientes para conseguir la declaración de la primera zona desnuclearizada del planeta y poner freno a las fuertes pretensiones de internacionalización de la vasta región. Fue la primera gestión diplomática, luego de la guerra fría, para entonces aún no disipada, en la cual coincidieron Washington y Moscú. En 1992 venció el plazo de vigencia; hasta entonces la Argentina deberá definir una posición diplomática realista que asegure al país la posición privilegiada que sea posible en un área sobre la cual tiene ganados títulos históricos y científicos de valor indiscutible.

3. La política exterior hacia América Latina

Las relaciones con los países limítrofes son un capítulo de la relación de la Argentina con América Latina. La importancia de esa relación se ha acentuado, aunque no por las razones que aducen aquellos superficiales observadores que necesitaron la guerra de las Malvinas para descubrir que la Argentina formaba parte de Latinoamérica. Esa importancia acrecentada resulta de la intensificación de las relaciones comerciales y financieras dentro del área, así como de la gran complicación de su actual cuadro político.

a) Relaciones con nuestros vecinos

Las relaciones con los países vecinos pasan por una etapa sin conflictos, exceptuando el ya mencionado con Chile centrado en el Beagle.

Las relaciones con el Brasil, que revisten gran importancia para la Argentina, plantean ahora diversas dificultades, luego de resolverse el largo conflicto sobre los aprovechamientos hidroeléctricos en el río Paraná. La diferencia —enorme— con

nuestro vecino está dada por el hecho de que, mientras éste avanza aceleradamente en esos aprovechamientos, la Argentina permanece estancada sin haber podido ni siquiera progresar sustancialmente en Yaciretá, obra binacional cuyo retraso costará caro al país en materia de insuficiencia de generación eléctrica. El conflicto con Brasil no era un mero diferendo de naturaleza técnica. Más bien envolvía un problema de fronteras o de influencias sobre ellas que se arrastra desde los tiempos de la colonia y el imperio portugués. La solución negociada en el campo técnico sirvió para mejorar el clima político al punto que Brasil representa hoy los intereses argentinos en Gran Bretaña, luego de la crisis de las Malvinas; pero la penetración sociocultural brasileña está lejos de haberse disipado por la firma de acuerdos diplomáticos, puesto que depende del mayor dinamismo y crecimiento relativo que tienen uno y otro país a ambos lados de la frontera. No basta con tener buena diplomacia, hace falta tener detrás de ella un país poderoso, y eso es lo que lamentablemente falta aún en la relación con Brasil. La prueba está en que el momento —nunca después superado— en que mejor relación tuvimos con ese país fue cuando el acuerdo de Uruguayana (Abril de 1961). En esa circunstancia el dato fundamental estaba dado por una muy pujante situación argentina como resultado del proceso de desarrollo promovido por el gobierno del doctor Frondizi. El Acuerdo Tripartito de 1979 permitió al Paraguay una opción diplomática que puso freno a su creciente tendencia a incorporarse en el sistema brasileño, desenvuelta aceleradamente al compás del crecimiento del Brasil y el estancamiento de la Argentina.

Sin embargo, conviene observar que este momento carente de conflictos abiertos en la relación argentino-brasileña es por naturaleza transitorio si no se modifican las condiciones objetivas. La Argentina dispone de un papel firmado por los otros dos países; Brasil, en cambio, ha terminado la represa de Itaipú. El equilibrio sólo puede ser restablecido por la Argentina con la construcción de Yaciretá y de Corpus, si es que se quiere mantener el balance geopolítico y geoeconómico en la región donde se presentan diversos problemas de seguridad.

En el caso de la política practicada con Uruguay y Paraguay

vale observar cómo inciden en las relaciones bilaterales la seriedad y continuidad en la ejecución de los programas acordados. (Es obvio que esa continuidad depende también del grado y del ritmo del desarrollo.) Por un lado, los puentes sobre el río Uruguay y la gran obra de Salto Grande han creado armonía en la relación argentino-uruguaya, en la cual se registran muy pocas áreas problemáticas. Pese a que compartimos con nuestro vecino oriental muchas dificultades derivadas del subdesarrollo y, en particular, del predominio de las exportaciones de origen agropecuario, ellas no se han volcado de manera manifiesta al conflicto entre ambos países. El caso opuesto es la relación con el Paraguay. Las dilaciones e incongruencias en la política seguida en la construcción de la represa de Yaciretá y el contraste de ellas con la realización acelerada de Itaipú han llevado a un nivel muy bajo las relaciones de la Argentina con el Paraguay. Los proyectos bilaterales han tenido ritmo muy lento, y la brecha entre los compromisos asumidos y las realizaciones concretas se ha ido agrandando. Aunque la relación con Paraguay —país con el cual subsisten asuntos concretos de demarcación fronteriza— tiene varios capítulos complejos, su suerte quedará atada en lo futuro, en lo fundamental, a la manera como se realice la gran obra de Yaciretá. Esto también condicionará el tratado bilateral todavía no negociado y potencialmente complejo, que tendrá por objeto la construcción de la represa de Corpus. Es evidente la relación que existe entre diplomacia exitosa y desarrollo acelerado.

Ya mencionamos los errores cometidos con Bolivia al comienzo de este capítulo. Vale la pena señalar también la existencia de un contrato para la compra de gas boliviano que se proyecta por toda la década y que estipula la adquisición de seis millones y medio de metros cúbicos diarios, cantidad paradójicamente inferior al gas argentino que cada día se pierde en la atmósfera (entre ocho y diez millones de metros cúbicos) por falta de infraestructura para aprovecharlo y de aparato industrial para transformarlo en los diversos productos petroquímicos. La Argentina prosigue la titánica obra que significa la construcción del ferrocarril de Santa Cruz de la Sierra a Trinidad que, cuando concluya, habrá llevado el ramal a la Amazonia boliviana, a mil

kilómetros de nuestra frontera. Las relaciones con Bolivia, de alto interés por razones de seguridad y de carácter político y económico, requieren un replanteo profundo que establezca un orden de prioridades dictado por la racionalidad, de modo que se corrija la situación según la cual se han asignado cuantiosos recursos que no han sido empleados hasta ahora en objetivos que respondan al mutuo interés.

En todos los casos mencionados, y también en lo que hace a la relación con Chile —para la cual es imperioso terminar el litigio por el Beagle—, es evidente el peso decisivo que tiene en las relaciones bilaterales de cada país limítrofe con la Argentina la falta de un desarrollo acelerado con base en las industrias básicas, capaz de transformar la actual estructura en breve plazo y de expandir los impulsos de crecimiento a todo el territorio nacional. Las cuestiones fronterizas y las relaciones de país a país ganan en riqueza y pierden en sus aspectos conflictivos cuando lo que hay para compartir es mucho y creciente. Por el contrario, sólo países en retroceso pueden hacer de un problema menor un asunto de choque y enfrentamiento.

Y existe además la razón adicional de que el desarrollo —cuando es integrado, es decir, cuando asume carácter nacional— resulta contagioso. Lo mejor que puede ocurrir a los países del Cono Sur es que la Argentina encare decididamente su transformación económica y social.

b) Los otros países de América Latina

En Latinoamérica prevalecen en este momento variadas corrientes de orientación política e ideológica. El pluralismo es la característica generalizada. Ha desaparecido la posibilidad de mantener un continente alineado automáticamente detrás de los puntos de vista del Departamento de Estado. Cuba, aunque ha acentuado su dependencia de la Unión Soviética (proceso que, sin embargo, debería empezar a encontrar sus límites), tiene un lugar que se ha consolidado en la región. La influencia cubana se extiende sobre Nicaragua, Grenada y Surinam. Las relaciones de La Habana con México han soportado cualquier tipo de pruebas, inclusive la última producida por la necesidad

mexicana de encontrar respaldo en Estados Unidos para afrontar su grave crisis financiera.

La diversidad de situaciones nacionales —bajo el común denominador del subdesarrollo— se muestra como un mosaico cuando se analizan las políticas que se practican; desde el extremo introducido por Belice —que sigue la política del Commonwealth— pasando por todas las diferencias de matices que mantienen los miniestados del Caribe, hasta considerar la condición de países no-alineados de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. Venezuela se enfrenta al dilema, experimentado no sin contradicciones y tentaciones retóricas, de alcanzar la madurez diplomática que corresponde a su poderío económico.

Frente a ese cuadro la República Argentina se encuentra en la ventajosa situación de mantener relaciones diplomáticas con la totalidad de los países del área. Esto no ocurre con ningún otro Estado, ni siquiera Brasil, que no mantiene vínculos con Cuba; México, que no los tiene con Chile, o Venezuela, que los ha interrumpido con el Uruguay. En algunas situaciones, la diplomacia argentina deberá seguir manteniendo cuidadosa equidistancia, como en el caso del conflicto de límites entre el Perú y Ecuador, donde nuestro país tiene compromisos directos que derivan de sus buenas relaciones con ambos litigantes.

Pero la ventaja argentina de mantener relaciones con todos rendirá plenos frutos cuando esos canales puedan ser llenos del principal contenido que interesa al destino de cada país. La diplomacia es la forma política de una relación que debe concretarse en actos de naturaleza económica y cultural. El hecho de que el subdesarrollo sea el común denominador abre el camino hacia provechosas estrategias compartidas en favor de una cooperación que —lejos de afianzar la dependencia de los países periféricos del centro industrial— promueva en aquéllos la aplicación de políticas nacionales que los conduzcan a integrar sus estructuras productivas e insertarse en el mercado mundial como miembros plenos, dejando atrás su condición actual que los convierte en eternos perdedores.

La Argentina deberá manejarse con criterios políticos muy claros en sus relaciones con todos los países latinoamericanos, respetando a ultranza los principios básicos del derecho interna-

cional. Sólo así recuperará su prestigio. En el caso particular de América Central, esas precauciones deberán extremarse pues se trata de una zona especialmente conflictiva. Durante el gobierno del doctor Frondizi, nuestro país advirtió los graves riesgos que implicaba permitir la extensión a la región de los conflictos de la guerra fría. Nuestra diplomacia señaló entonces la necesidad de preservar el principio de no intervención como norma clave de conducta no sólo en defensa de los intereses de los países menores frente a las potencias más poderosas, sino en la prevención de la paz en la región, tanto en la relación estratégica de Estados Unidos y la Unión Soviética, como en la difusión de las tensiones revolucionarias y las actividades extremistas a los países de América Latina. Lo correcto de esas previsiones quedó demostrado tanto cuando se produjo la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, como durante la ofensiva de los terroristas de distinto signo que se desató en el continente durante la década del '60 y la siguiente, ofensiva todavía no terminada y que, por el contrario, amenaza desarrollar una nueva etapa. Tal como ocurre en Perú, Colombia, Nicaragua y El Salvador.

En América Central, la Argentina deberá corregir sus errores y diferenciarse nitidamente de la injerencia que practican Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, para poder ejercer una función positiva y activa en la promoción de la paz en el continente. Frente a los estragos producidos por una lucha que ha costado ya más de 100.000 vidas y que amenaza extenderse a toda América Central convirtiendo la región en uno de los más peligrosos puntos en la confrontación Este-Oeste, la Argentina deberá reafirmar su incondicional adhesión al principio de no intervención, individual o colectiva, en los asuntos internos o externos de cualquier Estado, así como su respaldo a la solución pacífica de los conflictos. La Argentina deberá prestar apoyo a todos los esfuerzos negociadores que se practiquen con el patrocinio de varios países latinoamericanos y ofrecer, inclusive, su propia experiencia durante la crisis de Cuba de 1962, en la que quedó en claro que la acción de varios países importantes de América Latina hacía posible la adopción de soluciones históricamente correctas.

Nunca han sido tan claras como ahora, al observar la si-

tuación de la paz en el mundo y las zonas de conflicto, la riqueza doctrinal y la verdad contenidas en los documentos papales que abordaron la cuestión. Que "el desarrollo es el nuevo nombre de la paz" lo certifica la dolorosa realidad cotidiana de muchos pueblos castigados por el flagelo de la guerra. Paulo VI nos benefició acuñando esa ajustadísima síntesis conceptual.

c) Ofensiva integracionista.

Una lectura ingenua de la realidad latinoamericana y los intentos de integración regional muestran las grandes dificultades que han debido enfrentar estos últimos al punto que podría pensarse que han fracasado en toda la línea. El Mercado Común Centroamericano naufragó en las tensiones inherentes al subdesarrollo de la zona y la consiguiente precariedad de la complementación propuesta. El Pacto Andino ha corrido una suerte semejante, luego de pasada la fase de entusiasmo político-retórico, orientada primero por el sesgo anticapitalista de la Resolución 24 y luego por el populismo propagado en esos países durante la década pasada. Ambas experiencias están agotadas y los países que las protagonizaron enfrentan una cruda realidad de economías nacionales desintegradas y la insalvable contradicción que tienen los intereses contrapuestos en la zona.

El caso de la ALALC tal vez sea el más elocuente en esa dirección de fracaso. Pero un análisis más ajustado de la experiencia que cumplió y de las mutaciones a las que arribó nos permite advertir cuál es el signo de los cambios ocurridos en la propuesta de integración supranacional y en los mecanismos para llevarla adelante.

La ALALC nació en un momento en que eran auspiciadas generosamente las zonas de libre comercio y los mercados comunes, precedidos por el éxito creciente que tenía en Europa el proyecto comunitario que empezaba a desenvolverse con gran firmeza a través del Mercado Común. En su momento, la ALALC se ofreció como un mecanismo útil para promover el comercio con los países del continente, en tanto se ofrecía como un sistema de preferencias de carácter regional. En este motivo se halla la razón básica de la adhesión argentina a la Alianza.

Quienes pensaban mecánicamente que el propio funcionamiento de la ALALC desembocaría en un mercado común, tal como lo anticipaban los documentos originales, se encontraron con que, luego de un aumento inicial del comercio recíproco entre los países de América Latina, la entidad supranacional así creada se estancó. (En el caso del Mercado Común Centroamericano el efecto inicial fue, incluso, más espectacular en lo que hace al incremento de los mutuos intercambios dentro de la zona, pero también se estancó conforme alcanzó su *techo*. Las economías que lo formaban, al no estar integradas previamente, no poseían un motor propio que la complementación estimulaba, sino que ocurría lo contrario.)

Los inspiradores de la ALALC habían cometido un error sólo imputable a la inexperiencia y el automatismo con que pensaban que la integración progresiva se iría produciendo. La ingenuidad fundamental —hoy corregida y transformada en una propuesta mucho más sutil— consistía en creer que la integración operaría de un modo más o menos simultáneo en los diversos países y que ninguno de ellos podría apartarse de esa fuerte corriente donde la compulsión estaba sostenida por lo evidente de la propia conveniencia. Pero las resistencias en el seno de cada país, por una parte, y el desigual desarrollo relativo —diríamos con más precisión: subdesarrollo relativo— frenaron el proceso y lo convirtieron en algo congelado y crecientemente inoperante para la finalidad integracionista.

Pero los centros de poder económico mundial y regional que orientaron aquel proceso sacaron las conclusiones de lo que estaba ocurriendo y procedieron a introducir las modificaciones del caso. En realidad, a los monopolios no les interesa la integración y el desenvolvimiento *simultáneo* de todos los países, aun cuando fuese en el seno de una unidad continental. Lo que corresponde a su lógica de implantación y despliegue de sus posibilidades tiene en realidad mucho más que ver con la organización de "espacios económicos" con claros "polos de desarrollo" en su seno. La existencia de regiones secundarias y no contempladas en la condensación del esfuerzo de inversión y complementación supranacionales, así, conatural al modelo de integración que propone y lleva adelante el monopolio. De ese

modo, la Cuenca del Plata es el arquetipo de lo que hay que hacer en materia de integración. No en vano es una región donde se han privilegiado todos los mecanismos de integración física y de complementación económica, aun mutilando y soslayando desarrollos nacionales autónomos en el seno de los países que parcialmente integran esa zona.

En rigor, en un momento dado la ALALC se había convertido en un freno al proceso de integración tal como conviene al monopolio. (Habiendo dedicado un trabajo específico a este tema¹, en una ponencia que realizamos en la ciudad chilena de Arica, como parte dialéctica de un simposio internacional organizado para difundir y promover la idea integracionista en los medios académicos, nos permitimos dejar de lado una explicación detallada del mecanismo empleado por las multinacionales a este efecto.) Se trataba de encontrar el vehículo más apto para el paso que se necesitaba dar. Así nació la ALADI.

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) perfeccionó el mecanismo integracionista en el cual la ALALC había fracasado. Se articuló con el proyecto monopolístico de generar zonas de complementación económica y apuntó con esto a la unificación de los mercados. En modo especial fue concebida e impulsada para acentuar la complementación entre el Brasil y la Argentina, utilizando la economía uruguaya como eslabón del proyecto.

Menos felices fueron otros intentos propiciados en el continente. Sobre las grandes dificultades que generó para los empresarios del noroeste argentino la política monetarista y aperturista de Martínez de Hoz, se propuso la creación del GEICOS (Grupo Empresario para la Integración del Centro Oeste Sudamericano) como mecanismo de articulación de las economías de esa zona argentina con las de Bolivia, Paraguay y el norte de Chile. El proyecto quedó sin realización, pese al gran apoyo oficial e ideológico, pero de concretarse habría sido un factor de desmembramiento de la economía nacional.

La estrategia monopolística para América Latina se ha hecho, tras todas estas experiencias, mucho más afinada. Ahora ya no

¹ Ver *Integración regional, instrumento del monopolio*, de Rogelio Frigerio Editorial Crisol, 2ª edición, 1976.

es sólo una propuesta de los niveles ejecutivos de las corporaciones multinacionales, con eco coincidente en el otro extremo del arco ideológico por parte de la retórica de la izquierda. Ahora ha ganado espacio en diversos sectores de la inteligencia, en las burocracias de los organismos internacionales (donde la posición integracionista es unánime) de donde se traslada por una curiosa mimesis fácilmente comprensible a la burocracia estatal de cada país, y en los partidos populistas que —indefensos metodológica y conceptualmente para hacer frente a los planteos integracionistas— se allanan a la intensa ola de difusión ideológica que acompaña el planteo integracionista.

La izquierda, por cierto, no ha revisado su adhesión mecánica al principio. Una activa campaña difunde esas ideas en el plano de las propuestas económicas, en el debate político y su proyección a la política exterior y tampoco escapa el arte: literatura, música y otras expresiones son utilizadas en igual sentido.

La batalla contra el integracionismo que mutila o soslaya la condición nacional hay que librarla, en consecuencia, en todos los frentes donde se plantea. Para esto hay que tener en claro el fondo de la cuestión. La integración está dentro de la perspectiva histórica de todos los pueblos, como lo está todo el género humano que marcha hacia el mundo-uno. Pero esa integración no puede cumplirse sin una previa integración en escala nacional, puesto que en ese caso el proceso dejaría para más adelante la promoción de las regiones y los sectores sociales rezagados. Ni la Patagonia argentina, ni el Nordeste brasileño, para citar sólo dos ejemplos, entran en los planes de las grandes corporaciones para la integración de América Latina. Desierta una, superpoblada otra, ninguna de estas dos regiones reúne los requisitos de mercado con alta capacidad de consumo y de infraestructura y equipamiento económicos necesarios para la integración regional. Por eso sostenemos que la integración nacional debe ser previa, puesto que sólo la nación puede asegurar que todos los impulsos del desarrollo se difundan a la totalidad del espacio territorial de un país, promuevan la movilización de todas sus riquezas y beneficien a todos los grupos sociales.

La integración regional no es sustitutiva, sino simplemente complementaria y subsecuente de la integración nacional; es de-

cir, del desarrollo económico autónomo y armónico de las economías nacionales. Solamente economías nacionales fuertes e integradas pueden concurrir a una economía regional fuerte e integrada. La alternativa es la yuxtaposición de muchas debilidades en un endeble cuadro de integración regional sumamente vulnerable, tanto desde dentro como desde fuera.

Consideramos un error capital el concepto que pretende aplicarse a la integración del mercado latinoamericano, consistente en una suerte de nueva subdivisión internacional del trabajo entre las naciones asociadas, según la cual cada nación produciría aquellos elementos que está en mejores condiciones actuales de lanzar competitivamente al mercado, de tal modo que la integración se haría por vía del intercambio. A través de esta tendencia, las naciones americanas que hasta el momento de empezar a funcionar el dispositivo insinuado no hubieran alcanzado a desenvolver sus propias industrias básicas —siderurgia, química pesada, energía— se transformarían en clientes definitivos de aquellos países que hubieran podido sortear con éxito relativo el impedimento de alcanzar dichas metas económicas.

Este régimen puede ser eventualmente aconsejable en una etapa avanzada de la integración regional, como ocurre en la Comunidad Económica Europea, entre países de sólida estructura nacional-integrada a través de un proceso realizado al amparo de la efectiva vigencia de las leyes del mercado.

La situación de Latinoamérica es, a todas luces, diversa. Por lo tanto, debe abstenerse de realizar una política que al erigirse en sustitutiva de la creación y desenvolvimiento de las economías de base en cada país, se transforme en la práctica en un elemento de diversión en la lucha por la real integración regional de unidades nacionales autónomas y solventes.

Es absolutamente indispensable que cada nación asociada desarrolle al máximo sus propias estructuras básicas, en la medida de sus posibilidades y de la magnitud y accesibilidad de sus recursos, complementados con la cooperación internacional concurrente. Renunciar a este esfuerzo para seguir el

camino fácil de la división regional del trabajo, equivale a aceptar la fatalidad de un desarrollo parcial, unilateral y trunco en cada país. De esta manera, el desarrollo quedaría nuevamente subordinado a la suerte de los convenios regionales, realizados a la postre con las naciones o grupos de naciones que impedirían y distorsionarían el proceso franco del desenvolvimiento de las fuerzas productivas a partir de la industria de base. Por otra parte, tampoco se lograría la necesaria invulnerabilidad de cada estructura nacional.

Insistimos, a la luz de la experiencia universal del crecimiento económico, en que ninguna nación puede delegar o parcializar su proceso de desarrollo. Solamente las entidades nacionales totalmente integradas —salvo las inevitables incapacidades de orden natural y geográfico— pueden contribuir a la firmeza y permanencia de un mercado común regional. Como ocurrió previamente en las naciones desarrolladas que ahora desenvuelven su integración supranacional, nuestros países deben insistir tenazmente en lograr su integración interna, sin perjuicio de marchar paralelamente hacia la integración regional. La medida del éxito de ésta estará dada por la profundidad y extensión de las tendencias a la integración propia.

Así, las naciones latinoamericanas desarrolladas en plenitud, podrán concertar libremente y en pie de igualdad sus acuerdos de intercambio regional y su aporte al intercambio mundial. Cuanto más sólida sea la estructura de los asociados; más sólida será la del mutuo intercambio y más efectiva y conveniente para todos su incorporación a las corrientes del comercio universal.

Rige para América Latina exactamente la misma doctrina aplicable al subdesarrollo en general: desenvolvimiento de los mecanismos y dispositivos técnico-económicos con tendencia a la autonomía nacional; creación y rápido desarrollo de los rubros de las industrias pesadas —energía, siderurgia, química—; capitalización interna; modernización del agro; explotación intensiva de los recursos básicos; sustitución de importaciones, cualquiera fuere su *economicidad*; diversificación y calificación de las exportaciones; mayor productividad; incremento

del producto y del ingreso por habitante; pleno empleo y elevación del nivel de vida. Es decir: desarrollo económico e integración a escala nacional primero y supranacional después.

4. Este-Oeste, Norte-Sur: contexto y prioridades de la política exterior nacional.

La ubicación geográfica de la Argentina en el continente americano, así como sus históricas relaciones con Estados Unidos, son datos decisivos para determinar la ubicación del país en el conflicto Este-Oeste. Por supuesto, el primero de los intereses argentinos ante ese conflicto es que se consolide la tendencia a la distensión y a la coexistencia pacífica. La Argentina comparte con todos los Estados del mundo la primera prioridad de la política de nuestro tiempo: la preservación de la paz. Esto comporta un conjunto de implicaciones para la posición diplomática de nuestro país en las grandes discusiones sobre desarme y control de armamentos. El interés argentino está íntimamente asociado a la descompresión de tensiones entre las superpotencias y a una reducción sustancial de los gastos actuales en materia de armamentos. La cuestión es de singular complejidad, ya que buena parte del proceso tecnológico del que depende el futuro de la humanidad se hace posible en la práctica como un subproducto de los gastos militares.

El desarme causará, sin duda, una renovación en el proceso de innovación tecnológica, actualmente en manos de las grandes corporaciones.

Por otra parte, es cada vez más claro que la paz mundial podrá ser amenazada en la hipótesis de que se frustre un progreso sustancial en las negociaciones que apuntan a un control en las armas estratégicas y en los proyectiles de alcance intermedio. Aun cuando prevalezca la imposibilidad de la mutua aniquilación, es evidente que la existencia de tensiones traba la multiplicación de los efectos benéficos de la paz.

Esta clara ubicación de la Argentina ante los problemas globales no elimina la reflexión con la que se inicia este pa-

rágrafo, a saber la condición americana de nuestro país. Dicha condición supone, también, la inserción argentina en el mundo occidental. Esta no es una afirmación de tipo ideológico, sino un hecho objetivo. La Argentina es un país occidental por su cultura, con todo lo que ésta supone de tradición, historia, idioma y valoraciones políticas y jurídicas. El pluralismo político, la democracia, la consolidación de un mundo en el que los derechos de la persona sean respetados y preservados constituyen intereses específicos de la República; forman parte de sus objetivos nacionales.

Buena parte de esos objetivos y valores son compartidos por la Nación Argentina y la Nación Norteamericana; por el pueblo argentino y los pueblos europeos que constituyen la matriz étnica de nuestra nacionalidad. Es por eso una grave deformación ideológica la que confunde la inserción argentina en el mundo con la de los países afroasiáticos, que llegaron a la independencia nacional en la última posguerra. La Argentina tiene intereses comunes y afinidades importantes con esos países, lo cual no impide reconocer diferencias objetivas entre unos y otros.

Surge también de todo ello la total falta de realismo que implicaría, en función de conflictos específicos como el de las islas Malvinas, jugar con la idea de algún tipo de aproximación especial a los países del Pacto de Varsovia. Aparte de la alta improbabilidad de que la Unión Soviética se dejare arrastrar a discusiones aventuradas, es evidente que esta superpotencia podrá ser, si se quiere, una "reserva diplomática" para la Argentina, pero nunca una reserva estratégica.

Por otra parte, la condición occidental de la Argentina no implica que participe de cualquier tipo de alianza militar con los Estados Unidos. El Pacto de Río de Janeiro es un sistema de seguridad colectiva, pero no una específica alianza militar, como lo es la OTAN. Por ese motivo, no es imposible para nuestro país ser miembro del Movimiento de los Países No Alineados, lo cual exige como condición específica no participar de ninguna de las alianzas militares.

Es cierto que nada obligaba a la Argentina, en 1973, a transformar la condición de país observador en dicho movi-

miento, en la de miembro pleno. Sin embargo, una vez dado este paso, sería un inconsistente vaivén, no sin costo diplomático, abandonar la organización. Por otra parte, la Argentina comparte muchas de las posiciones que son generales en el Movimiento, derivadas todas ellas de la defensa de la soberanía y de la lucha contra el colonialismo. La Argentina, además, desde hace largas décadas, levantó la mayor parte de las banderas que se convirtieron luego en los temas de la acción diplomática de los países nuevos. Con una simple remisión a los principios de su diplomacia tradicional, puede nuestro país definir fácilmente cuál debe ser su actitud en conflictos actuales de tanta relevancia como el de Medio Oriente, en especial la intervención en el Líbano y la cuestión palestina, en Sudáfrica y Namibia, en Afganistán y en Campuchea.

Al mismo tiempo, es también evidente que la Argentina no tiene por qué tomar partido en todos y en cada uno de los numerosos conflictos que haya en el mundo. Hacerlo sería un craso error y la subordinación de intereses nacionales, en asuntos muy importantes, a definiciones que importan a otros países. El apoyo que puede prestar Cuba a la Argentina en los debates multilaterales acerca de las Malvinas es perfectamente coherente con la diplomacia cubana; en cambio, no es coherente para la diplomacia argentina asumir en numerosas otras situaciones una posición similar a la de Cuba, cualquiera sea la importancia que se pretenda dar a las declaraciones sobre el caso Malvinas.

En consecuencia, es indispensable que la permanencia de la Argentina en el Movimiento de los No Alineados no irroge costos innecesariamente altos, que podrían perjudicar a importantes intereses argentinos en el mundo occidental, donde, en definitiva, se encuentra el centro principal de esos intereses. La Argentina tiene que mantener en la Organización de los No Alineados una actuación coherente con toda su política exterior, la cual se resume en la necesidad de afianzar la paz y promover el desarrollo de todos los pueblos.

a) Entendimiento necesario con los Estados Unidos

De lo antes dicho surge la necesidad de un replanteo a fon-

do de la relación argentino-norteamericana que la restablezca en el nivel que corresponde al interés de los dos países. En general, esas relaciones se han caracterizado por su baja intensidad, alternadas con ciclos de marcada hostilidad. Incluso durante el gobierno del doctor Frondizi, cuando algunos aspectos del vínculo bilateral mejoraron tanto que fue posible la concreción de cuatro entrevistas presidenciales (no hubo ninguna otra, ni antes ni después), subsistieron dificultades agudas como las que se pusieron en evidencia en la Conferencia Económica de Punta del Este de 1961 y en la Reunión de Consulta de Cancilleres realizada en la misma ciudad en 1962. Las dificultades argentino-norteamericanas tuvieron que ver en alguna época con la íntima asociación de intereses entre nuestro país y Europa, con la neutralidad en las guerras mundiales (resultante en buena medida de aquella asociación de intereses) y con la falta de continuidad en las relaciones económicas y financieras entre ambos países. La Argentina, por otra parte, fue siempre hostil a las periódicas acciones intervencionistas del gobierno de Washington en el subcontinente americano; ofensivas que a veces tuvieron como destinatario al propio gobierno de Buenos Aires.

En esta etapa todo parece indicar que las áreas de coincidencia superan a las de discrepancia entre los pueblos argentino y norteamericano. Ciertamente las heridas dejadas por el conflicto de las Malvinas constituyen un dato perturbador.

Debe reconocerse, empero, que como el problema de las islas se ha convertido hoy en un caso de seguridad en el Atlántico Sur, es de interés estratégico de los Estados Unidos encontrar una solución al diferendo argentino-británico. La presencia militar inglesa en las islas es una amenaza a la defensa continental. Al propio tiempo, debería ser evidente para nosotros que el factor de mayor peso para imponer una negociación al Reino Unido, es el gobierno norteamericano. Eso quedó demostrado después del 2 de abril. Los borradores de acuerdo que se trabajaron durante la gestión del secretario de Estado y después son antecedentes a los que habrá que volver necesariamente en el futuro.

El tema Malvinas queda como una cuestión de previo y es-

pecial pronunciamiento para el futuro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El sistema de seguridad hemisférica definido en ese tratado quedó severamente afectado luego de las reuniones de consulta efectuadas por la crisis de las Malvinas. Es cierto que el Tratado de Río de Janeiro, como mecanismo implícito de intervención colectiva, estaba obsoleto. Sin embargo no parece realista sostener que la doctrina Monroe haya caducado ni que sea aceptable que en el futuro no quede definida una clara regla de juego en el campo de la seguridad interamericana. La necesidad de excluir la amenaza británica es una finalidad argentina de importancia indiscutible para la seguridad regional y el diálogo con los Estados Unidos sobre ese tema como lo es la exclusión de cualquier mecanismo que intente reiterar las antiguas y fracasadas formas de intervención colectiva.

Tienen también vinculación con el área de seguridad y las relaciones argentino-norteamericanas las discrepancias existentes acerca del desarrollo del plan nuclear argentino. Luego de una etapa inicial de cooperación que se remonta al programa Átomos para la Paz, las disidencias entre Buenos Aires y Washington se hicieron cada vez más profundas. Estados Unidos miró con prevención la construcción del primer reactor experimental argentino con tecnología propia; se opuso a la decisión de incorporar reactores de producción eléctrica; trató luego de evitar que esos programas utilizaran como combustible el uranio natural y como refrigerante el agua pesada; contempló con singular alarma la instalación de una pequeña planta para reprocesamiento de uranio; discrepó en fin con prácticamente todos los pasos dados por la Argentina en la materia. Como nuestro país no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, quedó excluido de cualquier programa de cooperación técnica con Estados Unidos, lo que ha acentuado la tendencia argentina a recurrir a otras áreas, incluida la URSS, para enriquecimiento de uranio y compra de agua pesada. Como podrá dominar en breve plazo el ciclo completo, en el campo de la energía nuclear, es de prever una acentuación de las presiones estadounidenses para obtener la subordinación de todas las instalaciones nucleares argentinas

a un sistema de salvaguardias internacionales y además para conseguir la ratificación del tratado de Tlatelolco, que prohíbe las armas atómicas en América Latina. La experiencia ha demostrado que el objetivo argentino de conseguir una tecnología nuclear propia, en su desarrollo atómico, no es por ahora compatible con los objetivos globales norteamericanos en este campo. Sin embargo, cabe explorar la posibilidad de un acuerdo fructífero a través de la franca identificación de un punto de interés común: la total exclusión de la posibilidad, por parte de nuestro país, de fabricar armas nucleares.

Existen otros asuntos de discrepancia con la Unión como el caso de la Antártida, el derecho del mar y el comercio con la Unión Soviética (no por razones ideológicas sino de competencia). Aparte de eso, nuestro país discordará muchas veces con aspectos específicos de la diplomacia de Washington en el orden mundial, como lo demuestra frecuentemente el caso de Oriente Medio. Las diferencias no eliminan un amplio campo de coincidencias que están íntimamente vinculadas a los objetivos nacionales de desarrollo económico y a la inexorable necesidad de asociar a esos objetivos el aporte tecnológico y financiero norteamericano, sobre todo con inversiones directas. La peculiar coyuntura que ofrece en este momento el grave problema de la deuda externa de la Argentina y de otros países de América Latina representa un espacio muy ancho para el trabajo coordinado en objetivos de interés común.

b) Europa y Japón: lazos propicios para el desarrollo.

La necesidad de una nueva formulación de nuestras relaciones con Europa Occidental y Japón quedó clara durante la guerra de las Malvinas. Los vínculos con Europa fueron muy afectados previamente por el aislamiento que sufrió el gobierno argentino como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno militar. El respaldo total que los países de la Comunidad Europea dieron a Inglaterra durante la guerra, y sobre todo las sanciones comerciales, provocaron un distanciamiento susceptible de ser en parte mejorado por el restablecimiento de las instituciones

constitucionales en nuestro país. Sin embargo, hay derecho a pensar que ese mejoramiento, por sí solo, sería superficial y transitorio.

Subsisten, entretanto, diferencias que tienen su punto de partida en la política agrícola de la Comunidad Económica Europea y en particular en las exportaciones subsidiadas, que han sido continuación natural de aquella política. En la Argentina ha habido dificultad para comprender que esto forma parte de un proceso objetivo e irreversible. No obstante, es evidente que habría interés en explorar posibilidades concretas de coincidencias que disminuyan los perjuicios que la actual situación provoca a los sectores interesados. Esas posibilidades están condicionadas por la realidad del desarrollo económico argentino, de la que podrán surgir verdaderas oportunidades para crear áreas de interés común. Esto lo ejemplifica el caso de Japón, país con el cual la Argentina no ha tenido históricamente ningún tipo de rozamiento diplomático, pero con el cual tampoco ha habido prácticamente ningún desenvolvimiento positivo, a pesar de la creciente significación japonesa en el comercio y las finanzas mundiales.

Europa fue socio tradicional del progreso argentino. La disminución de la importancia relativa de las relaciones bilaterales europeo-argentinas contrasta con el notable incremento que han tenido tales relaciones en el caso del Brasil y, en menor medida en los de Venezuela y México. Esto pone de manifiesto que la intensidad de las relaciones exteriores del país está condicionada por la marcha de los asuntos nacionales y muy en especial los atinentes al desarrollo económico. En todo caso, queda claro que, como con Estados Unidos, las necesidades financieras y tecnológicas del país abren perspectivas para dar a las relaciones con Europa y el Japón un contenido concreto.

c) Relaciones con los países socialistas

La Argentina fue el primer país latinoamericano que después de la última guerra estableció relaciones con todos los países de Europa Oriental, comenzando por la Unión Soviética. Esas relaciones pasaron por ciclos de intensidad variable,

sobre todo por situaciones de política interna y la acción de determinados grupos de interés. La crisis de las Malvinas tuvo como resultado el silenciamiento de algunas voces que entre nosotros se oponían a una intensificación de los vínculos con la Unión Soviética y sus aliados, con el argumento de que perjudicaban los intereses del mundo occidental.

Es obvio que tal argumento respondía a puntos de vista primarios sobre el estado de las relaciones internacionales o bien, directamente, a intereses extranjeros. Una posición opuesta conforme a la cual el país podría optar entre los países occidentales y el mundo socialista, es igualmente una deformación de la realidad ingenua o mal intencionada. Como queda dicho, la Unión Soviética no puede ser considerada como opción estratégica por parte de la República Argentina. Es, por el contrario, un claro interés de nuestro país descartar cuidadosamente cualquier tentación en este sentido, inclusive en el campo aún abierto de la compra de armamentos de procedencia soviética.

Entretanto, puede considerarse que las relaciones comerciales bilaterales, particularmente con la URSS, pasarán todavía por una etapa de florecimiento. Mientras el gobierno de Moscú no decida cambiar sus actuales prioridades de inversión, es probable la repetición de importantes déficit en la producción agrícola soviética, lo cual debería dejar un campo importante para exportaciones argentinas de cereales y forrajes. Es evidente que la decisión de no adherir al embargo decretado por el gobierno de Carter —independientemente de los motivos que apuntalaron esa decisión y a los que ya nos referimos— confirió a nuestro país el prestigio de “proveedor confiable” ante la URSS y deparó colocaciones que superaron los límites comprometidos en el respectivo convenio bilateral. No parece realista pensar que un desequilibrio en la balanza comercial tan pronunciado como el actual sea perdurable. También en este caso parecería que la consolidación de relaciones comerciales con la URSS estuviera atada al desarrollo económico argentino y a los programas de inversión que los hagan posibles. Sólo esos programas podrían abrir la posibilidad de adquirir cantidades importantes de bienes de

capital de procedencia soviética, de suerte que quede en claro al menos, una correcta intención argentina de cuidar la relación de un cliente de tan notoria significación.

Es condición de gran importancia que las relaciones con los países socialistas se mantengan dentro de la corrección que corresponde a la posición independiente de la diplomacia argentina y a la inexistencia de cualquier alineamiento automático por parte de nuestro país. El oportunismo que caracteriza a algunos sectores de la dirigencia argentina sostiene que es posible aprovechar la diferencia a favor en el comercio bilateral con la Unión Soviética y seguir practicando una política anticomunista y antisoviética en las relaciones internacionales. De hecho, una de las mayores exigencias que se plantea en el futuro a la diplomacia argentina es la de mantener relaciones con todos los países del mundo, en un plano que beneficie los intereses nacionales, sin descuidar la ubicación del país en el mundo occidental con el cual los lazos son más estrechos.

5. Recesión, deuda externa y política internacional independiente

En lo que queda de la década es previsible que el problema de la deuda externa condicione severamente la política exterior argentina. En 1982, sólo la atención de los intereses de dicha deuda absorbió el 62 por ciento del valor de las exportaciones. Cuando se habla de amortización, el concepto se reduce prácticamente a los intereses, ya que, se supone, deberá practicarse la renovación del capital. Esta situación es claramente insostenible.

La República Argentina ha llegado a una situación extrema en virtud de la política de subvaluación del tipo de cambio y desindustrialización practicada en los últimos años. A pesar de ello, conviene observar que si no se hubiera incurrido en tales extremos, pero se hubiera omitido la necesaria política de transformación de estructuras que supone el desarrollo económico, el problema sería también muy grave, aunque desde luego de recuperación más simple. La Argentina, en efecto, se endeudó no obstante haber tenido años de saldos favorables en la cuenta corriente del balance de pagos, que a

su vez eran posibles por la carencia de políticas de estímulo del desarrollo, necesariamente ligadas a fuertes corrientes de importación de bienes de capital.

Ante la actual crisis financiera, la Argentina debe recomponer sus relaciones con el resto del mundo a partir de una premisa fundamental: sólo con soluciones económicas de fondo es posible pensar en el pago de la actual deuda, cualquiera sea el mecanismo de refinanciamiento que se imagine, una vez que quede en evidencia la insolvencia generalizada de América Latina.

La política exterior argentina debe en este aspecto ser instrumento destinado a la movilización de los recursos del país. Constituye una fase principal de nuestra diplomacia la captación de recursos externos, específicamente de inversiones de riesgo destinadas a la puesta en marcha de programas capaces de movilizar las riquezas inexplotadas o subutilizadas del país. Esto ocurre en el campo de las actividades primarias desde el petróleo y el gas hasta la pesca y la minería, en los servicios de infraestructura desde la energía a las comunicaciones y, naturalmente, en la industria pesada.

Las inversiones de riesgo serán de alta relevancia inclusive por sus aspectos financieros puros, ya que el desequilibrio que se produce hoy en la cuenta corriente por el pago de servicios reales y servicios financieros y que habrá de aumentar en la medida en que el país importe lo que necesita para crecer, deberá ser equilibrado en parte con inversiones en la cuenta capital por el ingreso de capitales destinados a inversión. Una diplomacia que centre sus esfuerzos particularmente en el desarrollo de las fuentes energéticas (petróleo, gas, carbón, hidroelectricidad, uranio) es indispensable a la soberanía y de necesaria utilización inmediata, ya que es durante la recesión mundial que se puede programar un brusco salto de crecimiento so pena de quedar una vez más rezagados cuando ese ciclo cambie como parece vislumbrarse.

Los aspectos financieros de coyuntura deberán ser atendidos cuidando que las medidas que se adopten no afecten objetivos de largo plazo. La Argentina debe aprovechar las posibilidades que ofrece el Fondo Monetario Internacional para facili-

tar la superación de la crisis, no para profundizarla. Debe apoyar todos los esfuerzos que se realicen en el campo de la diplomacia mundial para que los recursos del Fondo sean acrecentados y se arbitren nuevas fuentes internacionales de financiamiento.

Pero el eje de toda la política exterior nacional debe estar en su articulación con el programa de desarrollo, cuya ejecución al ritmo máximo es la garantía del éxito en el plano interno y en su proyección al mundo. Las nuevas y mayores fuentes de financiamiento son un instrumento de ese fin, puesto que si se aplican en el marco de políticas que perpetúen el subdesarrollo sólo podrán tener como resultado el acrecentamiento de la dependencia y la crisis estructural que resiente la condición nacional hasta hacerla peligrar.

El Estado nacional es el titular de ese proceso. La realidad espiritual y material que le sirve de base es la nación, y el Estado es su expresión política. Su fortalecimiento depende tanto de condiciones políticas como de la situación estructural. Ambos elementos están condicionados por la crisis; son aspectos de ella. Es preciso, en consecuencia, detenerse en el análisis de la crisis y sus manifestaciones institucionales y políticas. Esa descripción y la determinación de las razones que la explican es lo que permite diseñar una acción que pueda superar las dificultades que hoy enfrentamos.

CAPITULO VIII

***INESTABILIDAD POLITICA CRONICA,
CONSECUENCIA DE LA CRISIS***

La nación, en todos sus sectores, actividades y regiones está en crisis. La multiplicidad de sus manifestaciones prueba su condición global, que encuentra diversas formas de expresión, desde la cúspide de la organización estatal hasta los últimos extremos de la vida comunitaria. El Estado nacional está en crisis como institución capaz de garantizar el orden y el funcionamiento elementales de la sociedad. No es sólo una crisis gubernamental; el cuestionamiento alcanza al propio Estado como cima de la arquitectura jurídica de la sociedad nacional cuando hasta el monopolio de la fuerza es disputado con éxito por la subversión o por las variantes espurias de la represión. Ambas por igual desprecian el Estado de Derecho, que es un atributo inalienable de las comunidades modernas. La diseminación del centro de poder, la enajenación de la capacidad de dar directivas coherentes a la sociedad, es un corolario que responde al mismo punto de gravedad. Pero el desmoronamiento institucional es sólo una de las muestras de la crisis, que aparece igualmente en la globalidad de las condiciones de vida materiales y espirituales que reinan en el país, y se extiende como una mancha de aceite por las organizaciones de la comunidad, desde los partidos políticos hasta las más lejanas entidades de los grupos sociales.

La onda expansiva de la crisis —cuyo núcleo es económico-social— tiene una eclosión nítida en la inestabilidad política

que cada vez es más notoria, como lo es también que no depende de las características del ocasional gobierno —que los ha habido de todo signo y color— sino del agravamiento del cuadro de situación nacional. No ha desaparecido la inestabilidad política por la presencia de gobiernos militares o civiles, ni porque éstos contaran con un apoyo inicial largamente mayoritario o porque fuesen presuntamente más respetuosos de las formalidades del juego democrático.

Los últimos años de historia argentina han sido particularmente elocuentes en la demostración de que la fragilidad del esquema político es independiente de la personalidad de los gobernantes; al mismo tiempo que se advierte que la debilidad se precipita en la medida en que no se avanza hacia soluciones profundas. Las legitimidades de derecho o de hecho que acompañaron el comienzo de las distintas experiencias gubernamentales fueron derruidas por los ramalazos de la crisis de fondo.

1. 1963: *Falta la legitimidad democrática*

La formalidad de las instituciones electorales permitió al gobierno radical de 1963 sobreponerse a la pobreza democrática de su origen pues, proscripciones mediante, la Unión Cívica Radical del Pueblo accedió a los puestos gubernamentales con el aval de apenas una cuarta parte de la ciudadanía. Pero esta escasa legitimación no quedó convalidada por una acción política que diera respuesta a los requerimientos de la comunidad. Y cuando el gobierno radical fue desplazado en 1966, principalmente a causa de su inacción para hacer frente a la crisis, el silencio apróbatario de la sociedad argentina testimonió que la legalidad jurídica ya no albergaba ninguna legitimidad política.

El origen viciado, que determinaba además una apariencia institucional igualmente espuria, —como ocurría en un Congreso de suyo irrepresentativo—, confluyó por lo demás con actitudes explícitas de conculcación de la democracia real.

La política del gobierno radical en materia petrolera es

quizás la prueba más acabada de perversidad en la política de fondo, unida al manejo totalitario de los resortes del poder. Los contratos petroleros suscritos durante el gobierno desarrollista, con los cuales se había alcanzado el autoabastecimiento, fueron anulados con un altísimo costo para el país. Un costo que se mide especialmente en la pérdida —nunca después recuperada— de esa suficiencia interna y también en las indemnizaciones injustificadas que se afrontaron para hacerlo, que la Argentina siguió pagando durante años. Pero no sólo se contravino el interés nacional con esa determinación gubernamental, sino que se emplearon todos los resortes oficiales para vituperar a los protagonistas del éxito en el autoabastecimiento de hidrocarburos: el Congreso amañado, la presión sobre la prensa, las acusaciones infundadas de los funcionarios, cada vía de propaganda directa o indirectamente ligada al gobierno fue empleada en esa dirección, para legitimar una política manifiestamente adversa a las necesidades nacionales. Tan escandalosa fue esa malversación del poder público que se llegó a ocultar la investigación parlamentaria de los contratos petroleros —cuyo lanzamiento y primeros pasos habían sido intensamente publicitados— cuando los acusados se convirtieron en acusadores. Y en abierto contraste con la pretendida conducta republicana que se asigna a ese gobierno, los medios de comunicación en manos del Estado, profusamente empleados para difundir las acusaciones contra la estrategia petrolera desarrollista, fueron reiteradamente negados al ejercicio de una legítima defensa política.

La inestabilidad institucional está conectada, sin embargo con la profundización de la crisis, antes que con la cadena de acontecimientos formales. Este es el motivo profundo del estancamiento político del gobierno radical, y su ulterior derrumbe. Fue su falta de respuesta a los problemas del país —a pesar de que todavía podía vivir de la renta del esfuerzo de construcción nacional realizado durante el gobierno desarrollista de 1958 a 1962— lo que minó rápidamente sus bases de sustentación, por encima de las carencias de respaldo electoral en su origen.

2. 1967: El monetarismo disipa el consenso

El siguiente período, la "Revolución Argentina" que inicialmente encabezó el teniente general Juan Carlos Onganía, vendría a probar en seguida la misma tesis en el muy diferente contexto de un gobierno militar. El frondoso, bien que tácito, apoyo que recibió esa gestión en su comienzo, no tardaría en desdibujarse hasta desaparecer íntegramente en medio de convulsiones populares y de conflictos internos en las Fuerzas Armadas. Un esquema de poder que privilegió, tal vez por encima de cualquier otro valor, la disciplina social, terminó arrasado por una revuelta interna. El edificio monolítico del comienzo concluyó en un enjambre de contraposiciones. La sustitución de Onganía por el general Roberto M. Levingston y el posterior desplazamiento de éste por el teniente general Alejandro A. Lanusse, fueron —en cada caso— demostraciones de que la inestabilidad política quebranta también las conformaciones aparentemente más férreas, cuando la estrategia de fondo se desvía de la solución de los problemas nacionales verdaderos. La crisis corroe los aparatos de poder mejor armados, que resultan impotentes para evitar las perturbaciones sociales y su reflejo en conmociones internas.

Así es como, en las postrimerías del decenio 1960-70, mientras la cúpula del poder planeaba sus acciones en distintos tiempos —primero el "económico", luego el "social" y por último vendría el "político"— llamados a ocupar dos décadas, estaba sembrándose el germen de un colapso inmediato. El programa económico que titularizó Adalberto Krieger Vasena, enunciado el 13 de marzo de 1967, contenía los ingredientes que conducirían a ese resultado. Típica expresión de la línea liberal y exponente de las concepciones monetaristas que sobrevuelan los problemas de la economía con desprecio por lo que ocurre en su núcleo productivo, este planteo indujo la contracción del mercado interno, la concentración y la desnacionalización económicas. Y al estancamiento productivo, que significaba también especialmente la falta de proyectos básicos para una remodelación estructural, sobrevendría por supuesto la imposibilidad de atender las demandas sociales.

Esa inestabilidad, implícita en el modelo económico y social, tomó los carices políticos más marcados durante la gestión de Lanusse, cuya convocatoria a elecciones generales a fines de 1972 se cumplió dentro de una marcada descomposición del gobierno y del poder. No le iba en zaga, por otro lado, la dilapidación de la capacidad de decisión oficial que, en vez de apuntar a remover las causas profundas de la fragilidad institucional, se empeñó vanamente en la intención de amañar los resultados electorales. El Ministerio del Interior fue prácticamente confiado al partido radical, en la persona de Arturo Mor Roig —luego víctima del terrorismo—, lo que no puede desvincularse del régimen de doble vuelta (*ballotage*) manifiestamente enderezado a tergiversar el voto popular.

3. 1973: Olvido del programa frentista

El Frente Justicialista de Liberación —conjunción liderada por el general Juan D. Perón— salvó esa trampa con la obtención de la mayoría absoluta en la primera compulsa. Pero cayó en el cebo de aplicar con ribetes populistas una política económica del mismo corte recesivo que la precedente, que fatalmente desembocó en otra frustración social y malogró la indudable capacidad de convocatoria política del partido gobernante. La inestabilidad se instaló a sus anchas en la comunidad a pesar del amplísimo respaldo electoral que suscitó la fórmula peronista, como prueba, esta vez, de que el resguardo de la democracia no puede confiarse a la formalidad de las instituciones.

El llamado a la constitución del Frente que Perón había formulado con su documento "La única verdad es la realidad" donde se esbozaba una acertada propuesta de fondo, quedó tergiversado en la práctica con la aplicación —durante el ministerio de José Ber Gelbard y de sus sucesores— del modelo contrario: con el disfraz de una forzada redistribución del ingreso se articuló una estrategia que encerraba el desenvolvimiento de las actividades productivas.

La implantación del "Pacto Social", favorecida por el ascen-

diente presidencial sobre las masas obreras y avalada por las dirigencias sociales a contramano de los intereses de sus representados, fue la antesala del extrañamiento de la inversión de la economía argentina: el paso más seguro hacia la contracción productiva y a la consiguiente imposibilidad de impulsar el ascenso social. El fundamento democrático del gobierno surgido en 1973 y el halo popular que lo acompañó eran en 1976 antecedentes inútiles para sostenerlo.

La inestabilidad política es consustancial con la crisis, no con una u otra forma gubernamental. Y se ceba en las estrategias de fondo que no apuntan a modificar el basamento estructural del subdesarrollo argentino.

En esta tesitura de mantener intacto el esquema productivo, los extremos aparentemente contradictorios no sólo se tocan sino que se combinan.

Estimular artificialmente el consumo popular sin corregir la estructura productiva es apenas el revés de la misma trama que se explicita cuando se restringe ese consumo, dentro del mismo contexto estructural. No hay oposición sino que es secuencia de un circuito que no varía en lo sustancial: los giros en la distribución del ingreso ocultan el fenómeno decisivo de que éste no crece. Es apenas un sube y baja donde uno u otro sector de la economía nacional aparece temporariamente por encima del restante siempre respecto del mismo nivel de estancamiento. Y el resultado final de esta acción reductora es el creciente deterioro del salario real, la desaparición de las empresas nacionales, la progresiva consolidación del subdesarrollo: presupuestos elementales, en suma, de la inestabilidad política.

4. 1976: El modelo antinacional y antipopular

Las ansias de paz, de orden, de verdadera recuperación del arsenal productivo, contribuyeron a abrir un renovado crédito al gobierno en el otoño de 1976. Pero la insistencia en los caminos probadamente fracasados del receso, la búsqueda estéril de estabilidad sin desarrollo, que fueron practicados hasta los extremos más perniciosos por la estrategia que lanzó Martínez de Hoz y prosiguieron sus sucesores, no podía llegar a otro resultado que el desmoronamiento social y político al

que arribó el Proceso de Reorganización Nacional. Quedaron necesariamente frustrados los propósitos de afianzar las instituciones e inclusive fueron desmentidas por los hechos las pretensiones de evitar desvaríos en la cúspide del poder mediante un elaborado esquema para distribuir y articular la sucesión en las responsabilidades gubernamentales.

Ningún resquicio queda a salvo en medio del naufragio propulsado por la crisis. Al contrario, sus manifestaciones proliferan, se conectan y condicionan en la trama de la desintegración nacional. El colapso de la política económica y social está íntimamente relacionado con la trágicamente errada decisión de afrontar la guerra de las Malvinas, la violencia y la represión se engarzan asimismo con esa política de fondo; los silencios en torno de todas estas cuestiones decisivas también son modalidades de recíprocos encubrimientos; así como la perversión de la moral pública se encadena con el cuadro de disociación y conflictos sociales. Por su lado, el antimilitarismo brota espontáneamente frente a quienes titularizaron la actuación gubernamental.

Es indispensable que se sincere en profundidad la situación política y se asuman las responsabilidades que resultan de ese sinceramiento. Este paso, que es necesariamente previo y condición de la adopción de una política de cambio de fondo, requiere que se den las explicaciones y se asignen las responsabilidades consiguientes en tres aspectos que no pueden omitirse y que están íntimamente vinculados, tal como lo señalamos. Ellos son: *Primero*: Cuál fue el desenvolvimiento íntimo y real de la lucha antisubversiva y cuál es la situación de detenidos y desaparecidos. *Segundo*: Cómo se decidió la adopción de la política económica de Martínez de Hoz y cómo pudo prolongarse durante seis años en medio del repudio popular. *Tercero*: Qué razones decidieron la ocupación de las islas Malvinas y la apertura de la guerra, cuál fue el manejo político que se hizo del conflicto y qué consideraciones políticas y militares determinaron su desenvolvimiento y desenlace.

Este reclamo lo hicimos los desarrollistas en julio de 1982, cuando ya estaba configurada la situación que desembocaría en las elecciones y era manifiesta la voluntad de utilizar el co-

micio como nueva cortina de humo para ocultar los problemas de fondo. La prueba de ello es que hasta hoy, en plena campaña preelectoral, siguen sin darse respuestas aceptables a ninguno de los tres capítulos que componen el sinceramiento.

Dar esas explicaciones, sin embargo, es hoy indispensable. Si todo lo sucedido no tiene directos responsables es la comunidad la que se frustra y se siente responsable.

A pesar de esas múltiples responsabilidades que deben ser imperiosamente asumidas, una observación más honda revela que las propias Fuerzas Armadas —como los restantes segmentos o instituciones de la comunidad— no han podido excluirse de la crisis; por el mismo carácter global que ésta reviste, aunque pueda detectarse su causa última en la estructura económica y social.

Unicamente como reflejo en los cuadros militares, de una crisis que los sobrepasa, puede explicarse que las instituciones armadas hayan convalidado un programa económico y social que contraría tan frontalmente sus cometidos específicos, como el que se auspició en el país. Las propias Fuerzas Armadas que formaron a un general promotor señero y tenaz de la siderurgia como Manuel Savio, a quien siguen venerando, sólo al influjo de perturbaciones muy fuertes han podido respaldar una política económica para la cual es igual producir acero que caramelos. El brazo armado para la defensa de la soberanía no puede justificar una política de fondo que debilita la fuerza fundamental del país, cuya fuente no se encuentra sino en el pleno desenvolvimiento de sus aptitudes productivas. Aun los intereses profesionales de los militares están en abierto contraste con un plan que, por el contrario, frena y destruye esas capacidades nacionales. Una política económica como la imperante en estos años no puede ser nunca “la política de las Fuerzas Armadas”, como aseguraban publicitariamente sus ejecutores. En todo caso, la cúpula circunstancial de las organizaciones militares prestó apoyo a una estrategia contradictoria con los requerimientos de la comunidad y de la eficacia de su propio desempeño.

Está involucrada en esa actitud, naturalmente, una crisis de

representatividad. Pero no es extraño que así ocurra cuando lo mismo sucede en otros segmentos fundamentales de la comunidad, como son los sectores obreros y empresarios.

Más aún, las organizaciones partidarias, cuyo cometido específico es la representación de los intereses sociales, también aparecen vacías de este contenido primordial.

5. 1983: Irrepresentatividad de las dirigencias

La casi totalidad de las formaciones partidarias presenta un nítido divorcio de las necesidades de los factores sociales que supuestamente representan. Esto explica que puedan involucrarse en luchas intestinas, en pujas personales sin ningún contenido doctrinario ni político, mientras están ausentes de la discusión los sufrientes integrantes de la comunidad que presencian atónitos estas disputas estériles. Estas riñas cuentan con frecuencia con la complicidad del aparato de poder, siempre dispuesto a inmiscuirse en la actividad política, especialmente cuando por esta vía se elude el planteo de los problemas de fondo. Distorsión en la que participan no pocos medios de comunicación que suelen ofrecer más tiempo y espacio a los fuegos de artificio de las luchas internas que a la exposición de las dificultades efectivas que sufre la sociedad. Y la falta de representatividad política culmina en el hecho de que esas confrontaciones internas desplazan el análisis de la realidad así como la formulación de propuestas efectivas para remontar la crisis nacional.

Los desarrollistas planteamos estas cuestiones partidarias con honda inquietud autocrítica, preocupados como estamos por evitar que esas tendencias deletéreas se instalen también en el Movimiento de Integración y Desarrollo. Pero igualmente nos enorgullece verificar que la atención de los problemas verdaderos y la formulación de las soluciones adecuadas han sido y son las características dominantes en la actividad de nuestra organización, en todos sus cuadros. El debate interno profundo e intenso y la irrestricta fidelidad a la línea política que surge de esa discusión son los mejores resguardos para que esa conducta no decaiga.

La democracia interna no puede desvincularse de la eficacia política. Y éstas son asimismo premisas indispensables en el camino hacia el ejercicio del poder por quienes expresen el programa y la acción del Movimiento Nacional. Los argentinos reclaman la legitimidad democrática junto con el imperio de la legalidad, como sistema en el que los gobernantes sean una manifestación de la soberanía popular, sometidos al marco del derecho. Pero al mismo tiempo exigen que estos recaudos estén conjugados con propuestas efectivas y conducentes a resolver los problemas nacionales. Por eso es creciente el escepticismo respecto de quienes se postulan para ejercer su representación con retóricas republicanas vacías de soluciones.

La denuncia de la pérdida de representatividad no puede detenerse, empero, en las organizaciones políticas, cuando los portavoces de factores básicos de la sociedad acusan marcadamente igual desconexión de las circunstancias que atraíes sus presuntos representados.

Los sindicatos obreros conservan una parcela de su vigencia, aunque es cada vez más evidente la pérdida de comunicación con sus bases. Estos últimos diez años de historia revelan con elocuencia su distanciamiento. La convalidación de pactos y concertaciones sociales a partir de 1973, mediante los cuales se enajenaba la posibilidad de defender una reivindicación tan elemental de los trabajadores como es su salario, significó su evidente desapego por los requerimientos populares. La respuesta de huelgas "salvajes", de acciones gremiales fuera de los carriles de la organización sindical, fue a su vez elocuente demostración del despropósito que se cometía; un desvío de connotaciones caóticas que derivó en la virtual imposibilidad para los dirigentes sindicales de garantizar la disciplina laboral, que es en esta época indispensable requisito para el ejercicio eficaz de las reivindicaciones. Luego, durante la aplicación del programa liberal y aperturista lanzado por Martínez de Hoz, ocurriría otro tanto con la falta de respuesta contundente a la implantación de esa política, frontalmente adversa al interés de los trabajadores. Verdad es que la ofensiva de la represión a la subversión y al terrorismo y en particu-

lar sus excesos indiscriminados obstaculizaron la acción gremial; pero no es menos cierto que no fue ésa la realidad imperante durante todo el período y, más todavía, que el espacio de desplazamiento de las filas sindicales se utilizó para los ajustes burocráticos o la afirmación de posiciones sectarias antes que para la defensa de los trabajadores y, por ende, del país. Los interminables devaneos sin resultado en torno de la unidad gremial son una acabada demostración de este desvío, como lo es también el ejercicio de las movilizaciones sindicales con exclusivos propósitos partidistas. Y la contraprueba de las capacidades transformadoras que se dilapidaron con esas actitudes quedó expuesta en las muy contadas ocasiones (sólo dos, en las postrimerías de siete años de postergación de la clase obrera) en que se transitó el camino del paro general reivindicativo el acatamiento unánime del conjunto de los trabajadores y la aprobación del gesto por toda la comunidad develaron la repulsa contenida —de alta potencialidad dinamizadora— detrás de la inacción de las cúpulas sindicales. (Un desapego por las luchas sociales que alcanzaba perfil de caricatura cuando, año a año, todos los otoños gremiales quedaban teñidos por la polémica vacía acerca de las delegaciones que concurrían a la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo, que funciona en Suiza, dependiente de las Naciones Unidas.) Este divorcio flagrante de la acción de los dirigentes con las necesidades profundas de los trabajadores —en lo que habría que reconocer aisladas excepciones— es un testimonio inapelable que acusa la falta de representatividad de las organizaciones gremiales. La objetiva participación que les cupo en el "pacto del silencio" sobre la depredación de las condiciones de vida de la clase obrera durante estos años denuncia cómo la crisis global se filtra hasta asentarse inclusive en los estratos sociales más afectados por su incidencia directa.

Ofrecen un cuadro de matices variados las organizaciones gremiales del empresariado argentino, sean del campo, la industria o el comercio. Porque la connivencia de algunas entidades con una política económica que sometía a sus asociados a la competencia subsidiada de importaciones tuvo también el

contraste de movilizaciones de productores en defensa de su labor, asambleas que denunciaron el daño que se infligía a las empresas y a la economía nacional, así como repetidos y múltiples actos de protesta que se esparcieron por todo el país, en especial en las regiones más golpeadas por esa política oficial de receso productivo, de exacción fiscal y de estrangulamiento financiero. No obstante que no se pudieran aunar criterios frente a una degradación cada vez más evidente, que nunca alcanzó a cambiar de sentido, revela también una crisis de representatividad en las filas empresarias; por más que, a medida que se fueron comprobando las consecuencias de la política aplicada, las contestaciones se hicieron más frecuentes y tajantes, con la beneficiosa connotación adicional de que avanzaba simultáneamente el grado de conciencia acerca del núcleo de los problemas económicos y el sentido y la dirección que debe tener la imprescindible rectificación del rumbo.

La crisis de las instituciones políticas y sociales expresa el avance del caos sobre la sociedad, que también hiere a la comunidad en regiones tan sensibles como el empeoramiento mensurable de la salud y el retroceso en los rangos educativos. Pero tampoco escapan del cuadro las condiciones espirituales de la Nación forzada a convivir en medio de sus desgracias con una exposición impúdica de la inmoralidad pública. La impunidad de los crímenes, la tolerancia permisiva de actitudes delictivas que involucran a los poderes oficiales, la perversión del orden, las denuncias calumniosas infundadas y la falta de investigación de las más graves ofensas penales, son rasgos corrientes, en el cuadro de proliferación de la anarquía y de enajenación moral.

6. Movilización social como respuesta al caos

La propia globalidad de la crisis reclama, sin embargo, que las acciones para revertirla sean emprendidas por el conjunto de los factores sociales del país. La amplitud del colapso demanda un compromiso estrecho de los dirigentes sociales y

políticos en la ejecución de un programa que ataque los nudos centrales de esa crisis. La responsabilidad no sólo concierne a los ocasionales gobernantes, sino especialmente a los representantes de los distintos sectores de la comunidad que para defender genuinamente las necesidades de sus bases y del país deben articular su fuerza a fin de encaminar esa propuesta. La acción deliberada y coincidente, llevada adelante con vehemencia y convicción, no puede encontrar obstáculo que la detenga.

No se trata, claro está, de politizar cada reivindicación sectorial con la intención de convertirla en un vector de poder. Ocurre, en cambio, que los legítimos reclamos de los factores sociales alcanzan virtualidad política porque no se les puede dar cabal respuesta sin una modificación diametral en la estrategia de fondo. Y esas demandas auténticas serán así en última instancia coincidentes en este punto, por más que provengan de diferentes orígenes. El reclamo de mejores salarios aparece contradictorio con el interés individual de cada empresa, pero es globalmente concordante con el requerimiento de un mercado más sólido y solvente que conviene al desenvolvimiento empresarial general. La libertad de precios puede, en alguna instancia, significar un recorte en la capacidad real de compra popular; pero es una condición indispensable para la rentabilidad de las empresas y para dar impulso a la inversión, premisas insoslayables para que haya puestos de trabajo productivo con retribuciones salariales suficientes para el pueblo. Y la composición del cuadro con todos los elementos desemboca en la motorización del mercado interno de producción y consumo, que es la plataforma de la recuperación nacional. La atención de los requerimientos sectoriales concuerda finalmente, de este modo, con los fines de orden nacional. Un caso —éste de los ingresos que se ha tomado— que lleva de la mano al planteo de la alianza de clases y sectores, para instrumentar la política de desarrollo e integración que es imperiosa para que sea posible responder, en efecto, a las exigencias de los distintos componentes sociales del país. La acción de los líderes sectoriales, por lo tanto, crece en contenido de política nacional cuanto más se atiene a la defensa

de los intereses de los segmentos que representan. Y la voz de orden última es, por cierto, la articulación de las fuerzas de la comunidad en la misma dirección transformadora.

La década pasada es fértil en ejemplos sobre la eficacia de esta tesitura y el invariable fracaso de las composiciones políticas que pretenden fundarse en el freno de las reivindicaciones sociales. Los pactos y concertaciones, siempre suscritos por cúpulas-dirigentes-a-espaldas de sus representados-bajo mayor o menor imposición oficial, concluyeron siempre con enfrentamientos más agudos e ingobernables de los factores en juego, al paso que convalidaban políticas restrictivas orientadas a embozar temporariamente la crisis en vez de buscarle solución. El vigor transformador de la articulación política de las reclamaciones sociales quedó a la vista, por el contrario, cuanto más convergentes y simultáneas fueron las demandas. Los paros de los trabajadores con aquiescencia patronal sacudieron la conciencia de la comunidad, advirtiendo sobre la necesidad imperiosa de encarar una modificación diametral de la política de fondo; del mismo modo que los cierres empresarios con la aprobación explícita de las organizaciones obreras demostraron igualmente, aunque por el costado inverso, idéntica exigencia de un giro absoluto en la estrategia económica y social como prenda de unión y desenvolvimiento nacional. Lamentablemente, hasta ahora esta senda no ha sido recorrida en toda su extensión. Pero las experiencias indican desde ya que no tardarán en profundizarse: cuando así ocurra la transformación argentina estará inmensamente más cercana.

CAPITULO IX

LA PROPUESTA ECONOMICA DEL DESARROLLISMO

La transformación estructural de la Argentina, en la dirección del desarrollo y en el sentido de la integración nacional, es un imperativo insoslayable. Así se advierte en nuestro cuadro de situación y en la necesidad de transitar el camino por el cual es posible dar respuesta efectiva a los requerimientos cada vez más angustiosos del pueblo, de las clases y sectores sociales que componen la Nación.

Para ello es menester plantear un programa concreto y efectivo, la contraparte de las formulaciones retóricas vacías que abundan en la política argentina, cualquiera sea su signo ideológico. Y hay que partir del balance de los recursos de que dispone el país para la empresa; lo que de inmediato plantea la cruel paradoja que la crisis nacional se verifica en un contexto pleno de riquezas naturales y potencialidad humana y cultural.

1. *La potencialidad argentina*

El protagonista de la crisis que señalamos como de inédita gravedad, cuando celebró hace setenta años su centenario, era la quinta potencia mundial. Es un país que tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados, de las tierras más feraces del mundo, con los climas más benignos, surcado por ríos y

arroyos de manera providencialmente equidistantes, que tiene los minerales críticos por los cuales suspiran todos los países —desde el hierro hasta el cobre— y entre esos dos minerales toda la gama que interesa para su explotación, porque están dados generosamente. Tenemos la segunda o tercera estructura íctica en el mundo (por su interés para la explotación pesquera) y tenemos gas para más de un siglo de desarrollo acelerado. Somos una potencia gasífera y nos damos el lujo de tirar a la atmósfera todos los días entre 7 y 10 millones de metros cúbicos, porque la infraestructura es impotente para llevar el gas a los lugares del consumo.

Tenemos petróleo, tenemos estructuras ricas en petróleo, como lo ha revelado la reciente producción en pozos de la costa austral de 600 y 1.000 metros cúbicos diarios. Tenemos carbón, aunque se dilapida absurdamente. Las reparticiones argentinas no quieren consumir el carbón que se produce en el país; se saca el carbón en Río Turbio y se autocombustiona, se quema solo: no lo usamos, ni lo vendemos, ni lo exportamos.

En este país, con tantas riquezas potenciales, no logramos salir de una crisis recurrente y grave como ésta. No existe otro medio para superarla que el desarrollo acelerado; y ese medio —que ya se aplicó y cuyos resultados se conocen a pesar de las adversidades políticas que sufrió el gobierno que lo llevó a cabo— supone el sinceramiento, el cambio de la estructura productiva y el drástico redimensionamiento del sector público.

El sinceramiento es un elemento necesario pero no suficiente. Si el sinceramiento se aplicara cruzándonos de brazos ante los problemas de la movilización de la riqueza, ante el ritmo y la determinación de las prioridades; si creyéramos, como quienes secundaban la actividad de Martínez de Hoz, que es lo mismo producir caramelos que producir acero; si pensáramos eso y aplicáramos esa concepción de la política económica, tampoco podríamos resolver la crisis. En este país que tiene 28 millones de compatriotas con el más alto nivel de capacidad (tal como lo comprobaron las compañías extranjeras que traían sus dotaciones de obreros y a los quince días los reexpedían a su lugar de origen porque entendían que el obrero criollo era infinitamente

más dúctil, más inteligente y más industrial; con todas estas virtudes tampoco podríamos resolver el problema.

El cambio de fondo tiene que atender a dos series de fenómenos: los de la estructura, con sus prioridades, y los del sector público, que debe ser redimensionado, que debe ser cambiado en su concepción. El Estado nacional tiene que ser fuerte para proteger a la comunidad nacional, no para caer sobre sus espaldas aplastándola.

La totalidad de los problemas que tenemos son muy graves desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, pero a poco que adoptemos en forma orgánica, coherente y simultánea las medidas para atacar las causas del mal y no sus aspectos externos, se sentirá que tocamos el piso y, al mismo tiempo, si movilizamos la riqueza y hacemos todo lo que se ha expuesto como necesario, despegaremos. "Despegar" no significa tener resueltos simultáneamente todos los problemas, pero significa empezar a resolverlos en vez de seguir discutiendo.

Empecemos a contruir y a reconstruir. Hay que debatir los problemas de la reconstrucción del país y obrar en consecuencia. A partir de allí, las condiciones de vida y de trabajo del pueblo tendrán rápidamente un cambio positivo y las empresas no eliminarán sus dificultades, pero empezarán a crecer, a desenvolverse.

La estrategia propuesta para la acción inmediata está estrechamente vinculada con los objetivos estructurales de mediano y largo plazo. Precisamente, de su adopción dependerán las posibilidades de abandonar la actual situación crítica con un cambio profundo que remueva las condiciones del subdesarrollo.

La reactivación del aparato productivo, el redimensionamiento del sector público, la adecuada explotación de los recursos naturales, el pleno empleo de la mano de obra y el capital y la ejecución de un acelerado proceso de inversión, que garanticen la mejora en las condiciones de vida de la población, sólo serán factibles si, en lo inmediato, se adopta un conjunto de acciones que en todos los casos implican el cabal sinceramiento de la economía.

Adoptar estas medidas, y hacerlo con la adecuada simulta-

neidad y celeridad, en las magnitudes necesarias, constituye la condición ineludible para que la política, de conjunto deje de ser un mero ejercicio teórico y adquiera viabilidad fáctica.

La creciente irrealdad de las variables económicas que impere en el país es una de las expresiones más significativas de la crisis argentina. Esto se lo observa en todas las esferas, ya se trate de la cotización de las monedas extranjeras, las tarifas de los servicios públicos, el precio de los insumos energéticos, los índices de producción y productividad, la evolución del desempleo o de los datos de las cuentas públicas.

De esta manera las tergiversaciones enmascaran la auténtica gravedad de la crisis; pero también impiden orientar el ahorro nacional, como impiden orientar al capital extranjero de riesgo hacia las actividades productivas. En consecuencia, si no hay un drástico sinceramiento como paso previo a la modificación diametral de la política de fondo, la producción seguirá fluctuando —en el mejor de los casos— en torno del estancamiento, con sus efectos de negar oportunidades de empleo laboral y, por ende, de agudizar el deterioro en la calidad de vida de la población.

2. Un sinceramiento indispensable

Por eso es insoslayable, para alcanzar el éxito desde el único punto de partida que puede permitirlo que es una acelerada formación de capital reproductivo, que se comience por ese sinceramiento de las variables económicas. Y será una de sus consecuencias inmediatas un cambio en la estructura de precios relativos, que deben tornarse marcadamente favorables a la producción y a la acumulación.

Este sinceramiento tiene que abarcar íntegramente el mapa de la economía, conforme a las pautas necesarias para lograr el objetivo en cada caso.

a) Salarios

El salario mínimo deberá ser elevado hasta el nivel adecuado para atender las necesidades primarias del trabajador, igual que los haberes jubilatorios y pensiones.

Los restantes niveles remunerativos deberán incrementarse hasta la restitución de su capacidad adquisitiva histórica, tanto en el sector privado como en el público; aunque quepa contemplar con criterios específicos los renglones productivos y los burocráticos.

Inmediatamente, a partir de ese nivel, se deberá abrir la discusión paritaria, que importa liberar los salarios y asignar su determinación al debate de obreros y empresarios; con el recaudo de garantizar el mantenimiento de la remuneración de subsistencia en valores reales. En el caso particular de la administración pública —excluidas las empresas del Estado— el aumento de los salarios reales estará ligado al crecimiento global de la economía y a los avances en la reforma administrativa.

El lanzamiento inmediato de un plan de viviendas (intensivo en mano de obra) es, por un lado, un primer paso para reducir la desocupación, que debe ejecutarse con particular énfasis en la localización regional de estos proyectos.

Por la acción conjunta de esos mecanismos aumentará la masa global de los salarios percibidos, y puede preverse que globalmente, su magnitud será equiparable a la reducción de los costos financieros que pagan las empresas.

b) Crédito

En la primera etapa del plan, el crédito deberá ser asignado para cumplir los objetivos específicos de la política económica. Los fondos provendrán esencialmente de los depósitos que capten las entidades y de líneas de redescuento establecidas por el Banco Central.

La totalidad del endeudamiento contraído por los sectores productivos, a la fecha de puesta en marcha del plan, deberá re-financiarse con tasas reducidas y plazos más extensos de amortización.

Para los nuevos créditos el mercado deberá segmentarse. Una línea de crédito tiene que atender proyectos de inversión en sectores básicos, el plan de viviendas y la reconstrucción de las economías regionales; este préstamo será otorgado contra certifica-

dos de obra e implicará un subsidio explícito, derivado de las tasas de interés reguladas. Una segunda línea deberá complementar el propio financiamiento de las empresas para satisfacer sus necesidades de giro; también con tasas de interés que, por lo menos en los primeros meses, deberán ser sensiblemente negativas. Una de sus aplicaciones prioritarias es el financiamiento de los incrementos salariales previstos. Por último, un tercer submercado a tasa libre, para necesidades de corto plazo y consumo. Correlativamente, existirá tasa libre de interés, para depósitos a plazo fijo intransferible a más de 180 días y para mercado de aceptaciones bancarias a más de 180 días.

Deberá mantenerse, para ejecutar este esquema, la garantía oficial de todos los depósitos.

Asimismo, debe establecerse un redescuento consolidado para toda la deuda previa de las entidades financieras con el Banco Central que exceda el monto de los depósitos y el encaje, así como la que pueda resultar de la caída de los depósitos.

Sobre la base de encajes técnicos del 5 por ciento para los depósitos a plazo fijo y del 10 por ciento para las cuentas corrientes, pueden fijarse encajes adicionales que se liberen de acuerdo con ciertas condiciones o para determinados propósitos.

El acceso del sector público al mercado financiero debe ser impedido por completo. La financiación de sus necesidades tiene que efectuarse con expansión de la base monetaria (en el caso particular de las empresas públicas, con líneas de redescuento especiales en función de esta expansión).

Y debe regularizarse la situación del endeudamiento en moneda extranjera con el sistema financiero en el marco del tratamiento global de la deuda externa.

c) Tipo de cambio

Debe establecerse un mercado único de cambios llevando la relación peso-dólar a una cotización lo suficientemente elevada para constituir un "colchón" respecto al nivel de paridad, que permita incentivar aceleradamente tanto las exportaciones como el ingreso de capitales y desestimular las colocaciones en di-

visas. Debe tenderse a la liberación total de este mercado cambiario, donde el tipo de cambio nominal evolucionará en el mercado con la sola intervención oficial a fin de evitar los movimientos especulativos.

Deberán regir temporariamente los derechos a la exportación agropecuaria por la diferencia entre el tipo de cambio de mercado fijado y el de paridad; si bien deberán contemplarse las situaciones específicas como por ejemplo aquellas que observen una caída en las cotizaciones internacionales.

El nivel propuesto para el tipo de cambio obrará como protector de la producción nacional. Paralelamente se debe iniciar la readecuación integral de la estructura arancelaria.

d) Sector público

La política fiscal debe tener por objeto la reducción y el reordenamiento del gasto, junto a la drástica disminución del déficit público. Y tiene que reflejarse en la revisión presupuestaria así como en la racionalización y el redimensionamiento de las empresas del Estado.

Las principales medidas deben orientarse en los siguientes sentidos:

• Presupuesto:

La presión tributaria debe reducirse pronunciadamente. Y la rebaja debe ser orientada, desgravando los consumos de primera necesidad y estableciendo un régimen selectivo de desgravaciones para la inversión.

Esta caída de la presión tributaria, en el período inicial del plan, será parcialmente compensada por el incremento de las retenciones a las exportaciones.

Incrementar las regalías a las provincias.

Centralizar, con carácter de emergencia, la percepción de los impuestos con afectación específica, en "Rentas Generales".

• Tarifas:

Con las últimas medidas financieras, —Bono Nacional de

Consolidación de Deuda y la atectación del superávit del BCRA— el endeudamiento de las empresas en el mercado interno quedó prácticamente saldado, restando únicamente la operatoria normal con proveedores.

Debe adoptarse una actitud similar con la deuda externa, distinguiendo entre el endeudamiento contraído realmente en virtud de las necesidades normales, de aquel a que fueran obligadas las empresas a contratar por motivos distintos.

El criterio general es que, superados los problemas derivados del endeudamiento y puesta en marcha una máxima racionalización operativa, es necesario recuperar los valores considerados necesarios para autofinanciar los niveles de inversión y reducir drásticamente los subsidios.

- Gasto público:

Los objetivos en este caso serán la reducción del gasto corriente y el redimensionamiento institucional.

El primer paso hacia el redimensionamiento institucional consistirá, en la eliminación o integración con los ministerios y secretarías de todos aquellos organismos y cuentas especiales cuya envergadura o carácter funcional no justifiquen su autarquía.

Las cuentas especiales, salvo las destinadas a la administración de fondos especiales (tabaco, energía, etc.) pueden ser eliminadas.

No menos de una veintena de organismos especializados son de inmediato susceptibles de disolución o integración reduciendo drásticamente su plantel.

En materia de reorganización funcional, el punto decisivo es la reducción de planteles. Debe adoptarse como objetivo su reducción en un 20 por ciento, tanto en la Administración central como en las empresas públicas. Dado el impacto que tendría esta decisión, tomada en forma aislada, sobre el nivel general de desempleo, hasta tanto sean absorbidos por la actividad privada (o se acojan a los beneficios jubilatorios) las personas que libere el sector público percibirán los haberes mensuales correspondientes. Se ahorrará de esta forma el gasto improductivo (en términos de bienes y servicios no personales e infraestructura) que origina normalmente un funcionario excedente.

Deberán revisarse los regímenes privilegiados en Previsión Social.

Hay que revisar integralmente el Plan de Inversión Pública

reorientándolo hacia los objetivos prioritarios de crecimiento.

Deben designarse interventores en las Empresas Públicas, que en un plazo no mayor de 30 días establezcan las pautas para, según el caso, su racionalización y reordenamiento, transferencia de la actividad privada o eventual liquidación.

3. Efectos funcionales del sinceramiento

En los primeros meses de aplicación del sinceramiento habría variaciones en los precios relativos debido a los aumentos nominales en los salarios, las tarifas, y en el tipo de cambio.

Estas medidas tendrían también un efecto de sinceramiento inflacionario inicial, que trastocará los incrementos reales de las variables antes citadas, obligando a nuevos ajustes. No provocarían nueva inflación, permitirían que se exprese la que la actual política ha, por una parte, alimentado y por otra, reprimido y sofocado. La inflación larvada —y de todas maneras la más alta del mundo— es el resultado de la insistencia en aplicar una política que ataca sus efectos y no sus causas. El sistema de precios al cual se tiende, en los primeros meses se caracterizará —en comparación con el actual— por lo siguiente: a) En principio, el salario real promedio será igual al presente, aunque con comportamientos diferenciales dentro de la pirámide. A posteriori dependerá de las convenciones colectivas, lo que asegura un aumento real en el promedio. Lo que se espera es un aumento significativo en la masa de salarios pagados. b) Las tasas de interés reales serán negativas, con la eventualidad de que se forme un mercado libre, cuyo tamaño será reducido. c) El tipo de cambio efectivo real será superior al actual. d) Las tarifas promedio tendrán un nivel real más alto que el actual.

Ahora bien, dados estos aumentos en las variables seleccionadas, debe analizarse cómo habrán de comportarse los precios de los bienes: Empecemos por los agropecuarios. En otras circunstancias, la devaluación cambiaria efectiva para estos productos hubiera aumentado dentro del mercado local los precios en igual porcentaje, circunstancia que en este caso será atenuada por la vía de las retenciones.

Debe señalarse, sin embargo, que por el actual estado del

ciclo hay que prever un aumento diferencial entre producción vegetal y animal, donde la primera pierda posiciones respecto de la segunda. Se beneficiará así la ganadería, que debe recobrase imperiosamente luego de la política aplicada.

Los bienes industriales de consumo no durable tienen insumos de origen agropecuario y por tal motivo es previsible que los aumentos registrados en sus precios sean inferiores a los del promedio. Esto permitirá aliviar la presión sobre los salarios. A su vez, los aumentos en los bienes industriales de origen manufacturero, estarán constituidos por incrementos superiores al promedio por dos motivos: uno es el incremento muy importante de costo para los insumos importados debido a la devaluación real del tipo de cambio y el otro por el aumento, también muy importante, de la retribución a las exportaciones de manufacturas industriales, que cuentan a este tipo de bienes entre sus principales integrantes.

Por tanto, las modificaciones propuestas en los salarios mínimos, tipo de cambio, tarifas y tasas de interés, no necesariamente tienen que producir un incremento de los precios de los bienes de tal magnitud que lleve nuevamente a los precios relativos a la misma posición en que se encontraban al inicio del Plan.

Un programa integral, que implemente las medidas en forma inmediata y al unísono, y que aumente los precios nominales en magnitudes diferentes de acuerdo con los distintos objetivos de la política —sin que ello vulnere el objetivo de sinceramiento— no tienen por qué originar aumentos en los precios de los bienes en igual proporción y desatar un proceso de inflación galopante.

La experiencia histórica en este sentido es muy ilustrativa. En la política antiinflacionaria de 1959 se produjo una alteración muy fuerte en los precios relativos sin que ello desatara una inflación incontenible. Por el contrario, luego del tercero o cuarto mes, los precios estaban prácticamente bajo control, y encontrándose próximos a la estabilidad absoluta. Pero debe hacerse hincapié en que la implementación del plan se llevó a cabo —como en el aquí propuesto— en un marco de restricción monetaria y reducción del déficit fiscal, condiciones básicas para que el modelo cierre y que fueran también medidas que pudieron

tomarse porque existía la más impetuosa política de auspicio a la inversión y movilización de la riqueza.

Ese no es el único rasgo común en ambos planes desarrollistas, lo fundamental es que en los dos casos el objetivo perseguido, que entonces se logró, es la reactivación de la inversión productiva para asegurar el desarrollo económico.

4. Un programa capaz de enfrentar la crisis

La superación de la crisis argentina demanda una política de cambio estructural, que resuelva los problemas del corto plazo en el marco de un programa que ataque frontalmente el subdesarrollo. Que induzca la reactivación inmediata del aparato productivo, la elevación del nivel de vida, pleno empleo y el imprescindible redimensionamiento del sector público. Pero que simultáneamente motorice al aprovechamiento integral de los vastos recursos nacionales con que cuenta el país y que auspicie el lanzamiento de grandes proyectos de inversión en las áreas claves de las industrias básicas y la infraestructura de energía y comunicaciones.

Las medidas más urgentes que están planteadas en la propuesta del desarrollismo apuntan precisamente a restablecer el proceso de formación de capital mediante el sinceramiento de las variables fundamentales y a atacar la inflación de manera orgánica y no contradictoria con la supresión de sus verdaderas causas, que son la paralización del aparato productivo y el déficit fiscal.

Este programa se elaboró rigurosamente, sin ninguna proclamación demagógica. Cada propuesta está perfectamente articulada con las demás, así como se verificó la viabilidad de los planteos, que son factibles bajo la única condición de que sean instrumentados conjunta y simultáneamente. Inclusive se comprobaron minuciosamente las hipótesis mediante su cuantificación y se computó la repercusión de cada determinación sobre los distintos aspectos de la realidad. En particular la comprobación estadística demostró que en el contexto del plan la reactivación energética es compatible con el control de la inflación: conforme a esas previsiones, la evolución de los precios acusará el sincera-

miento durante el primer mes de aplicación del plan; luego las tasas de inflación reflejarán elevados niveles, pero no mayores que los medios de estos años a lo largo de no más de dos meses, y después la desaceleración en el alza de los precios se torna veloz y consecuente, al paso que crece la oferta de bienes y servicios por efecto de la reactivación, que declina el déficit fiscal en razón del inmediato saneamiento y que el sector externo refleja la mejoría que inducen las medidas cambiarias.

Lo decisivo es que a pesar de su complejidad el programa guarda una puntual coherencia entre todos sus extremos. La elevación de los salarios y la posterior determinación libre por las convenciones colectivas de trabajo es factible sin una cadena de quebrantos empresarios ni una desaforada escalada inflacionaria, pues las empresas verán de inmediato aliviados sus costos financieros; e inclusive se prevén facilidades crediticias específicas con ese destino, mientras la ampliación del mercado aumenta la rentabilidad de la producción. La atención de las legítimas aspiraciones de los trabajadores revierte en mejores condiciones para el desenvolvimiento empresario. Y el crédito barato —necesariamente con tasas reales negativas— es ineludible para que las unidades productivas puedan desempeñarse sin el ahogo de tasas de interés inaccesibles.

Esas tasas de interés reducidas y el conjunto de facilidades financieras que se postulan son posibles, a la vez, por la articulación de esa política crediticia con las previsiones cambiarias y las relativas al redimensionamiento del sector público.

La devaluación que eleva la cotización inicial de las divisas por encima de su paridad teórica desalienta la especulación cambiaria y permite manejar el costo del crédito sin riesgo de una estampida a los activos externos; al mismo tiempo que promueve las exportaciones, favorece el regreso y la entrada de capitales, y ofrece una protección genérica a los productores locales.

El reordenamiento del Estado permite también el manejo del crédito de acuerdo con las necesidades del plan, comenzando por la descompresión de la plaza financiera, que significa vedar el requerimiento oficial de fondos en el mercado. La financiación fiscal por la vía monetaria, es cierto, incita presiones

inflacionarias; pero se pueden desactivar rápidamente con la drástica racionalización de la administración pública, con la reducción del gasto fiscal y con la actualización de las tarifas, todos recaudos que pueden cumplirse acabadamente en un contexto expansivo. Y esta motorización productiva permitirá asimismo absorber fluidamente el personal público redundante que se disminuye.

Lo determinante es que el sinceramiento y los ajustes económicos se cumplan en medio de una vigorosa reactivación, que multiplicará las oportunidades de empleo productivo y fortalecerá los salarios.

Más aún, la reactivación intensa estará acompañada e impulsada por el avance de los proyectos básicos y de infraestructura, llamados a romper la trama del subdesarrollo que es, donde anida el germen de la crisis nacional.

Este plan abre, en definitiva, las perspectivas para el desarrollo, para el mejoramiento sostenido de las condiciones de vida del pueblo, para la afirmación de la soberanía nacional y para la democracia genuina. La posibilidad de restaurar y sostener el régimen constitucional en el país sólo se afianzará con la puesta en marcha de una política como la propuesta por el desarrollismo, que debe ser puesta en práctica cuanto antes. No es preciso aguardar la instalación de autoridades constitucionales. Al contrario, si se la aplica de inmediato será un firme punto de apoyo para su estabilidad, mientras que si la crisis continúa prolongándose, y conservando los factores que la acentúan, la institucionalización estará sometida a perturbaciones difícilmente superables.

CAPITULO X

LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA

Nunca en la historia ha sido tan clara como ahora la íntima vinculación entre la solución de los problemas materiales que afligen a la humanidad y el camino para alcanzar formas sociales superiores de convivencia, tal como lo es la democracia.

Está claro que la estrecha interdependencia existente entre subdesarrollo, violencia y dictadura se verifica en las dificultades que enfrentan los diversos pueblos de la tierra que luchan por encauzar sus energías nacionales en procesos que les deparen beneficios crecientes. La realidad muestra, sin embargo, que mientras los países mantienen la condición de subdesarrollados el resultado de su esfuerzo se evade inexorablemente al exterior, no logra ser capitalizado por la economía nacional.

La represión, los estallidos de violencia incontrolables, la provocación terrorista, el militarismo, la demagogia, la dictadura, la corrupción, son formas políticas que acompañan el atraso económico y social de gran número de naciones; son el reflejo y la consecuencia del subdesarrollo. Es utópico esperar que la democracia funcione cabalmente y sin interrupciones u obstáculos sobre el fondo económico y social de un bajísimo ingreso por habitante, de una estructura económica desintegrada y de empresas cerradas o semiparalizadas, pues esta situación engendra altas tensiones que necesariamente se expresarán en el plano político e institucional.

En condiciones de atraso y estancamiento, la democracia es

siempre más una forma precaria que una vivencia concreta, en todo el cuerpo social. No puede decirse por eso que la democracia sea enteramente una ficción en las naciones subdesarrolladas. Es una tendencia, llena de dinamismo, que se entrelaza y se confunde con las otras tendencias dinámicas del cuerpo social: la lucha por el desarrollo, la autonomía económica nacional y la distribución equitativa del ingreso. Por eso, las luchas sociales, cuando se encauzan por el pan, el techo, el trabajo y la educación, son inseparables de una total reivindicación de los derechos humanos y los derechos democráticos.

Lo que puede afirmarse es que las instituciones políticas no son más o menos puras, eficientes o justas porque los dirigentes se empeñen en perfeccionarlas en teoría. La ilusión de que la democracia *vive* en sus estatutos y en sus leyes es muy común en nuestras clases ilustradas; en su afán por mejorar las instituciones, reforman sus normas. Es frecuente escuchar de parte de diversos dirigentes que debemos asegurar la democracia, suponiendo que ese loable objetivo depende de la voluntad de quienes tienen o ejercen la representación social y política. La mejor garantía, para ellos, sería firmar un acuerdo que asegurase que no habrá más interrupciones del proceso institucional. La puerilidad e ingenuidad de este planteo se corresponde con una falta de comprensión de las causas de fondo que promueven las rupturas de los procesos institucionales, de un modo que es ajeno a la voluntad subjetiva de los protagonistas.

Mucho más eficaz y conducente es actuar sobre las causas que perturban, adulteran o anulan el ininterrumpido proceso de lucha por la democracia y la libertad plena que vive nuestro pueblo aun cuando no siempre sea explícito.

La perpetuación del subdesarrollo obliga a un permanente pacto entre las dirigencias irrepresentativas que deben acordar el manejo de los instrumentos de poder con que cuenta el Estado para asegurarse el control de las organizaciones y de la sociedad. Hoy se hace una denuncia sobre un pacto militar-sindical, y ese peligro existe. Pero también existe un pacto tácito entre las dirigencias políticas que quieren mantener la situación sin cambios sustanciales y las cúpulas de los diversos sectores sociales y militares para no introducir modificaciones que como

efecto político directo causarían su remoción y el reemplazo por dirigencias más genuinas.

En una economía en expansión, el poder político se desplaza necesariamente de manos de la minoría tradicional a los nuevos elementos y factores del poder económico, es decir, que el poder se universaliza al tiempo que se desplaza la fuerza económica de los grupos tradicionales, representantes de la vieja estructura, el empresariado y los sectores laborales que se transforman conjunta y progresivamente en clases dirigentes. Este proceso profundo de transición crea las condiciones de una democracia auténtica, que da al Estado amplio sustento social.

El gobierno de las minorías, las dictaduras antipopulares, son una expresión del atraso económico, del bajo nivel de vida originado en el lento crecimiento del ingreso. En una estructura económica "bárbara" no puede darse una forma política "civilizada". *A contrario sensu*, una estructura en expansión, en crecimiento, genera formas políticas modernas y de sentido nacional.

La contracción y el atraso económico se expresan en la dictadura y la represión políticas, como medios de contención de las graves tensiones sociales. En cambio, una economía en desarrollo, con una alta tasa de crecimiento, crea una masa mayor de bienes, produce abundancia y bienestar, canaliza las necesidades del pueblo y reduce las tensiones sociales. Esta convivencia social, este bienestar, vigorizan y fecundan las prácticas democráticas. Hay una interacción constante entre desarrollo económico y bienestar social, y entre éstos y el progreso y la perfectibilidad de las instituciones.

La movilización nacional para el desarrollo impone la coparticipación de todos los sectores y todas las clases sociales. El pueblo debe participar en la programación del desarrollo y en las luchas para lograr sus metas en el menor tiempo posible. Esta participación es la forma real y sustancial de la actividad democrática. El desarrollo económico es así un nuevo factor dinámico del proceso democrático.

El desarrollo económico, al crear riqueza, viabiliza la redistribución del ingreso y eleva la capacidad adquisitiva de la población. Este fortalecimiento y expansión de la demanda vigoriza, a su vez, el mercado interno y asegura la colocación de la pro-

ducción incrementada. De esta expansión se benefician, también, los sectores sociales que se nutrían de la vieja estructura: el colapso del esquema agroimportador los condena a la extinción como grupo social, mientras que la creación de nuevas relaciones económicas les da la oportunidad de asimilarse con beneficio a los recientes procesos productivos. El fenómeno se ha registrado en países donde los señores de la tierra, pauperizados ellos también por el deterioro de los precios de las exportaciones primarias y por la creciente contracción de la capacidad importadora, se han desplazado con sus capitales a la producción secundaria, han *industrializado* el agro.

Esto demuestra el carácter universal de los beneficios del desarrollo, ya que ninguna clase queda marginada en una economía en expansión.

Las formas políticas y jurídicas de la democracia se nutren de esta universalidad y aseguran la vigencia del derecho para todas las clases, agrupaciones e individuos. El orden jurídico resulta, así, *efecto* de la convivencia pacífica generada por el impulso económico y el bienestar social. Y es, a su vez, condición primordial para que las fuerzas productivas internas y la cooperación financiera externa cuenten con la garantía de la ley igual para todos.

Esa dinámica interrelación entre desarrollo y democracia, que se expresa en lo que podemos denominar una ley del mundo contemporáneo según la cual el florecimiento de las instituciones democráticas requiere como base el acelerado crecimiento económico, también se extiende al desenvolvimiento de la cultura.

Las culturas nacionales languidecen en el marco del subdesarrollo. Sin medios para difundirse, sin recursos para estimular a sus creadores, quedan relegadas a un plano profundo y soterrado, más como tradición que como expresión viva y dinámica. Junto con los capitales extranjeros, y a través de los grandes medios modernos de comunicación en masa —prensa, cine, radiotelefonía, televisión— se superponen formas culturales exógenas, inclusive idiomas y giros extranjeros que deforman el habla nativa. Esta cultura “prestada” se impone sobre la vernácula y pervierte todo intento de progreso cultural.

La cultura no se importa ni se inventa. Los pueblos la forjan y la transmiten a través de generaciones. El verdadero avance cultural consiste en desarrollar, expandir y perfeccionar el legado ancestral. Para ello, los pueblos deben contar con las posibilidades materiales de realizarse culturalmente y de resistir la tiranía de las formas híbridas importadas.

La promoción económica y el bienestar social determinados por el proceso de desarrollo liberan fuerzas espirituales e impulsos culturales que estaban sofocados por la pobreza y el atraso. La colectividad adquiere los medios propios para desarrollar una cultura propia. El Estado, las instituciones públicas y privadas de educación y cultura se aplican a desenvolver los módulos científicos, técnicos y artísticos que conforman el ser nacional.

Estas reflexiones valen para la cultura tomada en su sentido más general, lo cual incluye todas las manifestaciones de la vida material y espiritual de la comunidad. En forma especial se refiere a la educación, donde la condición de requisito y consecuencia del desarrollo resulta clarísima. La expansión económica y la incorporación de nuevas y modernas actividades productivas requieren contingentes cada vez más numerosos de técnicos y especialistas —y en modo especial promueve el ascenso educativo de todos los grupos laborales—, mientras va creando condiciones cada vez mejores para extender la educación y subsidiar todas las formas de la creación artística e intelectual.

Todo ello ocurre en el marco de la nación, que es el único ámbito que puede conservar en su seno los beneficios del desarrollo y transformarlo en progreso social tangible para sus habitantes, que encuentran así creciente satisfacción a sus necesidades y condiciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales que van desde la posibilidad de disponer de su propia persona hasta acceder a los más altos niveles de las vivencias espirituales y estéticas.

Debemos fortalecer la Nación. Ella no es en el mundo contemporáneo la expresión de una clase ni prerrogativa personal de nadie. Cuanto más fuerte sea la nación, mejor podrá realizarse la libertad de sus miembros.

Estamos ahora en un punto de amenaza a la nación, y toda propuesta realista debe comenzar por reconstruirla desde sus

bases. Reconstruir la nación y construir la democracia no son tareas que puedan separarse una de otra. En ellas están comprendidas todas las clases y todos los sectores sociales.

La forma política para esa acción fundadora no puede ser otra que el Frente Nacional. Para nosotros, el Frente es la expresión concreta de la alianza de clases y sectores que a marchas forzadas emprenden la consolidación de la nación. Está pues muy lejos de los acuerdos de cúpula sin contenido y no tiene necesariamente una forma electoral, cuando las dirigencias políticas que deben expresarlo optan por el aislamiento y el cálculo electoralista.

No hay Frente Nacional sin programa nacional y sin lucha democrática de todos los sectores y las clases sociales.

En el cuadro de la crisis, con sus efectos deletéreos sobre la conciencia y la conducta de las dirigencias, cabe fundar el Frente desde la base hacia la cúspide de la sociedad. Para hacerlo, resulta imprescindible contar con instrumentos aptos para participar de ese proceso de construcción democrática y frentista. El principal de los instrumentos con que contamos es un partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo, y su doctrina. A diferencia de los partidos que se encierran en sí mismos y compiten en el plano de las formas, el desarrollismo se concibe como un elemento orgánico que propaga a los sectores sociales los impulsos para la acción que habrían de converger en la expresión unitaria de todos los argentinos.

Con esa concepción, y apoyados en los elementos metodológicos que hemos tenido oportunidad de exponer en este libro, estamos seguros de contribuir decisivamente a la victoria final del pueblo y la nación que lo expresa.